

UNIDAD 1

“La sociedad y el estado” - Herramientas para el análisis de la sociedad y el estado.

Relación entre el estado y la sociedad. El estado es una asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre un territorio determinado y que busca dominar a una sociedad que está afianzada en este. La sociedad está compuesta por personas con derechos y obligaciones (ciudadanos) que necesitan de un estado para organizarse. De lo contrario, imperaría la ley de la selva donde solo los mas fuertes podrían hacer valer sus derechos.

El estado y la sociedad son dos espacios distintos que se relacionan de forma diversa y compleja. Dicha complejidad está dada por una gran heterogeneidad de actores y grupos que buscan cumplir sus objetivos y, al mismo tiempo, evitar que otros lo hagan.

La división entre la sociedad y el estado tiene una finalidad puramente analítica. En la práctica resulta difícil encontrar los límites entre los diferentes actores y entre quienes los representan y actúan en uno u otro campo. Se puede afirmar que la relación entre la sociedad y el estado conforma una densa y extensa red que se puede denominar **“espacio público”**. Este espacio es el escenario donde se desarrollan los acontecimientos que definen y caracterizan la vida política y social de un país.

Se denominan “actores” a los grupos y a los individuos que generan estrategias públicas para cumplir sus objetivos. Pueden ser actores sociales o políticos, además existen actores religiosos, del mundo deportivo e intelectual. A través del accionar de estos actores, la sociedad genera vínculos ambiguos de obediencia al poder estatal, pero también de resistencia.

La sociedad está integrada por distintos actores que tienen distintos intereses, generalmente contrapuestos o en competencia.

El objetivo de los actores es generalmente satisfacer sus intereses, que son de por sí heterogéneos. Es decir, conseguir recursos de distintos tipos, materiales o simbólicos, para ellos y sus representados.

La relación entre los actores políticos y sociales y el estado adopta formas variadas. Algunas veces esa relación es de cooperación, pero otras, es de conflicto. Este último se agudiza cuando los recursos son escasos o insuficientes.

A veces, existen conflictos aun cuando hay recursos, o bien en otras oportunidades en las cuales no se disputan “bienes materiales”. Este es el caso de dos grupos políticos que confrontan porque ambos aspiran a imponer sus posiciones en diferentes aspectos del estado y sus políticas.

El papel del estado permite, a través de las instituciones, resolver los conflictos evitando la violencia entre los grupos que representan intereses diferentes.

¿Qué son y para qué sirven las instituciones? Son pautas (leyes, códigos, estatutos, constituciones, organismos de estado) que establecen y regulan la interacción entre las personas y los grupos que componen una sociedad.

Levi, establece que las instituciones juegan un papel preponderante en la construcción del poder social de un país ya que: *constituyen una estructura organizativa del poder político, que selecciona a la clase dirigente y asigna a los diversos individuos comprometidos en la lucha política su papel.*

Por esta razón, las instituciones son claves en la vida social. A través de ellas, la interacción humana se encuentra guiada y regulada por una suma de instrumentos formales generalmente formulados desde el estado. Ordenan la vida social y la actividad de sus integrantes.

En caso de intereses contrapuestos determinan quién gana y quién pierde y el costo que debe pagar el que eluda los compromisos formales. Todas las organizaciones que integran una sociedad están sujetas a estas normas, así como también los individuos.

Sin instituciones formales y socialmente reconocidas (leyes), la vida social solo sería una lucha constante, en la que los fuertes podrían imponerse una y otra vez sobre los más débiles. Las instituciones no son naturales, inmodificables ni creadas por una entidad religiosa abstracta. Son la resultante de la disputa por el poder en una sociedad determinada. A la vez que ordenan, también benefician a unos más que a otros.

La ley es un instrumento necesario, imparcial. Los ciudadanos deben aceptar el papel mediador de las leyes y sus resoluciones, aunque estas no los apoyen en alguna ocasión.

La lucha por controlar las instituciones es constante, ya que el que escribe la ley tiene mayores chances de volcarla a su favor que quien no lo hace. La consecuencia de esto: las leyes son el resultado de una lucha de distintos grupos por imponerse y volcar en el texto final sus propios intereses o visiones.

Por ello, las reglas no pueden beneficiar a todos los ciudadanos por igual, aunque la lógica del funcionamiento de las sociedades modernas es que todos deben obedecer lo que las instituciones dictaminan.

La lucha por el dominio del poder en una sociedad es, por una parte histórica y, por otra, coyuntural. Histórica porque posee condicionantes que, a veces, los mismos actores pueden ignorar. Coyuntural porque la lucha por el poder no solo se apoya en el pasado, sino que también ocurre por el interés del momento. Los actores se mueven racionalmente, buscando cumplir sus objetivos y aumentar sus beneficios.

Para constituirse como tales, las instituciones deben surgir del estado y ser reconocidas, aceptadas y regularmente obedecidas por los diversos ciudadanos y actores sociales. No cualquier norma, por más formal que sea, es por eso una institución.

Las decisiones que las instituciones toman están respaldadas por el estado o sus agencias. Para que sean eficientes, no pueden cambiar todos los días, según el criterio del partido, sector o grupo que se encuentre en el poder, sino que deben mantener cierta permanencia temporal. *Deben ser estables en el tiempo para que la sociedad las acepte.*

Si cambiaran todo el tiempo, entonces los distintos actores sociales no sabrían a qué atenerse. Comenzarían a desarrollar estrategias destinadas a eludir el cumplimiento de las normas ya que estas no son previsibles.

La previsibilidad define a las instituciones, sobre todo a las políticas. Más aún cuando se habla de leyes que regulan la distribución del poder en la sociedad.

Existen, también, normas y conductas institucionalizadas pero que no están entre las previstas por las leyes. Son conocidas por todos, pero no están escritas ni provienen del estado. Estas son las “instituciones informales”.

Las instituciones formales tienen características muy definidas: están escritas y codificadas en constituciones, leyes y reglamentaciones diversas. Su incumplimiento trae emparejadas sanciones, públicamente conocidas, por parte del estado y sus agencias particulares.

Las instituciones informales no se encuentran escritas en ninguna parte. Sin embargo, pueden ser aceptadas, conocidas, obedecidas e incluso también pueden ser efectivas.

La corrupción, el clientelismo, el nepotismo, los golpes de Estado, la evasión fiscal, son algunos de los casos más conocidos de esta institucionalidad que combina informalidad y la ambigua presencia estatal.

Ambos tipos de institucionalidades funcionan paralelamente. La ausencia del Estado origina la conducta informal, por eso ambas institucionalidades están vinculadas.

“El Estado”- Herramientas

Desde su creación, el Estado pasa a ser el poder y quien define las reglas del juego en una sociedad determinada. Va generando diferenciaciones entre los habitantes de esa sociedad (los que mandan y los que obedecen).

Antes de que las sociedades humanas crearan un Estado, los seres humanos vivían en lo que se llama “estado de naturaleza”. No había leyes que organizan la vida humana y el más fuerte se imponía una y otra vez sobre el más débil. Se regían por la fuerza y la venganza personal.

Hobbes afirma que el Estado había surgido a través de una especie de acuerdo efectuado entre todos los habitantes de un territorio para organizarse mejor.

Las sociedades que no tenían Estado se organizaban, posiblemente lideradas por algún guerrero o líder carismático que impone sus deseos sin limitaciones.

El Estado permitió organizar la defensa y regular las relaciones entre las personas reduciendo la violencia sin control. Hacia eficiente la agricultura y la ganadería.

Los miembros de la sociedad renunciaron a imponer sus intereses individuales, en favor de la creación de una nueva estructura que servirá para defenderlos a todos de otros grupos rivales.

Max Weber elaboró una definición de Estado. *Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia física.*

De esta definición se deben tomar dos elementos que definen el Estado como tal: Primero, el territorio debe ser indiscutiblemente propiedad del Estado. Segundo, dentro de ese territorio, el Estado es la institución que monopoliza el uso de la violencia legítima. ¿Que significa que monopoliza la violencia? El Estado es el único que puede ejercerla.

¿El estado representa a todos los ciudadanos de una sociedad? *El estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima. Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan.*

Como el Estado consigue hacer efectiva la dominación sobre una sociedad determinada. Lo que la distingue y diferencia de cualquier otro tipo de organización social es el medio que

elige para ejercer dicha dominación: la coacción física (violencia), la que el Estado ejerce de manera legítima y monopólica.

El estado no es representativo de la totalidad de la sociedad. La sociedad es heterogénea y conflictiva, y eso también repercute en el Estado. Dentro de este, hay diferencias. Así, siempre algunos grupos poseen el control del Estado pero deben inducirlo sobre toda la sociedad.

Para ser efectiva, la violencia debe ser aceptada por los ciudadanos y, además, debe ser legal, es decir, prevista en las leyes.

La violencia tiene una explicación que la legítima y una legalidad que la controla, le da forma e impide que se desborde.

Para Karl Marx, el Estado es clasista, favorece a una clase: la clase dominante. En el sistema capitalista la clase dominante es la burguesía. Según el marxismo, el Estado es quien posibilita reproducir la dominación a partir de conservar y proteger al sistema capitalista.

La propuesta de acción política del marxismo es la conquista del poder político por parte de la clase trabajadora.

Según Weber, existen tres tipos de fundamentos de la legitimidad de una dominación:

1. Legitimidad del “eterno ayer”, basada en la costumbre. La obediencia no se reflexiona mucho. “Siempre fue así y siempre lo será”.
2. Sostenida en la gracia o carisma de quien lidera un Estado. Cuando una persona, usando su inteligencia, magnetismo personal, capacidad de liderar grupos o convenciendo a enormes cantidades de población, genera reglas que la multitud obedece sin cuestionar. Weber se centró en la figura dominante del “caudillo”. Le llamaba la atención la idea de la vocación (actitud) por el poder mostrada por el caudillo.
3. Legitimidad basada en la legalidad. Fundada sobre normas racionalmente creadas, como son las leyes. En el mundo occidental del siglo XX las sociedades se ordenan en torno a la ley que coloca al Estado en un papel de árbitro.

A Weber le interesaba la idea de racionalización como un elemento explicativo de la civilización occidental. En este proceso, donde el Estado se convierte en una máquina racional, también aparece otro de los grandes actores en la historia de la burocracia; es decir, quienes llevan adelante día a día la dominación del Estado.

“El Estado y sus tipos”- Herramientas.

Existen diversos niveles de estatidad: Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional. El Estado nacional está constituido sobre la idea de nación. En algunos casos la idea de nación aparece vinculada a la región o una etnia determinada, generalmente, está unida a un espacio territorial determinado. También hay estados que no son nacionales sino regionales, es decir, que agrupan varios países. El ejemplo más clásico es la Unión Europea. Además, hay estados que contienen más de una nacionalidad. Por ejemplo, el Estado nacional español, que alberga comunidades que contienen grupos políticos importantes que buscan separarse de España y constituir sus propios Estados nacionales.

Estado y gobierno son dos conceptos diferentes. Por gobierno se entiende al conjunto de personas y partidos que momentáneamente sustentan el poder a través de cargos electivos o

políticos. Es ejercido por representación de la sociedad. Por lo tanto, es un poder delegado y el método de delegación son las elecciones. El gobierno no le pertenece en forma permanente a quien transitoriamente lo puede estar ejerciendo.

El Estado, está representado por los funcionarios (maestros, policías, jueces, militares) que dotan de autoridad, legalidad y de legitimidad a cada gobierno. El Estado es el que permite a los gobernantes justificar su reclamo de apoyo popular, porque es el Estado quien contiene y representa al conjunto de la sociedad. La constitución nacional es la ley máxima ya que organiza y da forma al gobierno de un Estado.

Los diferentes tipos de Estado se ordenan en base a los procesos de formación, consolidación y derrumbe. El Estado es una construcción histórica cuyas características varían a lo largo del tiempo y que va adoptando diferentes formas.

Estado absolutista. Desde finales del siglo XV y principios del XVI, hasta finales del siglo XVIII. Su conformación fue el producto de innumerables transformaciones, tanto políticas, económicas, sociales y culturales.

El Estado absoluto terminó, en gran medida, con el poder de la Iglesia. Las luchas religiosas impulsaron el proceso de centralización política y permitieron a algunos Estados separarse de Roma y a otros limitar su poder y construir iglesias nacionales. Este régimen político está sometido a normas y regulaciones preestablecidas; no es arbitrario.

El Estado absolutista recompone el orden perdido hacia finales de la Edad Media. La aparición de nuevos actores sociales y económicos, el resurgimiento urbano, la expansión del comercio y las consecuencias de las cruzadas promovieron un fuerte proceso de decadencia de los señores feudales.

El poder político se centralizó en la persona del rey, quien subordinó a todos los estamentos del Estado. El proceso centralizador fue acompañado por el establecimiento de los límites de los territorios. Con el Estado absolutista, el rey recupera todo el control del territorio.

Se hizo necesaria la creación de un ejército nacional de carácter profesional. Hubo que monopolizar el ejercicio de la justicia en manos del monarca. Las prerrogativas que con anterioridad poseían los señores feudales se reemplazaron a través de funcionarios y un sistema nacional administrador de impuestos. El Estado absolutista incorporó a la esfera pública funciones y atribuciones que antes se ejercían en otros ámbitos.

En el ámbito económico era interventor y proteccionista. Se basaba en la teoría económica del mercantilismo según la cual la riqueza de un Estado es producto del desarrollo del comercio y de la acumulación de oro. Importar lo menos posible y aumentar las exportaciones para ganar oro y no gastarlo.

Durante el siglo XVII nacieron nuevas ideas que cuestionan el poder de las monarquías. Allí comenzó el inicio de su decadencia y posterior destrucción.

La Revolución Francesa dio origen a la construcción de un orden político diferente y estableció las bases del nuevo orden político burgués que reemplazaría al absolutismo. El liberalismo y sus principales ideas y principios fueron la base de esta nueva etapa en la historia del Estado. El constitucionalismo, el avance científico y el creciente poder

económico de la burguesía fueron socavando el sistema absoluto y la organización estamental del absolutismo.

Estado liberal. El liberalismo aparece como una concepción cuestionadora del poder absoluto que predominó desde finales del siglo XV y principios del XVI, hasta finales del siglo XVIII. El liberalismo es considerado como la filosofía política de la libertad y del progreso intelectual. Representado como una ruptura de cadenas (sobre todo religiosas y sociales) que inmovilizaban el pensamiento desde la etapa medieval hasta el absolutismo.

Representa el respeto por la vida privada y el constitucionalismo. Dentro del Estado liberal se incluye el ascenso político de la burguesía. Desplazó a la nobleza y se constituyó en la nueva clase social dominante muy vinculada al capitalismo y al comercio.

La formación de este tipo de Estado tiene como antecedentes la Revolución Inglesa y también a la Revolución Francesa.

El Estado liberal se extendió con fuerza hasta la crisis económica mundial de 1929-30. Por estos años aparecerá un nuevo tipo de organización estatal, como preludeo del Estado benefactor de las décadas de los años 1950 y 1960: el Estado interventor y keynesiano.

Este tipo de estado plantea la defensa de los llamados derechos naturales, inviolables, precontractuales e individuales. El hombre en su estado presocial ya posee los derechos a la igualdad, la libertad y la propiedad.

El estado liberal profundizó un proceso de secularización social. Por un lado, la iglesia deja de tener el monopolio de la educación y cultura y, por otro, la legitimidad del gobernante se obtiene en elecciones periódicas. Esta situación va acompañada por la división de poderes, a fin de neutralizar el despotismo. En la esfera económica, el Estado liberal se apoyó en la creencia de las leyes naturales del mercado y en la iniciativa individual. Los liberales creían que el espíritu de lucro individual promueve el beneficio personal y el mejoramiento del conjunto de la sociedad.

Se trata de un Estado no interventor que busca remover obstáculos para que los mercados logren autonomía. Es un Estado mínimo que concibe al mercado como al único capaz de asignar eficientemente los recursos. Según las versiones extremas de este tipo de gobierno, al Estado le corresponde solamente vigilar la seguridad exterior y la de los individuos, la realización de obras públicas y la enseñanza elemental.

Estado fascista. Movimiento político autoritario surgido en Europa en las primeras décadas del siglo XX. No fue lo mismo el régimen de Mussolini en Italia, que el nacionalismo de Hitler en Alemania, ni el franquismo español o el autoritarismo de Salazar en Portugal. No obstante, es posible establecer ciertos rasgos comunes que permitan una comprensión general.

En el Estado fascista vivido en Italia, la sociedad estaba dominada por el terror y la violencia. Fue gobernada por un aparato partidario. La propagand tuvo un papel clave en el desarrollo de estos movimientos, como también el uso de la fuerza contra quienes se opusieron.

El Estado fascista se evidenciaba en todas las esferas de la sociedad. El poder del Estado no posee límites y su control sobre la sociedad era total.

A esas prácticas se le sumaba un fuerte contenido mítico, generalmente basado en el líder. El discurso fascista poseía contenidos racistas. Ideal militarista y vinculado con la expansión territorial, ya que el héroe se destaca venciendo a los enemigos del extranjero.

La llamada “reacción del miedo”, era generada por la presencia del comunismo. Existía un temor sobre que el comunismo llegara a Italia y quitará a los patrones la propiedad de sus fábricas. Para ello, reclamaban un gobierno fuerte y decidido, al mismo tiempo que se generó un rechazo a la democracia liberal, incapaz, desde la perspectiva fascista, de dar soluciones a la realidad imperante.

El discurso fascista, siempre apuntaba a la presencia de un enemigo externo e interno que se opone al destino de grandeza de Italia y al que se debía vencer por la fuerza.

Quienes apoyaban al fascismo consideraban que la democracia no podía poner freno a la revolución social, ni vencerá los países vecinos en una guerra por nuevas tierras. El partido de Mussolini les hablaba a todos los sectores diciéndoles lo que querían escuchar. Prometía mejorar las condiciones de vida y dignidad laboral a los obreros. A los patrones les aseguraba la restauración del orden y la jerarquía social en forma autoritaria. También aseguraba a los nacionalistas la obtención del honor internacional perdido. Todo ello fue aumentando su apoyo social.

Para el fascismo únicamente importaba el Estado y daba prioridad al individuo sólo si sus intereses coincidían con los del Estado. Se opone al liberalismo clásico. El liberalismo redujo el papel del Estado en nombre de la defensa de los derechos del individuo. La concepción fascista del Estado lo abarca todo: fuera de él no pueden existir valores humanos y espirituales. Por esto el fascismo es totalitarismo y profundamente antidemocrático.

En todo fascismo es observable la existencia de un principio de jefatura, en el cual la palabra del líder o conductor es inapelable.

Estado de bienestar o benefactor. Se desarrolló en Occidente a partir de 1945, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Se conformó para dar solución a los efectos económicos y sociales que la contienda bélica había provocado y a los altísimos costos de reconstrucción. Se buscaba una fórmula que permitiera retomar el rumbo del crecimiento y el logro de la estabilidad social. Es el producto de una toma de conciencia de la incapacidad del Estado liberal de dar respuesta a los desafíos de la posguerra.

Es el impulsor de las políticas tendientes a asegurar la vida de la población. En este Estado, las instituciones públicas promueven transferencias sociales, que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Impulsa la prestación de servicios educativos y sanitarios. Esas funciones son acompañadas por una legislación social que protege las condiciones laborales, la prestación de servicios y la calidad de los productos.

El Estado de bienestar busca la inclusión entre las fuerzas del capital y los sindicatos. Fuerte presencia e intervención del Estado, como árbitro y constructor del consenso entre las partes. A nivel político se concreta en: *un pacto entre los sindicatos, las organizaciones empresariales y el Estado. El movimiento obrero renuncia a cuestionar las relaciones de producción basadas en la propiedad privada a cambio de la garantía de que el Estado intervenga en el proceso redistributivo, a los efectos de asegurar condiciones de vida más*

igualitarias, seguridad y bienestar, a través de los servicios, pleno empleo y la defensa de una distribución más equitativa de la renta nacional.

Este tipo de Estado se caracteriza por la búsqueda y el mantenimiento de altos niveles de ocupación, con una fuerte tendencia al pleno empleo. Esta política también incluye salarios altos con el propósito de mantener altos niveles de producción. Con el fin de neutralizar conflictos sociales, el Estado promueve una conciliación entre las distintas clases.

Por otra parte, impulsa la expansión del gasto público y el gasto social, transformándose en un manifiesto prestador de servicios tales como educación, salud, previsión social y jubilaciones.

Es interventor y regulador en la esfera económica. Grava la rentabilidad de las empresas y de los actores económicamente dominantes de la sociedad a fin de promover una eficiente distribución de la riqueza dirigida a los sectores de menores recursos. Se asume como empresario y puede asociarse con el capital privado impulsando la existencia de una economía mixta.

Su vigencia trajo como consecuencias un conjunto de transformaciones altamente positivas. Fue observable un vertiginoso crecimiento de la población en general y de la población activa en particular. Estimuló el aumento del comercio internacional. Se registró un fuerte retroceso de analfabetismo y un significativo incremento de las matrículas educativas en todos los niveles, especialmente, en la esfera universitaria.

A partir de finales del siglo XX, el número de mujeres en el mercado laboral aumentó. También hicieron su entrada un gran número de mujeres en la enseñanza superior.

En la década del setenta, comenzó a agravarse la crisis económica. La crisis del petróleo que rápidamente cuadruplicó el valor de este insumo clave, generó una crisis energética y aumentar los costes de producción. El Estado debía poner cada vez más dinero, el que no era suficiente para mantener el bienestar de la población. En consecuencia, creció el déficit fiscal. Esto hizo surgir una corriente de pensamiento que impregnada de economicismo, dará lugar a otro tipo de Estado.

“El régimen político. Debates y tipología”- Herramientas

Cuando se habla de régimen se hace mención a un conjunto de reglas. Cuando alguien quiere bajar de peso, hace un “régimen”, lo que significa que se impone algunas reglas para comer en determinados horarios o solamente algún tipo de alimentos.

Un régimen disciplinario comprende las reglas que organizan el comportamiento en un ámbito determinado. En el fútbol esas reglas indican que hay diversos tipos de faltas y que según su magnitud pueden castigarse con tarjetas o sin ellas.

El término régimen político se utiliza para referirse a un conjunto de reglas que regulan el elemento más importante en la política de un país, el poder o, más precisamente, la lucha por el poder.

Se define al régimen político como el conjunto de instituciones que establecen las reglas del juego político (definen quién gana y quién pierde). Este conjunto de instituciones conforma la estructura del régimen y determina cómo se organiza y distribuye el poder en una sociedad.

Las instituciones garantizan las formas que adoptan las conductas sociales. Estas conductas refieren, específicamente, a la lucha por el poder y las actividades sociales vinculadas a ella.

Este conjunto de instituciones organiza la manera en que se eligen los dirigentes políticos. Se convierten así en normas que garantizan la previsibilidad. Estas, son medios para la formación de decisiones políticas. De acuerdo con ellas, se determinan los fines que pueden perseguirse a la hora de establecer un régimen político específico. Un régimen democrático, se sustenta en normas que garantizan la participación, el pluralismo, el consenso, la libertad, solidaridad, la igualdad, la tolerancia, entre otros.

Estos elementos pueden variar de acuerdo con el contexto histórico, político y social de cada país y de acuerdo con el grado en que estos valores se hacen presentes. Las democracias varían según el grado de consenso, o de participación, el acceso a los servicios básicos, el control social sobre las decisiones del gobierno, la independencia de la justicia, la relevancia del parlamento, la cultura política, entre otros componentes.

En contraste, en un régimen autoritario predominan los valores dictatoriales tales como la opresión y la represión. El nivel de representación y participación política es relativamente bajo ya que el Estado busca impedir que los ciudadanos participen de los asuntos públicos.

Un régimen puede considerarse totalitario allí donde el pluralismo brilla por su ausencia y donde el poder no se extiende más allá de los pocos integrantes del núcleo gobernante.

Existen diferentes tipos de regímenes. Es decir, existen diferentes alternativas posibles para que las sociedades puedan ordenar la manera en que se accede al poder y la manera en que se ejerce.

¿Cómo se pueden distinguir los diferentes tipos de regímenes entre sí, y establecer con ello, una tipología? “La forma que toma la lucha política es lo que nos permite diferenciar las principales características de un régimen político” - Levi.

A partir de estas características es posible establecer una tipología que dé cuenta de las diferencias y similitudes entre los regímenes. Para determinar de qué tipo de régimen se trata, un momento clave es observar cómo ha sido su llegada al poder.

Se debe examinar si el régimen se impuso en forma violenta o pacífica; si fue legítima o ilegítima; si se ajustó a lo previsto por la ley o fue violando todas las normas al respecto. También hay que ver cómo se ejerce el poder.

“La adopción de un régimen implica de por sí la elección de determinados valores”- Levi. Estos valores serán diferentes según se deriven de distintos tipos de regímenes.

Los valores y creencias que se busca definir “no son necesariamente los mismos que los que existen a nivel de las personas”. Puede darse un desequilibrio entre los valores del régimen y el de las personas o grupos. En este caso pueden surgir conflictos que podrían derivar en la violencia.

Otro componente del régimen es el espacio ocupado por las autoridades. Y aquí cabe diferenciar entre aquellas que se dedican a la adopción de las decisiones y aquellas que se ocupan de aplicarlas.

No es lo mismo régimen que gobierno. Por gobierno se entiende el conjunto de las personas que detentan y ejercen el poder, es decir, las personas que definen la orientación política de una determinada sociedad. También puede hacerse referencia a los órganos que tienen a cargo el ejercicio del poder como tarea, más allá de las personas que detentan el poder.

Es en este sentido que el gobierno forma parte de un aspecto del Estado. Se puede decir que el gobierno simboliza al Estado realizando tareas en su nombre.

“Los sistemas políticos contemporáneos: de la democracia a la poliarquía”- Herramientas

El término democracia es utilizado tanto en las Ciencias Sociales como por la opinión pública y los medios de comunicación, a la hora de describir y explicar el funcionamiento de los sistemas políticos contemporáneos. El concepto es utilizado en los escritos académicos con una gran cantidad de significados diferentes a partir de adjetivos o apellidos que acompañan al concepto y desde diferentes perspectivas analíticas. Esto ha llevado a la “proliferación de fórmulas conceptuales alternativas” incluso contradictorias, sobre qué es o debería ser una democracia.

Democracia directa, democracia deliberativa, democracia social y democracia perceptiva, son conceptos que apuntan a diferentes tipos de democracias que tienen como denominador común la realización de elecciones y la participación, en el gobierno, de un amplio sector de la sociedad.

Robert Dahl se propuso ordenar y sistematizar el concepto partiendo de una visión minimalista del mismo. Asumiendo que aquello que define a un régimen como democrático es el hecho de que sus gobernantes lleguen a ocupar el poder a través de las elecciones competitivas. Esto, llevó a Dahl a plantear un nuevo concepto, que se fue convirtiendo en un referente clásico en los estudios sobre la democracia y la representación: la poliarquía.

El concepto de poliarquía surge para dar cuenta del modo en que funcionan los sistemas políticos occidentales contemporáneos en la práctica concreta y real. Las poliarquías son pues “democracias imperfectas”.

De acuerdo con Dahl, la democracia sería más una idea a perseguir que una realidad concreta. La democracia es un sistema inalcanzable e imposible de adoptar en la práctica. “esto significa que es necesario reconocer que la democracia es un orden utópico e ideal al que no puede aspirar la sociedad, pues su realización no está al alcance de la humanidad”. La poliarquía sería la democracia realmente existente.

Un sistema poliárquico posee varias características que lo definen y distinguen de otros sistemas políticos. En primer lugar, se caracteriza por el derecho al voto, es decir, que la participación de los ciudadanos mediante la emisión del voto, determina quienes conforman un gobierno. Al mismo tiempo, todos los ciudadanos tienen derecho a presentarse a elecciones y competir por los cargos públicos, es decir que hay una igualdad de oportunidades en ese sentido.

PRIMER CARACTERÍSTICA: DERECHO A VOTAR Y A SER VOTADO

En segundo lugar, en una poliarquía se debe garantizar la igualdad del voto. El sufragio es universal y debe estar garantizado para todos los ciudadanos capacitados por la constitución para hacerlo y los votos deben tener todos el mismo valor. Las elecciones mediante las cuales las autoridades son elegidas deben ser libres y limpias.

SEGUNDA CARACTERÍSTICA: LAS ELECCIONES DEBEN SER LIMPIAS Y TODOS LOS VOTOS DEBEN VALER LO MISMO

En tercer lugar debe existir una subordinación de los funcionarios públicos no elegidos a aquellos elegidos popularmente. No debe haber una persona o grupo que posea el poder sin haber sido electo de manera democrática, o sea, a través de elecciones.

TERCERA CARACTERÍSTICA: LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELECTOS NO PUEDEN SER CONDICIONADOS POR PERSONAS SIN REPRESENTACIÓN POPULAR ELECTORAL

Una cuarta característica es que debe existir una alternativa frente al gobierno de turno. En el desarrollo de este sistema político, la capacidad de participación y control sobre los funcionarios electos cobra una especial relevancia. En un sistema poliárquico cada ciudadano tiene la posibilidad de asociarse libremente a los diferentes grupos que sean de su interés.

CUARTA CARACTERÍSTICA: DEBE EXISTIR UNA ALTERNATIVA FRENTE AL GOBIERNO Y CADA CIUDADANO PUEDE ELEGIR A QUÉ GRUPO ACERCARSE.

En quinto lugar, en una poliarquía deben garantizarse diversas fuentes a través de las cuales los ciudadanos reciben información. Hay libertad de expresión. Deben evitarse los monopolios o desequilibrios informativos. Deben existir fuentes de información diversas que cuenten con las garantías para realizar su trabajo y convertirse en un canal efectivo entre el ciudadano y los acontecimientos nacionales o internacionales.

QUINTA CARACTERÍSTICA: LA EXISTENCIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y VARIEDAD DE INFORMACIÓN.

En sexto lugar, en una poliarquía, deben existir opciones diferentes, no solo en partidos políticos o candidaturas en competencia por el poder, sino también respecto a otro tipo de políticas que se implementan. No puede haber un solo partido. Tampoco puede ocurrir que un partido gane siempre las elecciones. Los partidos son en la poliarquía los protagonistas de la competencia y del ejercicio del poder, ya que logran interpretar y representar los intereses heterogéneos que convienen en una sociedad.

SEXTA CARACTERÍSTICA: PARA QUE EXISTA UNA POLIARQUÍA DEBEN HABER PARTIDOS POLÍTICOS DIFERENTES CON IGUALES POSIBILIDADES DE LLEGAR AL PODER Y QUE A SU VEZ, REPRESENTEN PROGRAMAS E IDEAS DISTINTAS.

Para que se cumplan todas las características que conforman una oligarquía, se requiere que exista un marco institucional que garantice su funcionamiento.

Deben existir instituciones que permitan el correcto funcionamiento de una poliarquía. Estas deben regirse por dos principios fundamentales: el de inclusión y el de contestación.

El principio de inclusión se relaciona con la participación de los ciudadanos en asuntos públicos en las decisiones que se toman desde el gobierno. Va más allá de lo meramente electoral.

El principio de contestación se refiere a la existencia de la competencia política, es decir, a la existencia de un sistema con elecciones competitivas sin que el poder sea ejercido de manera monopólica y haya lugar para la alternancia de partidos y/o candidatos en el gobierno.

En la poliarquía los partidos políticos juegan un rol clave. Esto se debe observar en el papel de canales entre ciudadanos y el gobierno (condición de inclusión). El papel de los partidos se debe entender como la voluntad de colocar a sus candidatos en cargos públicos mediante elecciones (contestación).

La obra de Dahl evidencia su preocupación por analizar y comprender el funcionamiento de los sistemas políticos occidentales contemporáneos al trazar el camino hacia la identificación del “gobierno de muchos”, en contraposición con el utópico “gobierno de todos”. Cuando se refiere a muchos (en lugar de todos) queda claro que la poliarquía debe garantizar el acceso al poder de quien gana, pero también los derechos de los que pierden.

En síntesis, el concepto de poliarquía toma las características centrales de lo que se espera de una democracia fundamentada en la inclusión y en la contestación y se erige como un concepto útil para dar cuenta del modo en que se estructuran los regímenes políticos contemporáneos y se conforman los gobiernos.

UNIDAD 2

“1916”- Breve historia contemporánea de la Argentina.

Décadas previas a 1916, la Argentina se embarcó en lo que los contemporáneos llamaban el “progreso”. Los primeros estímulos se percibieron a mediados del siglo XIX, cuando en el mundo comenzó la integración plena del mercado y la gran expansión del capitalismo, pero sus efectos se vieron limitados por diversas razones. La principal fue la deficiente organización institucional, de modo que la tarea de consolidar el Estado fue fundamental; hacia 1880, cuando asumió por primera vez la presidencia el general Roca, se había cumplido lo más grueso, pero todavía se requirió mucho trabajo para completarla.

Lo primero fue asegurar la paz y el orden, y el efectivo control sobre el territorio. Desde 1880, las guerras civiles habían sido casi endémicas: los poderes provinciales habían luchado entre sí y contra Buenos Aires. Desde 1882, el flamante Estado nacional poco a poco fue dominando y subordinando a quienes hasta entonces habían desafiado su poder, y asegurar para el Ejército nacional el monopolio de la fuerza.

Los límites territoriales del estado se definieron con claridad, y las cuestiones internas se separaron de manera tajante de las exteriores, con las que tradicionalmente se habían mezclado: la guerra del Paraguay contribuyó a definir las fluctuantes fronteras de la Cuenca del Plata, y la Conquista del Desierto, asegurar la posesión de la patagonia, aunque los conflictos con Chile se mantuvieron vivos hasta por lo menos 1902, y reaparecieron más tarde.

Desde 1880 se configuró un nuevo escenario institucional. Apoyado en los triunfos militares, se consolidó un centro de poder fuerte, cuyas bases jurídicas se hallaban en la Constitución que según las palabras de Alberdi, deben cimentar “una monarquía vestida de república”. Se aseguraba allí un fuerte poder presidencial, ejercido sin limitaciones en los vastos territorios nacionales y fortalecido por las facultades de intervenir las provincias y decretar el estado de sitio. Los controles institucionales del congreso aseguraban que no derivara en tiranía.

Las facultades legales fueron reforzadas por una práctica política en la que se controlan simultáneamente los resortes institucionales y políticos. Se trataba de un mecanismo que, en sus versiones más extremas y menos prolijas, fue calificado de unicato. El ejecutivo lo usó para disciplinar a los grupos provinciales, pero a la vez reconoció a estos un amplio margen de decisión en los asuntos locales. El poder encontró distintas formas de hacer participar de la prosperidad a las elites del interior, particularmente a las más pobres, y asegurar así su respaldo a un orden político al que ya no podían enfrentar.

En sus rasgos básicos, las instituciones del Estado -el sistema fiscal, el judicial, el administrativo-, en muchos casos eran apenas esbozos que debían ser desarrollados. Escaso de instrumentos y medios para la realización de muchas de las tareas más urgentes, como educar o fomentar la inmigración, el Estado se asoció inicialmente con sectores populares, pero a medida que sus recursos aumentaron, fue expandiendo sus propias instituciones, y llegó a adquirir consistencia y solidez mucho antes que la sociedad. Esta, creció inicialmente de la organización y de los núcleos capaces de limitar su avance.

El Estado actuó para facilitar la inserción de la Argentina en la economía mundial y adaptarse a un papel y una función que -se pensaba- le cuadraba a la perfección. Ese lugar implicaba una asociación estrecha con Gran Bretaña. Limitados al principio a lo comercial, esos vínculos se estrecharon luego de 1850, por la gran expansión de la producción lanar y la contemporánea profundización de la industrialización de Gran Bretaña, convertida ya en el taller del mundo. Se profundizaron las relaciones comerciales y se anudaron las financieras, especialmente por el sólido aporte británico al costo de la construcción del Estado. En la era del imperialismo, Gran Bretaña empezaba a afrontar la competencia de nuevos rivales -Alemanes primero y luego Estados Unidos- y el mundo entero fue dividiéndose en ramas imperiales, formales o informales.

Incapaz de afrontar la competencia industrial, se refugió en su imperio y sus monopolios, y optó por las ganancias aseguradas por inversiones privilegiadas, de bajo riesgo y alta rentabilidad.

En la Argentina, entre 1880 y 1913, el capital creció casi veinte veces. A los rubros tradicionales -comercio, bancos, préstamos al Estado-, se agregaron los préstamos hipotecarios sobre las tierras, las inversiones en empresas públicas de servicios, como tranvías o aguas corrientes, y sobre todo ferrocarriles. Las empresas británicas se aseguraban una ganancia que garantiza el Estado, que también otorgaba exenciones impositivas y tierras a los costados de las vías por tenderse.

Los contemporáneos vieron en la conexión anglo argentina los aspectos positivos: si los británicos obtenían buenas ganancias por sus inversiones o la comercialización de la producción local, dejaban un amplio campo de acción para los empresarios locales, los grandes propietarios rurales, a quienes quedaba reservada la participación mayor en una producción que fue posibilitada por la infraestructura instalada por los británicos.

Algunas grandes líneas troncales sirvieron para integrar el territorio y asegurar la presencia del Estado en sus confines, mientras que otras cubrieron densamente la pampa húmeda, lo que posibilitó -junto con el sistema portuario- la expansión de la agricultura primero y de la ganadería después, cuando los mismos británicos instalaron el sistema de frigoríficos.

Esa expansión requiere abundante mano de obra. El país había venido recibiendo cantidades de inmigrantes en forma creciente a lo largo del siglo, pero a partir de 1880 las cantidades crecieron abruptamente. Los inmigrantes demostraron una gran flexibilidad y adaptación a las condiciones de trabajo: se concentraron en las grandes ciudades, en la construcción de sus obras públicas y la remodelación urbana, pero desde mediados de la década siguiente, al abrirse las posibilidades en la agricultura, se volcaron masivamente al campo tanto quienes venían para instalarse en forma definitiva como quienes viajaban cada año para trabajar en las

cosechas. Luego de la crisis de 1890, se atenuó la llegada, y los que retornaron fueron año a año, más que los que llegaban, pero el ritmo se restableció en la primera década del siglo XX, cuando los saldos positivos superaron el millón.

Las inversiones extranjeras fueron gestionadas y promovidas con amplias garantías, y el Estado asume el riesgo en las menos atractivas, para luego transferirlas a los privados cuando el éxito estaba asegurado. Se aceptó y se estimuló la depreciación, en beneficio de los exportadores. El Estado se hizo cargo de lo que se llamó la “Conquista del Desierto”, de la que resultó la incorporación de vastas superficies de tierras apta para la explotación que fueron transferidas en grandes extensiones y con un costo mínimo a particulares poderosos y bien relacionados, pero esta acción estatal resultó decisiva para la consolidación de la clase terrateniente.

Aunque beneficiarios de la generosidad del Estado, los terratenientes de la pampa húmeda manifestaron una gran capacidad para adecuarse a las condiciones económicas y buscar el máximo posible de ganancias. En el Litoral, donde escaseaba el ganado y la producción podía trasladarse fácilmente por los ríos, se inclinaron por la agricultura; allí donde la tierra era barata, optaron por la colonización, que la valorizaba, pero cuando el valor aumentó prefirieron el sistema de arrendamiento. En Buenos Aires perduró la gran propiedad indivisa y la explotación del lanar, hasta que la instalación de los frigoríficos hizo rentable la explotación del vacuno refinado con las razas inglesas y destinado a la explotación. Entonces, las necesidades de praderas artificiales estimularon la colonización agrícola: las tierras se destinaron alternativamente a cereales, forrajes y pastoreo, por lo cual la agricultura se asoció definitivamente con la ganadería.

Las condiciones del mercado mundial, extremadamente cambiantes e incontrolables desde este lejano sur, hacían conveniente mantener la flexibilidad para elegir, cada año, la opción más rentable.

A partir de la tierra, se constituyó una clase empresaria concentrada y no especializada, una oligarquía, que desde la cúspide controlaba un conjunto amplio de actividades.

Los inmigrantes que durante la expansión agrícola se convirtieron en arrendatarios y disponían de un capital limitado prefirieron alquilar por tres años extensiones importantes de tierra antes que adquirir definitivamente una parcela más pequeña.

En esa primera etapa, este comportamiento altamente flexible permite aprovechar al máximo los estímulos externos y posibilitó un crecimiento verdaderamente espectacular. Desde 1890, la expansión de la agricultura fue continua, y el campo se llenó de chacareros y jornaleros. Entre 1892 y 1913, se quintuplicó la producción de trigo, de la cual la mitad se exporta. En este lapso las exportaciones se multiplicaron cinco veces mientras que las importaciones lo hicieron en proporción algo menor.

En vísperas de la guerra, la Argentina era uno de los principales exportadores mundiales de cereal y carne.

Si las ganancias de los socios extranjeros fueron elevadas, también lo fueron las del Estado, provenientes fundamentalmente de los impuestos a la importación, y las de los terratenientes quienes, dadas las ventajas comparativas con respecto a otros productores del mundo, optaron por destinar una porción importante de estas al consumo.

El ingreso rural se difundió en la ciudad multiplicando el empleo y generando a su vez nuevas necesidades de comercios, servicios y finalmente de industrias, pues en conjunto las ciudades, sumadas a los centros urbanos en las zonas agrícolas, constituyeron un mercado atractivo. El sector industrial alcanzó una dimensión significativa y ocupa a mucha gente. Los frigoríficos, molinos y algunas fábricas grandes, elaboraban sus productos para la explotación del mercado interno. Los textiles y alimentarios, suministraban los productos elaborados con materia prima local, y un extenso universo de talleres completaba el abastecimiento del mercado interno. Este sector industrial creció asociado con la economía agropecuaria, expandiéndose y contrayéndose a su ritmo y nutriéndose de capitales extranjeros.

El interior, incapaz de incorporarse al mercado mundial. No llegaron allí inversiones ni inmigrantes, aunque si el ferrocarril, que, en algunos casos, al romper el aislamiento de los mercados, afectó algunas actividades locales. Hubo mayores gastos realizados por el Estado nacional, que sostuvo en parte la administración y la educación. Pesaron el atraso relativo y las diferencias cada vez más manifiestas entre la vida agitada de las grandes ciudades del Litoral y la de las somnolientas capitales provinciales. Las excepciones mas importantes se produjeron en Tucuman primero y Mendoza despues, en torno a la producción de azúcar y de vino. Ambas prosperaron notablemente para abastecer a los expansivos mercados del Litoral. Fue el mismo Estado el que le permitió el despegue inicial de esa industria regional, construyendo los ferrocarriles y financiando las inversiones de los primeros empresarios de ingenios y bodegas.

En torno al Estado se conformó un importante sector de especuladores, intermediarios y financistas cercanos al poder, que medro en concesiones, préstamos, obras públicas, compras o ventas, especialmente en la década de 1880, cuando el Estado inyectó de forma masiva credito a traves de los bancos garantidos. La estrecha vinculación de la economía argentina con la internacional la sensibilizó a sus fluctuaciones cíclicas, como había ocurrido en 1873. El fuerte endeudamiento convertía el servicio de la deuda externa en una carga onerosa, solventada con nuevos préstamos o con los saldos de comercio exterior, y ambas cosas se reducen drásticamente en los momentos de la crisis cíclica, generando un periodo mas o menos prolongado de recesión.

La inmigración masiva y el proceso económico remodelaron profundamente l a sociedad argentina.

Al interior fueron pocos, con excepción de lugares como Mendoza. En el Litoral, muchos se dirigieron al campo, y la mayoría se instaló precariamente, como arrendatarios. Como todos los inmigrantes, se jugaron al ascenso economico rapido, que algunos lograron y muchos no.

Al principio la mayoría iba a las ciudades, pues allí estaba la más amplia demanda de trabajadores. Las grandes ciudades, Buenos Aires, se llenaron de trabajadores, en su mayoría extranjeros, pero también criollos. Vivían hacinados en los conventillos del centro de la ciudad, próximos al puerto donde muchos trabajan, o del barrio de La Boca. Los extranjeros eran además extraños entre sí, pues ni siquiera los italianos separados por los diferentes dialectos, podían comunicarse entre ellos.

Muchos de los inmigrantes, impulsados por el afán de “hacer la América” y quizá volver ricos y respetables a la aldea de donde habían salido miserables, concentraron sus esfuerzos

en la aventura del ascenso individual o más exactamente familiar. Quienes no lo lograron o fracasaron después de un éxito inicial -y no volvieron a la patria- permanecieron dentro del conjunto de los trabajadores, renovado de manera permanente con los nuevos llegados. “La aventura del ascenso” consiste en llegar a tener la casa propia y quizá un pequeño negocio o taller también propio. El camino pasaba por la educación de los hijos: la educación primaria permitía superar la barrera idiomática que segregaba a los padres; la secundaria abría las puertas al empleo público o al puesto de maestra, dignos y bien remunerados. La universitaria y el título de doctor eran la llave mágica que permite ingresar a los círculos cerrados de la sociedad constituida.

Lo que se constituyó fue una sociedad nueva, que permaneció por bastante tiempo en formación, en la que los extranjeros y sus hijos estuvieron presentes en todos los lugares, los altos, los medios y los bajos. Fue abierta y flexible, con oportunidades para todos. También fue una sociedad escindida doblemente: por una parte, el país modernizado se diferenció del Interior tradicional; por otra, la nueva sociedad se mantuvo bastante tiempo separada de las clases criollas tradicionales, y las clases altas, un poco tradicionales pero en buena medida también nuevas, procuraron afirmar sus diferencias respecto de la nueva sociedad.

Mientras en la nueva sociedad los inmigrantes se mezclaban sin reticencias con los criollos y generaban formas de vida y de cultura híbridas, las clases altas se sentían tradicionales, afirmaban su argentinidad y se creen las dueñas del país al que los inmigrantes habían venido a trabajar. Esos mismos hombres se reservaron el manejo de la alta política. Esta fue una actividad de “notables”, provenientes de familias tradicionales, decentes y educados, aunque no necesariamente ricos, pues en la política abundan los parvenus, que harían allí su fortuna. El sistema institucional era perfectamente republicano pero las prácticas electorales de la época y sobre todo la fuerte injerencia del gobierno en cada uno de sus pasos, tendían a desalentar a quienes quisieran participar en esa competencia. En la cúspide del sistema político, la selección del personal pasaba por los acuerdos entre el presidente, los gobernados y los notables de prestigio reconocido. En los niveles más bajos, la competencia se daba entre los caudillos electorales, que movilizaban maquinarias aguerridas, capaces -con complicidad de la autoridad- de saltar atrios y volcar padrones. El sistema -estigmatizado luego por la oposición política- descansaba sobre una escasa voluntad general de participación en las elecciones. La constitución de la ciudadanía fue aquí lenta y trabajosa. Poco el escaso interés de los extranjeros por nacionalizarse y participar de las elecciones, perdiendo algunos privilegios y garantías inherentes a su condición de tales, y esta situación inquieto incluso a los espíritus más lúcidos de la elite dirigente, preocupados por asentar las bases consensuales del régimen político.

Falta de competencia entre partidos políticos alternativos y su estructuración en torno de un partido único, cuyo jefe era el presidente de la república. Ausentes los mecanismos de alternancia, raquíticos los espacios de discusión pública amplia, los conflictos se negociaban en círculos reducidos, entre la Casa Rosada y el Círculo de Armas, la redacción de un diario y los pasillos del Congreso. El sistema era eficaz cuando se trataba de diferencias en torno de convicciones comunes, pero reveló sus debilidades cuando las discrepancias se hicieron más serias, a partir de 1890. Quedó claro entonces que en el régimen político no había lugar par

partes con intereses divergentes y legítimos, capaces de discrepar y de acordar, y el único, que había contribuido a la consolidación del régimen y a la eliminación de las antiguas confrontaciones, reveló sus limitaciones para canalizar las propuestas de cambio de una sociedad que se estaba constituyendo y diversificando, y en la que se desarrollaban intereses variados y contradictorios.

Moldear y organizar esa sociedad en formación, según sus definidas convicciones acerca del progreso, y generar en ella el consenso necesario para las vastas transformaciones que se estaban desarrollando fue quizá la preocupación principal de la elite dirigente. Una masa de extranjeros, desarraigados, escasamente solidarios, solo interesados en lucrar y en volver a su terruño, despertaba la indignación de quienes habían visto otrora en la inmigración el gran instrumento del progreso. En el empeño de formar a esa masa, apareció un conjunto de competidores importantes: la Iglesia en primer lugar; las asociaciones de las colectividades extranjeras, y particularmente la italiana, y luego los grupos políticos contestatarios, sobre todo los anarquistas. Frente a ellos, ese Estado todavía débil presentó combate y triunfo. En forma progresiva fue extendiendo su larga mano visible sobre la sociedad, tanto para controlar su organización como para acelerar los cambios que aseguraban el progreso buscado.

Las leyes de registro civil impusieron la presencia del Estado en los actos más importantes de la vida de los hombres -el nacimiento, el casamiento y la muerte-, hasta entonces regulados por la iglesia. Esa presencia del Estado se reforzaría en la regulación de la higiene, del trabajo, y sobre todo con la ley de servicio militar obligatorio, que, al llegar a la mayoría de edad, colocaba a todos los hombres en situación de ser controlados, disciplinados y argentinizados. Pero en la década de 1880 el gran instrumento fue la educación primaria, y hacia ella se volcaron los mayores esfuerzos. Esta, según la ley 1420 de 1884, fue laica, gratuita y obligatoria. Desplazando tanto a la iglesia como a las colectividades, que habían avanzado mucho en este terreno, el Estado asumió toda responsabilidad: con la alfabetización aseguraba la instrucción básica común para todos los habitantes, y a la vez la integración y nacionalización de los niños hijos de extranjeros.

Aunque la elite fue constitutivamente cosmopolita, crítica de la herencia criolla o hispana y abierta a las influencias progresistas de las metrópolis, tuvo a la vez una temprana preocupación por lo nacional, tanto para afirmar su identidad en el país aluvional como para integrar en ella la masa extranjera. La corriente europea que más se adecúa a su filosofía espontánea de vida fue el positivismo, en su versión spenceriana, por su valoración de la eficiencia y el pragmatismo, del orden y el progreso, en todo adecuados a una sociedad que por entonces -llegando al Centenario de la Revolución de Mayo- se definía por su optimismo.

El Centenario de la Revolución de Mayo fue la ocasión que el país, alegre y confiado, tuvo para celebrar sus logros recientes. Cada una de las colectividades extranjeras honró al país y a sus espectaculares logros con un monumento alusivo. Pero el discurso oficial, vacío, hueco y conformista, apenas alcanzaba a disimular la otra cara de esta realidad: una huelga general amenazó frustrar los festejos y una bomba en el Teatro Colón puso en evidencia las tensiones

y la violencia, a la que desde la sociedad establecida se respondió con los primeros episodios de terror blanco y con una draconiana ley de defensa social.

Parte de los males se atribuían a la misma élite, su conformismo fácil y su abandono de la tradición patricia y la conciencia pública. Pero el punto central del cuestionamiento era el cosmopolitismo de la sociedad argentina, inundada por la masiva presencia de inmigrantes y dirigida por quienes habían buscado su inspiración en Europa.

Pero más allá de estas manifestaciones extremas, preocupaba la disolución de un ser nacional que algunos ubican en la sociedad criolla previa al alud inmigratorio y otros, más extremos, filiación polemicamente en la ruptura con la tradición hispana. Se dibujó en la conciencia de la elite la imagen de unas masas torvas y oscuras, desligadas a todo vínculo, peligrosas, que acechaban en las sombras y que comenzaban a invadir los ámbitos hasta entonces reservados a los hijos de la patria. La respuesta en una afirmación polémica y retórica de la nacionalidad: la solución era subrayar la propia raigambre criolla, argentinizar a esa masa extraña, y a la vez disciplinarla. Se dibujaron dos actitudes en la elite dirigente; algunos optaron por una conducta conciliadora, haciéndose cargo de los reclamos de la sociedad y proponiendo reformas. Otros, mantuvieron una actitud intransigente, que apeló al Estado para reprimir cualquier manifestación de descontento y, no satisfechos por un apoyo que por otra parte no se retacea, se organizaron para actuar por su propia cuenta.

Las crisis de 1907 y 1913, y después de dos años de depresión motivados por la guerra de los Balcanes, recordaban la vulnerabilidad de ese crecimiento. La primera Guerra Mundial desorganizó los circuitos comerciales y financieros, retrajo las nuevas inversiones, provocó un fuerte encarecimiento de la subsistencia y dificultades en muchas industrias, aunque beneficio a aquellas actividades, como la exportación de carne enlatada, destinadas al abastecimiento de los beligerantes.

Las mayores preocupaciones provienen de la emergencia de tensiones sociales, de demanda y requerimientos diversos, generalmente expresados de manera violenta, provenientes de los diversos actores que se iban definiendo a medida que la sociedad se estabiliza y diversificada. Las tensiones no surgieron del Interior tradicional, de existencia aletargada, sino de las zonas dinámicas del Litoral. En el ámbito rural, chacareros de Santa Fe protagonistas de la primera expansión agrícola, entre quienes abundaban los propietarios. Se combinó aquí una coyuntura económica crítica y una decisión política del Estado, que entonces eliminó el derecho de los extranjeros a votar en las elecciones municipales. En el mismo año se produjo la revolución de la Unión Cívica, y en los siguientes los colonos incorporaron sus reclamos a los de los radicales.

Los chacareros ya habían echado raíces en el país, se habían nucleado y delineaban los que eran sus intereses. Así, en 1912 realizaron una huelga, negándose a levantar la cosecha a menos que los propietarios de tierras satisficiera ciertas condiciones: contratos más largos, rebajas en los arriendos y otras cosas, como el derecho a contratar libremente la maquinaria para la cosecha o criar animales domésticos. Llama la atención el contraste entre la moderación de los reclamos -que ni cuestionaban los aspectos básicos del sistema ni proponen alianzas con los jornaleros rurales- y la violencia de la acción en el caso de los colonos de Santa Fe, o la madurez organizativa de los arrendatarios, que iniciaron un

importante movimiento cooperativo y constituyeron una entidad gremial: la Federación Agraria Argentina. Desde entonces quedaron constituidos como un actor, que permanentemente reclamo y presionó a los terratenientes y a las autoridades.

Entre los sectores populares, la heterogeneidad cultural y lingüística fue superándose en la experiencia cotidiana de afrontar las duras condiciones de vida, que estimularon la cooperación y la construcción de todo tipo de asociaciones: mutuales, de resistencia, gremiales, en torno a las cuales la sociedad popular comenzó a tomar forma. La convivencia permite la espontánea integración de las tradiciones culturales y el surgimiento de formas híbridas pero de una vigorosa creatividad donde confluyen elementos criollos y los muy diversos aportados por la inmigración.

La escuela pública, choco en esta primera etapa con una masa de trabajadores adultos, analfabetos, casi impermeables a su mensaje. Esto dejó un ancho campo de acción para otro sector alternativo, proveniente de intelectuales contestatarios, y particularmente de los anarquistas. Ellos encontraron el lenguaje adecuado para dirigirse a la masa trabajadora dispersa, extranjera, segregada, que para actuar en conjunto necesitaba grandes consignas movilizadoras, como la de deshacer la sociedad y volver a hacerla, justa y pura, sin patrones y sin Estado. Frente al anarquismo, el Estado galvanizó su actitud represora, y la ley de residencia de 1902 autorizaba incluso la expulsión de los más díscolos.

Esta entidad, segregada y contestataria, motivo de las más serias preocupaciones de las clases dirigentes, no fue la única que se constituyó entre los trabajadores urbanos. Se fue dibujando un sector de obreros más calificados, en general con educación básica, decidido afincarse en el país y en muchos casos ya argentinos. Entre ellos, y también entre otros sectores populares ya integrados a la sociedad urbana, se encontraron su público los socialistas, que a diferencia de los anarquistas ofrecían, con un lenguaje más racional que emotivo, una mejora gradual de la sociedad en la que las aspiraciones últimas resultaría el producto de una serie de pequeñas reformas. Estas deben lograrse en buena medida por la vía parlamentaria, por lo que incitaban a los trabajadores a nacionalizarse. Sin embargo, no tuvieron éxito en encauzar las reivindicaciones específicas de los trabajadores que, cuando no siguieron a los anarquistas, prefirieron a los sindicalistas.

La actividad sindical constituyo en definitiva un actor de presencia y reclamos permanentes. No alcanzaba sin embargo a expresar otras inquietudes de la sociedad, y particularmente de quienes preferían intentar el camino del ascenso antes que unir su suerte a la del conjunto de los trabajadores. El logro de una posición económica era una aventura esencialmente individual, pero el reconocimiento social y la posibilidad de acceder a los reductos que las clases tradicionales mantenían cerrados era un problema colectivo, que se expresó en términos políticos, aun cuando estos no agotan las cuestiones en juego.

El sistema político diseñado por la elite, eficaz mientras la nueva sociedad se mantiene positiva, empezó a revelar sus debilidades apenas nuevos actores hicieron oír sus voces. En 1890 se produjo una primera fractura, pues una disidencia surgida dentro mismo de los sectores tradicionales -encabezada por la juventud universitaria- encontró insospechado eco en la sociedad, golpeada por la crisis económica. Es significativo que los principales dirigentes de los nuevos partidos hayan luchado juntos en el Parque. El golpe afecto al

régimen político, profundamente dividido, que durante tres o cuatro años zozobró, incapaz de encontrar una respuesta adecuada a un desafío que progresivamente se fue haciendo más definido. Por obra de Carlos Pellegrini, la “gran muñeca” política del régimen, se recuperó el equilibrio, que consolidó al general Roca cuando alcanzó en 1898 la presidencia por segunda vez. Quedó sin embargo un residuo no absorbido: el Partido Socialista, volcado hacia los trabajadores, y la UCR un movimiento cívico a la búsqueda de su público.

El radicalismo subsistió durante unos años en estado de latencia. Intentó un levantamiento revolucionario, cívico pero también militar, que fracasó como tal aun cuando tuvo un enorme efecto propagandístico, sobre todo porque estalló en momentos en que el régimen político otra vez se veía aquejado por una profunda división. Pese al fracaso revolucionario y la dura represión afrontada, la UCR comenzó a crecer, a conformar su red de comités y a incorporar a sectores sociales nuevos, que hacían sus primeras experiencias políticas.

El programa del radicalismo -centrado en la plena vigencia de la Constitución, la pureza del sufragio y una cierta moralización de la función pública- expresaba esos intereses comunes, limitados pero precisos. Tuvo un arma poderosa para enfrentar lo que con éxito denominaron “el régimen”, que era “falaz y descreído”: la “causa” se definía por su intransigencia, es decir, la negativa de cualquier tipo de transacción o acuerdo, traducida en la abstención electoral. La UCR se negaba así al eventual establecimiento de un sistema de partidos que se alternan y compartieran las responsabilidades, e identificándose con la Nación, exige la remoción total de un régimen que, a su vez, se había constituido sobre la base del unicato. La abstención electoral facilitó al principio su gestión a los gobernantes, pero a la larga la condena moral resultó más efectiva.

Las tensiones que recorren la sociedad, que expresaban su creciente complejidad, y la cantidad de voces legítimas que buscaban manifestarse resultaban más violentas y amenazantes de lo que intrínsecamente eran, por la escasa capacidad de los gobiernos por darles cabida y encontrar los espacios de negociación adecuados. Desafiados por la forma extrema de sus manifestaciones, muchos dirigentes optaron por una respuesta dura: acusar a las minorías extrañas, desconocer, reprimir, y también mantener y salvaguardar privilegios. Esa postura se hizo cada vez menos sostenible, no solo por la magnitud de la impugnación global, sino por las dudas de los dirigentes y la creciente conciencia de su ilegitimidad, que derivaron en divisiones y debilitaron su posición, lo que permitió el avance de quienes se inclinaban por la reforma. Las peores armas del viejo régimen fueron puestas al servicio de una transformación que, al hacerse cargo de los argumentos del radicalismo, pretende volver más transparente la vida política incorporando al conjunto de la población nativa la práctica electoral. La propuesta del sufragio secreto, según el padrón militar, tendía a evitar cualquier injerencia del gobierno en los comicios, mientras que el carácter obligatorio del sufragio apuntaba a incorporar a la ciudadanía una masa de gente que, pese a la prédica de radicales y socialistas, no manifiesta espontáneamente mayor interés de hacerlo.

La reforma electoral establece la representación de mayorías y minorías, según la proporción de dos a uno. Quienes diseñaron el proyecto estaban absolutamente convencidos de que los partidos que representaban los intereses tradicionales ganaron sin problema las mayorías, y que la representación minoritaria quedaría para los nuevos partidos -sobre todo la UCR y

quizás el partido socialista-, que de ese modo quedarán incorporados y compartirán responsabilidades.

Aprobada la ley en 1912, las primeras elecciones depararon una fuerte sorpresa para quienes habían diseñado la reforma: si bien los partidos tradicionales ganaron en muchas provincias -donde los gobiernos encontraron la forma de seguir ejerciendo su presión-, los radicales se impusieron en Santa Fe y en la Capital, donde los socialistas obtuvieron el segundo lugar. La perspectiva del triunfo arrastró a mucha gente del radicalismo, que en esos años se convirtió en un partido masivo, constituye su red de comités y de caudillos y se empapó de muchos mecanismos de la política criolla. Hipólito Yrigoyen, un misterioso dirigente que nunca hablaba en público, pero incansable en la tarea de recibir a los hombres de su partido, se convirtió en un líder de dimensión nacional. Los grupos tradicionales, intentaron organizar un partido orgánico, de dimensión nacional como el radical, sobre la base de los distintos grupos o "situaciones" provinciales. Pero el éxito del proyecto era cada vez más dudoso, y muchos dirigentes reticentes al proyecto de la reforma política, y mucho más ante un dirigente profundamente liberal como De la Torre, prefirieron plantear su propia alternativa. Divididos los conservadores, los radicales se impusieron de forma ajustada, en una elección que, en 1916, inaugura una etapa institucional y social sustancialmente novedosa.

"Los gobiernos radicales"- Breve historia contemporánea de la Argentina

Yrigoyen fue presidente entre 1916 y 1922, lo sucede Alvear, es reelecto en 1928 para ser depuesto por un alzamiento militar el 6 de septiembre de 1930.

Ambos radicales pero diferentes entre sí, y aun más las imágenes que se construyeron de ellos. Yrigoyen era, para algunos, quien venía a develar el ignominioso régimen y a iniciar la regeneración de la democracia. Alvear en cambio fue identificado con los grandes presidentes del viejo régimen, y por su política se asimiló con los vicios o virtudes de aquel.

Orientación reformista no solo en Argentina. En Uruguay Batlle y Ordoñez, en Chile Alessandri. En todos los casos, los reclamos de participación política se relacionaban con mejoras en la situación de los distintos sectores sociales. Ese mandato y esa voluntad reformista, que sin duda caracterizaron al radicalismo, y que habían surgido en el proceso de expansión previa, se desarrollaron en circunstancias marcadamente distintas e infinitamente más complejas que aquellas que ambos imaginaron. La Primera Guerra Mundial modificó todos los datos de la realidad: la economía, la sociedad, la política o la cultura.

Constituye un desafío y un problema difícil de resolver. Inicialmente Yrigoyen mantuvo la política de Victorino de la Plaza, su antecesor: la neutralidad benévola hacia los aliados suponía continuar con el abastecimiento de los clientes tradicionales, y además concederles créditos para financiar sus compras. En 1917, Alemania inició el ataque contra los buques comerciales neutrales, empujando a la guerra a Estados Unidos, que pretende arrastrar consigo a los países latinoamericanos. Argentina había resistido al panamericanismo pero el hundimiento de tres barcos mercantes por los alemanes movilizó una amplia corriente de opinión a favor de la ruptura. Las opiniones se dividieron: El ejército tenía simpatías por Alemania, mientras que la marina se alineaba por Gran Bretaña. La oposición conservadora era predominantemente rupturista, y los socialistas adhirieron al neutralismo. Yrigoyen

defendió la neutralidad que, si no lo enemistó con los aliados europeos, lo distanciaba de Estados Unidos.

Sentimiento antiestadounidense fue en ascenso. Yrigoyen se unió a quienes -poniendo distancia del cosmopolitismo dominante- encontraban esa identidad en la común raíz hispana. En otros ámbitos, el sentimiento antiestadounidense se vinculó con las ideas socialistas. La postulación de una unidad latinoamericana militante contra el agresor fue reforzada por la Revolución Mexicana. Otro movimiento de dimensión latinoamericana fue la Reforma Universitaria.

Las condiciones sociales, que ya eran complicadas en el momento de su estallido, se agravaron luego por las dificultades del comercio exterior y de la retracción de los capitales: en las ciudades se sintió la inflación, el retraso de los salarios reales y la fuerte desocupación. La guerra perjudicó las exportaciones de cereales, y particularmente las de maíz, y en las zonas rurales agravó la situación ya deteriorada de los chacareros y jornaleros. Un clima de conflictividad se mantuvo mientras las condiciones fueron muy adversas para los trabajadores, pero que empezó a manifestarse a partir de 1917. Se inició entonces un ciclo breve pero violento de confrontación social que alcanzó su momento culminante en 1919 y se prolongó hasta 1922/23. La revolución se mezcló con la contrarrevolución, y entre ambas hirieron de muerte a las democracias liberales: en medio de la crisis de valores desatada en la posguerra, estas fueron ampliamente cuestionadas por distintos tipos de ideologías y de movimientos políticos que iban desde las dictaduras lisas y llanas hasta los nuevos experimentos autoritarios de base plebiscitaria, como el iniciado en Italia por Benito Mussolini.

Las huelgas comenzaron a multiplicarse en las ciudades a lo largo de 1917 y 1918, impulsadas sobre todo por los grandes gremios del transporte, la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, cuya fuerza se incrementa por su capacidad de obstaculizar o paralizar el embarque de las cosechas, un recurso que usaron un dosificaron con prudencia.

Coincidió así una actitud que combinaba la confrontación y la negociación y otra del gobierno que, mediante el simple recurso de no apelar a la represión armada, creaba un nuevo equilibrio y se colocaba en posición de árbitro entre las partes.

Tanto los sindicalistas como el gobierno transitaban por una zona de equilibrio muy estrecha, que la propia dinámica del conflicto terminó por clausurar a lo largo de 1919, cuando la ola huelguística llegó a su culminación. Con motivo de una huelga en un establecimiento metalúrgico del barrio obrero Nueva Pompeya, se produjo una serie de incidentes violentos entre los huelguistas y la policía, que abandonó la pasividad y reprimió con ferocidad. Hubo muertos de ambas partes y pronto la violencia se generalizó. Una sucesión de breves revueltas no articuladas, espontáneas y sin objetivos precisos hizo que durante una semana la ciudad fuera tierra de nadie, hasta que el ejército encaró una represión en regla.

La semana trágica galvanizó a los trabajadores de la ciudad y de todo el país. Lejos de disminuir, el número y la intensidad de las huelgas aumentaron a lo largo de 1919: infinidad de movimientos fueron protagonizados por trabajadores no agremiados, pertenecientes a las

más variadas actividades industriales y de servicios, entre quienes la consigna de la huelga general ayudaba a la identificación y unificación.

Es probable que en la acción de Yrigoyen se combinarán, junto con mucho cálculo político, una actitud más sensible a los problemas sociales y una idea de papel arbitral que debía asumir el Estado, y quizás el mismo. Pero esa nueva actitud estuvo lejos de materializarse en instrumentos institucionales, pese a la manifiesta voluntad negociadora de las direcciones sindicales. Los avances realizados a principios de siglo, cuando se creó el Departamento de Trabajo o se propuso el Código del Trabajo, no se continuaron, y el Poder Ejecutivo no supo idear mecanismos más originales que la recurrencia a la acción arbitral del jefe de policía, responsable desde tiempo inmemorial de los problemas laborales. Tampoco el Congreso asumió que debía intervenir en los conflictos urbanos, considerándolos una mera cuestión policial.

Fuertemente presionado por unos sectores propietarios reconstituidos y galvanizados, el gobierno abandonó sus veleidades reformistas y retomó los mecanismos clásicos de la represión. Por entonces, y por diferentes razones, la ola huelguística se había atenuado en las grandes ciudades, aunque perduró en las zonas más alejadas y menos visibles.

En esos lugares, los anónimos e impredecibles efectos de la coyuntura económica internacional, traducidos por empresas voraces e incontroladas en acciones concretas en perjuicio de los trabajadores, hicieron estallar entre 1919 y 1921 fuertes movimientos huelguísticos. El gobierno autorizó a que fueran sometidos mediante sangrientos ejercicios de represión militar que alcanzaron justa celebridad, como en el caso de la Patagonia.

La experiencia de 1919 tuvo profundos efectos entre los sectores propietarios. Derrotados conservaron inicialmente mucho poder institucional -que Yrigoyen fue minando de forma paulatina- y todo su poder social, pero estaban a la defensiva, sin ideas ni estrategia para hacer frente a un proceso político y social que les desagradaba pero que sabían legitimado por la democracia. La Liga Patriótica Argentina fue la primera expresión de su reacción.

Confluyeron en ella la Asociación del Trabajo, los clubes de élite, los círculos militares o los representantes de las empresas extranjeras. Conservadores y militares coincidieron y se mezclaron en los tramos iniciales y el Estado le prestó un inequívoco apoyo a través de la policía. Lo más notable fue la capacidad que la Liga demostró para movilizar vastos contingentes de la sociedad, reclutados en sus sectores medios, para la defensa del orden y la propiedad y la reivindicación chauvinista del patriotismo y la nacionalidad, amenazada por la infiltración extranjera. También fue notable su capacidad para organizar gran número de “brigadas”, que asumen la tarea de imponer el orden a palos y para presionar al gobierno, que probablemente tuvo muy en cuenta la magnitud de las fuerzas polarizadas en torno a la Liga cuando a lo largo de 1919 imprimió un giro, sutil pero decisivo, a su política inicial.

La derecha tenía un nuevo impulso y un argumento decisivo, aunque todavía impreciso, contra la democracia: voluntaria o involuntariamente, Yrigoyen era sospechoso de subvertir el orden. Desde entonces, cobraron forma una serie de tendencias ideológicas y políticas que circulaban ampliamente en el mundo de la contrarrevolución. La Liga aportó los motivos del orden y la patria. Los católicos combinaron el pensamiento social con el integrismo antiliberal.

La llegada al gobierno de Alvear tranquilizó en parte a las clases propietarias. La mayoría volvió a confiar en las bondades de la democracia liberal y patricia, pero el nuevo discurso siguió operando en ámbitos marginales. Mientras tanto, fueron otras poderosas instituciones las encargadas de dar progresivamente fuerza al nuevo movimiento, unificar sus acciones, dotarlas de legitimidad y también reclutar sostenedores más allá de los propios sectores propietarios. La iglesia en el pico de la crisis, organizó la Gran Colecta Nacional, destinada a movilizar a los ricos e impresionar a los pobres. Ese año fueron unificadas todas las instituciones católicas que actuaban en la sociedad dentro de la Unión Popular Católica Argentina. Sintomáticamente, la iglesia clausuraba la posibilidad de crear un partido político. El ejército empezó a interesarse en la marcha de los asuntos políticos, quizá molesto por la forma en que Yrigoyen lo empleaba para abrir o cerrar la válvula del control social, y quizá también preocupado por el uso que el presidente hacía de criterios políticos en el manejo de la institución. La desconfianza a Yrigoyen fue creando las condiciones para hacerlo receptivo a las críticas más generales al sistema democrático, que con fuerza creciente se escuchaban en la sociedad.

LA ola de huelgas había sido formidable, pero no estaba guiada por un propósito explícito de subversión del orden, sino que expresaba, de manera ciertamente violenta, la magnitud de los reclamos acumulados durante un largo periodo de dificultades de la Argentina hasta entonces opulenta. Por otra parte, entre quienes podían presentarse como conductores de ese movimiento, los que propiciaban dicha subversión solo tenían influencia marginal e infima. Las direcciones y orientaciones más fuertes corresponden a la corriente de los sindicalistas y a los socialistas. Los sindicalistas, reacios a la acción política partidaria, apostaron a la negociación entre los sindicatos y el Estado.

El Partido Socialista también estaba lejos de posturas de ruptura. El socialismo era visto como la coronación y el perfeccionamiento de la democracia liberal, como la última instancia de una modernización que debía remover obstáculos tradicionales. Entre ellos, los socialistas subrayan lo que llamaban la “política criolla”, en la que engloba, junto al conservadurismo tradicional, al radicalismo, al que se opusieron con fuerza. El socialismo apostó todas sus cartas a las elecciones y reunió en la capital un importante caudal de votos, con el que compitió exitosamente con los radicales, pero a costa de diluir lo que quizás hubieran sido reclamos específicos de los trabajadores dentro de un conjunto más amplio de demandas, que incluía a los sectores medios.

Los socialistas apostaron a la acción legislativa y a la posibilidad de crear en el Congreso un ámbito de representación. Pero había en el partido una incapacidad casi constitutiva para establecer alianzas o acuerdos y, aunque impulsaron algunas reformas legislativas, no lograron dar forma a una fuerza política vigorosa, capaz de equilibrar a la derecha reconstituida. Su otra apuesta fue la ilustración de la clase obrera que, según suponían, se esclarecerá en el contacto con la ciencia. De ahí su intensa acción educadora.

El fin de la lucha gremial intensa, la reducción de la sindicalización y el debilitamiento de la Unión Sindical Argentina dan testimonio de la atenuación de los conflictos sociales. La Unión Ferroviaria, convertida en la cabeza indiscutida del sindicalismo, negoció de manera sistemática y orgánica con las autoridades, descartó la huelga como instrumento y obtuvo

éxitos sustanciales. El Estado manifestó la voluntad de avanzar en una legislación social que suponía a la vez el pleno reconocimiento del actor gremial: propuesta de regímenes jubilatorios para empleados de comercio, ferroviarios, regulación del trabajo de mujeres y niños y establecimiento del 1ro de Mayo -convertido en un conciliador Día del Trabajador- como feriado nacional.

Los hijos argentinos ocuparon el lugar de los padres extranjeros, las asociaciones de base étnica empezaron a retroceder frente a otras en las que la gente, sin distinción de origen, se agrupaba para actividades específicas, y la “cuestión nacional”, que tanto preocupó en el Centenario, empezó a desdibujarse. La acción sistemática de la escuela pública había generado una sociedad fuertemente alfabetizada, y con ella un público lector nuevo, quizá no demasiado entrenado pero ávido en materiales. Crecieron los grandes diarios.

La expansión de la cultura letrada formó parte del proceso de movilización social propio de una sociedad que era esencialmente expansiva y de oportunidades. Fruto de ella eran esos vastos sectores medios, en cuyos miembros podían advertirse los resultados de una exitosa aventura del ascenso.

La universidad constituye un problema importante para esta sociedad en expansión, y la Reforma Universitaria -movimiento que estalló en Córdoba en 1918 y se expandió por el país y por toda América Latina- fue una expresión de esta transformación. Eran por entonces socialmente elitistas y académicamente escolásticas. Muchos jóvenes estudiantes quisieron abrir sus puertas, participar en su dirección, remover las viejas camarillas profesoras, instaurar criterios de excelencia académica y de actualización científica y vincular la universidad con los problemas de la sociedad. La agitación estudiantil fue muy intensa y coincide con lo más duro de la crisis social, al punto que muchos pensaron que era una expansión más de aquella. Los reformistas recibieron el importante apoyo de Yrigoyen, lograron en muchos casos que se incorporarán representantes estudiantiles al gobierno de las universidades, que se desplazará a algunos de los profesores más tradicionales y que se introdujera nuevos contenidos y prácticas. El reformismo universitario fue un sentimiento, expresión de un movimiento de apertura social e intelectual que sirvió de aglutinante de las ideologías más diversas, pero que nutrió sobre todo del antiimperialismo latinoamericano, todavía difuso, y de la misma Revolución Rusa, con su apelación a las masas. Se vinculó con otras vertientes latinoamericanas, creando una suerte de hermandad estudiantil, e inyectó un torrente nuevo y vital en los movimientos políticos progresistas.

En la corriente reformista confluyen diversas experiencias de cooperación y cambio que se alimentaron con las corrientes del pensamiento social y progresista de Europa y dieron el tono a una actitud reflexiva y crítica acerca de la sociedad y sus problemas. Esta actitud se fue plasmando en una cierta idea de la justicia social. Los trabajadores se identificaban cada vez en mejor medida con aquel sector segregado de la sociedad que inquietaba a los intelectuales.

Los cambios en las formas de vida estaban modelando nuevas ideas y actitudes, que resultaron perdurables. El acceso a la vivienda propia cambió la idea del hogar y ubicó a la mujer en el centro de la familia, las hijas aspiran a trabajar, a estudiar, y también a una

creciente libertad sexual. Una cierta holgura económica y la progresiva reducción de la jornada de trabajo aumentaron el tiempo disponible.

El teatro había llegado a su apogeo. El tango fue definitivamente aceptado por la sociedad y despojado de los rastros de su origen prostibulario. El cine -mudo hasta 1929- ejerció una fuerte atracción.

Así, los nuevos medios de comunicación multiplicaban su influencia sobre las formas de vida y sobre las actitudes y los valores de esta sociedad expansiva. También operaron sobre la sensibilidad deportiva. La creación de clubes deportivos fue una de las formas características del impulso asociacionista general. En 1931, se constituyó la Liga Profesional de Fútbol, y de la mano de la radio y la prensa escrita, los clubes de fútbol porteños agregaron un nuevo elemento de identificación nacional. La tendencia a la homogeneización de la sociedad, en torno de una cultura compartida por los sectores sociales más diversos, se acompañó de un proceso igualmente significativo de diferenciación de funciones.

Una de sus manifestaciones fue la constitución de un mundo intelectual y artístico que define una forma de funcionamiento que le era propia.

Con la Primera Guerra Mundial -mucho más que con la crisis de 1930- terminó una etapa de la economía argentina: la del crecimiento relativamente fácil, sobre rumbos claros.

La guerra puso de manifiesto en forma aguda un viejo mal: la vulnerabilidad de la economía argentina, cuyos nervios motores eran las exportaciones, el ingreso de capitales, de mano de obra, y la expansión de la frontera agraria. La guerra afectó tanto las cantidades como los precios de la exportaciones, e inició una tendencia a la inclinación de los términos del intercambio. Las exportaciones agrícolas sufrieron primero el problema de la falta de transportes, pero, acabado el conflicto, se planteó otro más grave y definitivo: el exceso de oferta en todo el mundo y la existencia de excedentes agrícolas permanentes. Durante la guerra hubo repartición de capitales, pero al finalizar esta fue evidente que los tiempos de flujo fácil y automática habían terminado, pues los inversores de Gran Bretaña y los demás países europeos no estaban ya en condiciones de alimentarlo. Su lugar fue ocupado por los banqueros estadounidenses.

La principal novedad fue la fuerte presencia de Estados Unidos que ocupó los espacios dejados libres por los países europeos. La expansión económica de Estados Unidos se manifestó en primer lugar en un fuerte impulso exportador de automóviles, camiones y neumáticos, fonógrafos y radios, maquinaria agrícola y maquinaria industrial. Para asegurar su presencia en un mercado tentador, y saltar por sobre eventuales barreras arancelarias, las grandes empresas industriales realizaron aquí inversiones significativas, que al principio se destinaron solo a armar localmente las piezas importadas. También avanzaron sobre las empresas de servicios públicos como propietarias y como proveedoras, en particular de los Ferrocarriles del Estado, los únicos que por entonces crecieron. Las posibilidades de colocar nuestros productos tradicionales en Estados Unidos eran remotas, esta nueva relación creaba un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos, que se convirtió en un problema insoluble.

Por otro lado, la vieja relación con Gran Bretaña se sostiene sobre bases mínimas: las compras británicas de cereales y carne, que pagaban con los beneficios obtenidos por la venta

de material ferroviario, carbón, textiles, y con las ganancias que daban los ferrocarriles y otras empresas de servicios.

La Argentina era parte de un triángulo económico mundial, sin haber podido equilibrar las diferentes relaciones. Manejarse entre las dos potencias requería un arte del que el gobierno de Yrigoyen pareció escaso, mientras que el de Alvear fue, al respecto, más imaginativo y sutil, aunque tampoco encontró la solución a los problemas de fondo. Cuando los conflictos entre las partes se exacerbaban y las pérdidas se descargan en los actores más débiles: los productores locales, o quienes trabajaban para ellos. Desde 1912 se había conocido este tipo de tensiones en la agricultura; desde 1921 se manifestaron en un punto mucho más sensible y que afectaba a intereses más poderosos: la ganadería.

Gracias a las ventas de carne enlatada, los años finales de la guerra fueron excelentes, y beneficiaron no solo a los ganaderos de la zona central, sino a los de las zonas marginales, y hasta quienes criaban ganado criollo. La situación cambió bruscamente cuando los gobiernos europeos, que habían estado haciendo stock, cortaron sus compras, y los precios y volúmenes se derrumbaron. Las mayores pérdidas fueron sufridas por los ganaderos de las zonas más distantes, mientras que quienes poseían tierras de invernada lograron sortear en parte las dificultades. La crisis terminó de definir la diferenciación entre criadores e invernadores. En 1923, por presión de los criadores y con el respaldo del presidente Alvear, el Congreso sancionó un conjunto de leyes que los protegían, en desmedro tanto de los consumidores locales como de los frigoríficos. La resistencia de los frigoríficos resultó demoledora: interrumpieron sus compras y en pocos meses obligaron al gobierno a suspender las leyes sancionadas.

La Sociedad Rural invitó a restringir en general la presencia estadounidense en la economía, y lanzó la consigna de “comprar a quien nos compra”, lo que implicaba defender las importaciones y las inversiones británicas y hacer pagar sus costos al conjunto de la sociedad. Como consecuencia de la crisis ganadera, hubo un notable vuelco hacia esa actividad. Se inició entonces un largo periodo de estabilidad. La expansión se proyectó en esos años hacia las zonas pampeanas. De esta manera, entraron en producción la zona frutícola del valle del Río Negro, la yerbatera de Misiones y la región algodonera del corazón de Chaco, que habría de tener importancia decisiva sobre el futuro crecimiento de la industria textil.

Para todos estaban visibles los límites que suponía tanto un mercado mundial cada vez más difícil como el fin de las ventajas comparativas naturales, por el cierre de la frontera agropecuaria y el encarecimiento de la tierra. A eso se sumaba la escasez de inversiones.

La guerra había tenido efectos fundamentales negativos sobre la industria que se había constituido en la época de la gran expansión agropecuaria: dependiente en buena medida de materias primas o combustibles importados, no pudo aprovechar las condiciones naturales de protección creadas por el conflicto. Pero apenas este concluyó, comenzó una sostenida expansión, que se prolongó hasta 1930, caracterizada por la diversificación de la producción, que alcanzó así nuevas zonas del consumo. Atribuyen estos cambios a la elevación de los aforos aduaneros. En buena medida, las nuevas industrias se equiparon con maquinaria estadounidense. Los sectores propietarios locales comenzaron a deslizarse hacia una actividad que parecía más dinámica que las tradicionales. De este modo, la incipiente corriente

industrialista agregó un nuevo elemento al debate central sobre las relaciones entre nuestro país y sus dos metrópolis. La propia Unión Industrial se sumó al grupo de los partidarios de “comprar a quienes nos compran”, una fórmula que, por otra parte, había sido acuñada por el embajador británico.

La guerra había puesto en evidencia la precariedad del financiamiento del Estado, apoyado básicamente en los ingresos de la Aduana y en los impuestos indirectos, y el respaldo por los sucesivos préstamos externos. Todo aquello se redujo fuertemente en los dos periodos de crisis, y coincidió con el advenimiento de la administración radical, que por diferentes motivos debió encarar gastos crecientes. El gobierno de Yrigoyen necesitó primero recursos para su política social y luego para la amplia distribución de empleos públicos. Desde 1922, Alvear empezó con una política fiscal ortodoxa y redujo fuertemente los gastos hasta que debió apelar la misma distribución de puestos que su antecesor, quien cuando volvió al poder en 1928, hizo uso generoso de ese recurso. En ambos casos, los gastos del Estado aumentaron respecto de épocas anteriores, pero sobre todo su composición difirió sustancialmente, reduciendo la parte de las inversiones en beneficio de los gastos de administración, donde los empleados públicos tenían un peso fuerte.

Yrigoyen propuso en 1918 un impuesto a los ingresos personales. Luego de una discusión elevada y principista, donde se analizan las cuestiones de libertad, equidad y justicia social, que por entonces se debatían en Europa, llevó a su rápida aprobación en 1931, luego ya de la crisis y de la caída de Yrigoyen.

La reforma electoral de 1912 propia a la vez ampliar la ciudadanía, garantizar su expresión y asegurar el respeto de las minorías y el control de la gestión. Respecto de la participación electoral, la masa de inmigrantes siguió sin nacionalizarse, de modo que los varones adultos que no votaban eran tantos o más que los que podían hacerlo; esta cuestión solo se resolvió de manera natural, con el tiempo y el fin de la inmigración.

Concedida, antes que conseguida, la ciudadanía se constituye lentamente en la sociedad. Las múltiples y diversas asociaciones de fines específicos que la cubrieron contribuyeron a la gestión de experiencias primarias de participación directa y al desarrollo de las habilidades que la política requería: hablar y escuchar, ser convencido y sobre todo, acordar. El propio gobierno utilizó los comités para desarrollar algunas políticas sociales masivas, que aunque tenían claras finalidades electorales apuntaban a una nueva concepción de los derechos ciudadanos: la carne barata, o carne “radical”, y también el pan o los alquileres. En cierto modo -sobre todo entre los socialistas-, apuntan a la educación y a la integración del ciudadano y a su familia en una red de sociabilidad integral: capacitación, entretenimiento, cultura... Pero en todos los casos contribuyeron a desarrollar las capacidades políticas.

El crecimiento de los partidos da la medida del arreglo de la nueva democracia. La Unión Cívica Radical, templado en una larga oposición, y constituido para enfrentarse al régimen, pudo funcionar eficazmente aún lejos del poder. Demostró una preocupación muy moderna por adecuar sus ofertas a las cambiantes demandas de la gente.

El Partido Socialista también tenía una organización formal y cuerpos orgánicos, y además tenía un programa, pero carecía de dimensión nacional, pues aunque logró algún arraigo en Mendoza, Tucumán o Buenos Aires, casi toda su fuerza estaba concentrada en la Capital. El

Partido Demócrata Progresista, por su parte, arraigo entre los chacareros del sur de Santa Fe y de Córdoba, así como en la ciudad de Rosario; junto con los temas agrarios desarrollo los de la limpieza electoral, y tuvo un cierto peso en la capital. Los partidos de derecha solo se constituyeron a nivel provincial; aunque el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires ejerció un liderazgo reconocido, y pudieron ponerse de acuerdo para las elecciones presidenciales, no se llegó a estructurar una fuerza nacional estable, quizá porque tradicionalmente esto se había logrado a través de la autoridad presidencial.

La participación, finalmente, arraigo y se canalizo a través de los partidos, como lo testimonian las cifras de 1928 y la intensa politización previa de toda la sociedad, que al fin estaba haciendo uso de la democracia. Pero, en cambio, el delicado mecanismo institucional, no llegó a constituirse plenamente, y la responsabilidad les cupo a todos los actores.

La reforma electoral preveía un papel importante para las minorías, de control del Ejecutivo hasta el Congreso. Si bien las relaciones del gobierno con los sectores tradicionales no fueron malas al comienzo, las que mantuvo con la oposición política fueron desde el principio difíciles. Yrigoyen comenzó su gobierno con un Parlamento hostil, y buena parte de su estrategia se dirigió a aumentar el escueto poder. Para ganar las elecciones, usó ampliamente el presupuesto del Estado, repartiendo empleos públicos, entre sus punteros, aunque en Buenos Aires a competencia con los socialistas lo llevó a emplear métodos más modernos. En 1918 logró obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, pero la clave seguía pasando por el control de los gobiernos provinciales, decisivos a la hora de votar. No vacilo en intervenir las provincias desafectadas, organizando luego elecciones en las que triunfaron sus candidatos, y así su poder aumentó considerablemente, aunque nunca logro afirmarse en el Senado, y tropezó con dificultades imprevistas en Diputados, donde los legisladores opositores empezaron a encontrar aliados en muchos radicales que no aceptaban los métodos del presidente.

Yrigoyen planteó un conflicto con el Congreso desde el primer día de su mandato. Desvalorizaba al Congreso y desconocía su autoridad, del mismo modo en que lo hizo con todas las veces que aquel, por la vía de la interrupción, intentó controlar sus actos.

Lo cierto es que tanto conservadores como radicales disidentes se hicieron fuertes en la defensa del orden institucional, y lo hicieron enconadamente, junto con socialistas y demoprogresistas, y hasta salieron a la calle, en el agitado año 1918, para reclamar por sus fueros. De ese modo, mientras el radicalismo y su caudillo hacen una contribución sustancial a la incorporación ciudadana a la vida política -en un estilo tradicional y moderno a la vez-, fallaban no solo en el afianzamiento, sino en la puesta en valor ante la ciudadanía como sistema institucional democrático.

Alvear se beneficio de la máquina montada. Es posible que su elección por Yrigoyen apunta a limar asperezas con unos sectores opositores cuya gravitación reconocía. Pero Alvear avanzó mucho más en ese camino. Limitar la creación de nuevos empleos públicos y acepto las funciones de control que institucionalmente le correspondian al Parlamento, cuyas relaciones cultivo con cuidado. No dispuso intervenciones federales por decreto. El "popular" Yrigoyen fue contrapuesto al "oligárquico" Alvear. A fines de 1923, Alvear pareció inclinarse decididamente por el grupo opositor, al nombrar ministro del interior a Vicente Gallo, quien

junto a Leopoldo Melo en cabeza la corriente denominada antipersonalista. La división del radicalismo se profundizó: en 1924, presentaron listas separadas, y pronto constituyeron dos partidos diferentes. El ministro Gallo quiso recurrir a los viejos y probados métodos para desplazar a los yrigoyenistas: dar empleos a los partidarios e intervenir gobiernos provinciales adversos, pero Alvear no quiso abandonar hasta tal punto sus principios. En julio de 1925, fracasa en el congreso un proyecto de intervención a Buenos Aires, que era la clave para la estrategia de Gallo, y éste renunció al ministerio.

Desde entonces Alvear quedó en el medio del fuego cruzado entre antipersonalistas y los yrigoyenistas. La polarización fue extrema, y al grupo anti yrigoyenista se sumaron sectores provinciales disidentes, solo unidos con sus socios por el odio al jefe radical.

A diferencia de 1916, la derecha política estaba segura de sus objetivos y del apoyo que tenía entre las clases propietarias, pero empezaba a manifestarse cierta ambigüedad acerca de los medios: si la carta electoral fallaba, habría que jugar otra que, terminaría con un régimen democrático que no aseguraba la elección de los mejores. Desde la Nueva República descargan sus baterías contra el sufragio universal y la democracia oscura, que debía ser reemplazada por la segura dirección de un jefe, rodeado de una élite y legitimado plebiscitariamente. La adhesión manifiesta del general José Félix Uriburu, que acababa de pasar a retiro, permitía sin duda alentar esperanzas de un golpe militar regenerador.

Las Fuerzas Armadas, y particularmente el Ejército, estaban ocupando un lugar cada vez más importante en el Estado, y en la medida en que definían intereses propios, se convierten en un actor político de consideración. También ellas estaban asediadas por propuestas diversas: la relación de sus oficiales con la derecha liberal tradicional era estrecha, así como era sólido el profesionalismo inculcado por el general Justo, pero también eran estrechas sus vinculaciones con la Liga Patriótica, y fuerte la interpelación que llegaba desde los nuevos ideólogos nacionalistas.

El yrigoyenismo, impulsado por una camada de nuevos dirigentes, desarrollo ampliamente su red de comités y fortaleció la imagen mítica del caudillo. En los años anteriores, el problema petrolero se había instalado en la discusión pública, y la presencia extranjera era asociada con su manifestación más agresiva: la estadounidense de Standard Oil. La bandera de la nacionalización coincide con la prédica de los sectores militares preocupados por asegurar la autarquía del país respecto de los recursos estratégicos, se vinculaba con la nueva y fuerte hostilidad de los sectores terratenientes hacia Estados Unidos, y se enraiza finalmente con un sentimiento antiestadounidense de más larga data, que asocia unívocamente la metrópoli del norte con el imperialismo. Pero sobre todo, da la impresión de que de alguna manera el petróleo aparecía como la panacea que aseguran la vuelta a la prosperidad.

El proyecto de nacionalización, aprobado por la cámara de diputados, se detuvo en el senado, y hasta otro tanto lograra resolver la cuestión, Yrigoyen se dedicó a otra que afectaba más directamente sus relaciones con los sectores propietarios. El acuerdo firmado establece fuertes concesiones comerciales a los británicos, asegurándoles el suministro de materiales a los ferrocarriles del Estado, así como un arancel preferencial a la seda artificial, a cambio de la garantía de que seguirán comprando carne argentina. Este tratado, que suponía importantes concesiones sin un beneficio claro, muestra a Yrigoyen solidarizado con la corriente, fuerte

entre la élite, de robustecer las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, en desmedro de las nuevas con Estados Unidos

Es probable que la oposición, abrumada por los resultados electorales, ya hubiera desesperado de desalojar a Yrigoyen por métodos institucionales, y no apreciara en su real significación las consecuencias inmediatas de la crisis económica mundial, estallada en octubre de 1929. La caída de las exportaciones y el retiro de los fondos estadounidenses afectaron a las empresas ferroviarias y marítimas, vinculadas con el comercio exterior, y también al gobierno. La fuerte inflación, las reducciones de sueldos y los despidos se reflejaron inmediatamente en los resultados electorales: con el apoyo de la oposición toda, los socialistas independientes derrotaron en la capital tanto a los radicales como a los socialistas. Sin embargo, a esa altura todas las voces de la oposición, clamaban por la caída del gobierno. La senilidad atribuida al presidente y su incapacidad para dar respuestas rápidas a la crisis, así como la pública lucha por su sucesión, daban un nuevo y contundente argumento a los opositores.

Las discusiones giraban acerca de si se buscaría una solución institucional o si se apela en una intervención militar. Pudo producirse el golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930. La resistencia de las instituciones fue casi nula -el día anterior Yrigoyen había pedido licencia en su cargo-, pero también las fuerzas movilizadas por los sublevados fueron escasas. Igualmente escasa fue la movilización a favor del presidente caído, que poco antes había sido plebiscitado.

En buena medida, el proceso de democratización completo la larga etapa de apertura y expansión de la sociedad iniciada cinco décadas atrás y aparecía como su coronación natural: la incorporación creciente de sectores sociales cada vez más vastos a los beneficios de la sociedad establecida que más allá de la crisis de 1917-21 caracteriza a este periodo supuso finalmente una ampliación de la ciudadanía, inducida al principio desde el Estado pero finalmente asumida por la sociedad.

A la vez, era necesario traducir institucionalmente este proceso, y los gobiernos radicales no lograron avanzar lo suficiente como para que esas instituciones aparecieran para la sociedad como un valor que debía ser definido. Por su parte, una oposición a menudo facciosa hizo poco por hacer semejar la enconada lucha política a un diálogo constructivo entre gobierno y oposición, e hizo mucho menos por defender a ultranza unas instituciones de las que las clases propietarias desconfiaron desde el principio.

Democracia y radicalismo advinieron en el preciso momento en que las circunstancias para su florecimiento cambiaban en forma brusca, por más que la sociedad tardará en percatarse de ello. La Primera Guerra Mundial modificó sustancialmente los datos del funcionamiento de nuestra economía, puso en cuestión el lugar que el país ocupaba en el mundo y desató una serie de conflictos internos. Quién gobernará el país no podía conformarse con las antiguas fórmulas y debía inventar respuestas imaginativas. Si además pretendía gobernar democráticamente, tenía que encontrar formas institucionales de resolución de los conflictos, ampliando los espacios de representación y de discusión, así como los mecanismos estatales de regulación, y en ambos aspectos el déficit de las administraciones radicales fue grande.

UNIDAD 3

“La restauración conservadora”- Breve historia contemporánea de la Argentina

El 6 de septiembre de 1930 Uriburu asumió como presidente provisional y en febrero de 1932 transfirió el mando al general Agustín P. Justo, que había sido electo, junto con el doctor Julio Roca, en noviembre del año anterior. El gobierno provisional se encontraba en una incertidumbre, vacilante entre la “regeneración nacional” o la restauración constitucional.

La incertidumbre era común a todos los sectores que habían concurrido a derribar el gobierno de Yrigoyen y a interrumpir la continuidad institucional. Coinciden en este primer objetivo, y se solidarizaron con el gobierno cuando perseguía a los dirigentes radicales. La mayoría también apoyaba la política de mano dura adoptada por el movimiento social: la intervención en los puertos para desarmar allí el control sindical, las deportaciones de dirigentes anarquistas o comunistas, y hasta el fusilamiento del “anarquista expropiador” Severino di Giovanni. En 1930 la movilización social era escasa, la depresión paraliza la contestación, y las direcciones sindicales habían hecho poco para defenderla. Este no había sido el objetivo desencadenante de la revolución, como tampoco lo fue la crisis económica mundial, ausente del debate y cuyas vastas consecuencias parecían o advertirse todavía. Para sus protagonistas, la revolución se había hecho contra los vicios atribuidos a la democracia, pero una vez depuesto Yrigoyen, no había acuerdo sobre qué hacer, y las clases propietarias, así como el Ejército, que de forma paulatina se iba constituyendo en un nuevo actor político, vacilaban entre diversas propuestas.

Los nacionalistas rápidamente tomaron la iniciativa. Su voz había sido muy eficaz, por su capacidad para articular discursos diversos, que apelaban a distintas sensibilidades, así como para expresar y legitimar lo que para otros era inconfesable: un elitismo autoritario del que se enorgullecían. Finalmente, podrán contar con algún respaldo, limitado pero importante, del poder. En el gabinete de Uriburu, compuesto por conservadores de viejo estilo.

Uriburu hizo todo lo posible por apoyarlos. Hablo en distintos foros, principalmente militares, abominado de la democracia, reclamando una reforma institucional de fondo y predicando las ventajas del corporativismo y la representación funcional. Pero su poder y su habilidad política eran escasos. Paradójicamente, jugó todas sus cartas a una elección, confiando en un triunfo plebiscitario en Buenos Aires, y la derrota prácticamente lo convirtió en un cadáver político. Fracasa su apelación a la sociedad, intentó sin embargo una segunda baza con el Ejército, al que quiso movilizar mediante la Legión Cívica, una escuadra civil organizada por oficiales, que debía ser la vanguardia de la revolución anunciada pero que no pudo superar la intrascendencia.

Los nacionalistas progresivamente se fueron distanciando del gobierno, a medida que crecía la influencia de quienes rodeaban a Justo y la alternativa institucional, a la cual sin embargo terminaron apoyando. Los temas tradicionales contra la democracia se habían integrado con un vigoroso anticomunismo y un ataque al liberalismo. Redujeron todos sus enemigos a uno: las altas finanzas y la explotación internacional se fundían con los comunistas, los extranjeros causantes de la disgregación nacional y también los judíos, unidos en una siniestra confabulación. Reclamaban la constitución de una nueva minoría dirigente, nacional y no enajenada al extranjero, que confiaban encontrar entre los militares.

Mientras que los nacionalistas proponen un camino reaccionario pero novedoso, el grueso de la clase política optaba por la defensa de las instituciones constitucionales. Por el contrario, existía en el pasado una amplia experiencia acerca de cómo resolver la cuestión electoral y formas, no necesariamente groseras, de mediatizar la voluntad popular. Esta alternativa, que salvaba los principios del liberalismo, fue reclamada desde la sociedad, fue defendida vigorosamente por los principales órganos de opinión, como La Nación o Crítica, y fue asumida por los partidos políticos que habían constituido la oposición a Yrigoyen. Mientras los socialistas y los demoprogresistas pasaron de nuevo a la oposición, los partidos que habían apoyado la candidatura de Leopoldo Melo oscilaron entre enfrentar los proyectos autoritarios y corporativistas de Uriburu y utilizar para una eventual elección el apoyo del gobierno, sin duda indispensable para derrotar a los radicales. Las diferencias tácticas los dividieron profundamente. El primer grupo que se constituyó, la Federación Nacional Democrática, definidamente liberal y enérgicamente opuesto a Uriburu, fue fracturado por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, menos hostil a la política presidencial; pero su derrota creó las condiciones para un reagrupamiento de las fuerzas en torno de la candidatura del general Justo. El sector más consistente de la coalición eran los grupos conservadores, que constituyeron el Partido Demócrata Nacional, una coalición heterogénea de partidos provinciales que incluía desde los más tradicionales de Buenos Aires hasta los más liberales de Córdoba o Mendoza. El radicalismo antipersonalista, su competidor, se había desgranado luego de que muchos retornan al viejo tronco, dirigido ahora por Alvear. El Partido Socialista Independiente solo podía ofrecer una base sólida en la capital. Este conglomerado se unió tras la figura de Justo, pero sin superar sus diferencias, al punto de que lo apoyaron con dos candidatos a vicepresidente distintos.

Justo podría presentarse como un militar con vocación civil, pero sobre todo como quien contaba con el respaldo del Ejército. Libró una guerra sorda con Uriburu por el control de los mandos principales, y salió triunfante.

La mayor dificultad estaba en los radicales, y el retorno de Alvear con la bendición de Yrigoyen, unificó el partido. Tampoco entre los radicales estaban claras las opciones, pues muchos apostaban a la carta electoral y otros a derribar el gobierno provisional, con un movimiento cívico militar. Los radicales volvieron entonces a su antigua táctica de la abstención, sin abandonar los intentos de conspiración, y dejaron el campo libre a la candidatura de Justo, que incluso pudo presentarse como un término medio entre la dictadura de Uriburu y el extremismo subversivo de Alvear.

En la elección de noviembre de 1931, sólo lo enfrentó una coalición del Partido Socialista y el Demócrata Progresista. Tenía la debilidad de la escasa organización partidaria fuera de la capital y de Santa Fe, así como el conocido anti radicalismo de sus candidatos. En una elección no totalmente escandalosa, la fórmula encabezada por Justo obtuvo un triunfo que tampoco fue aplastante y permitió que la oposición ganara el gobierno de una provincia y una respetable representación parlamentaria.

Las fronteras institucionales estaban salvadas y la revolución parecía haber encontrado un puerto seguro. En el Congreso hubo un oficialismo y una oposición, que se desempeñó

prolijamente y fue reconocida como tal, quizá porque unos y otros sabían que no compiten realmente por el poder.

Justo procuro equilibrar la participación de las distintas fuerzas de su gobierno, aunque fue notoria su reticencia hacia los partidos conservadores.

Pese a que el Partido Socialista Independiente pronto declinó electoralmente y se disolvió, sus dirigentes cumplieron un papel fundamental en la estructuración de la alianza y en la formación de lo que se llamó la Concordancia parlamentaria, así como en el diseño de las principales políticas de gobierno. Los partidos oficialistas ganaron las elecciones utilizando técnicas muy conocidas, que combinaban el apoyo de la autoridad con el sistema de caudillismo, y explotaban las múltiples colusiones entre ambos. Mientras los radicales mantuvieron su abstención, la aplicación de estos mecanismos sirvió principalmente para dirimir los conflictos en el seno del oficialismo, pero desde 1935 se usó para bloquear el camino al partido conducido por Alvear.

La eficacia del gobierno debía quedar demostrada, ante la sociedad en general y ante las clases propietarias en particular, por su capacidad para enfrentar la difícil situación económica. La Depresión persiste hasta 1932, golpeando duramente a lo que era entonces una economía abierta. Cesó el flujo de capitales, que tradicionalmente la había alimentado, y muchos incluso retornaron a sus lugares de origen. Los precios internacionales de los productos agrícolas cayeron fuertemente y, aunque el volumen de las exportaciones no descendió, los ingresos del sector agrario y de la economía toda se contrajeron mucho. Como el gobierno optó por mantener el servicio de la deuda externa, mucho más gravosa por la disminución de los recursos corrientes, debieron reducirse en forma drástica tanto las importaciones como los gastos del Estado, cuyo déficit pasó a convertirse en un problema grave.

En la crisis, los países centrales utilizaron su poder de compra para defender sus mercados, asegurar el pago de las deudas y proteger las inversiones. Era un mundo distinto, que requiere una política económica nueva e imaginativa. La adoptada inicialmente -por Uriburu y por Justo al principio de su gobierno- se había limitado a las medidas reactivas clásicas, y solo incurrió tímidamente por nuevos caminos; a mediados de 1933 se avanzó por un rumbo más novedoso, delineando dos tendencias que habrían de perdurar largamente: la creciente intervención del Estado y el cierre progresivo de la economía. También otra, menos duradera pero de mayor trascendencia en lo inmediato: el reforzamiento de la relación con Gran Bretaña.

Poco antes de que Justo sucediera a Uriburu, se estableció el impuesto a los créditos, según el antiguo proyecto de Yrigoyen, que en el nuevo clima de la crisis -y en manos de un gobierno confiable- fue aceptado sin discusión por los sectores propietarios. Las finanzas públicas dejaron de depender exclusivamente de los impuestos a las importaciones o de préstamos externos.

También de 1931 fue el establecimiento del control de cambios, mediante el cual el gobierno centraliza la compra y venta de divisas. En principio fue una medida para enfrentar la crisis y asegurar la disponibilidad para el pago de la deuda externa, pero pronto se vio que constituía un poderoso instrumento de política económica: desde el gobierno podrán establecerse

prioridades para el uso de divisas, y esto era una cuestión que preocupaba no solo a los distintos sectores internos, sino, particularmente, a los dos grandes aspirantes externos a disponer de ellas: Gran Bretaña y Estados Unidos. En noviembre de 1933, una sustancial reforma estableció dos mercados de cambio; uno regulado por el Estado, administraba las divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias tradicionales, mientras que en el otro se compraban y vendían libremente las originadas en préstamos recibidos o en exportaciones no tradicionales como las industriales. Para el primero, la devaluación fue mínima, aunque se estableció una diferencia del 20% entre precio de compra y el de venta. El Estado se hizo de una importante masa de recursos, y sobre todo pudo decidir sobre su uso. Así estableció una serie de prioridades para vender las divisas que controlaba: el servicio de la deuda externa era la primera; luego, atender las importaciones esenciales, y en tercer término las remesas de las empresas de servicios públicos, como las ferroviarias. En el segundo mercado se negociaban las escasas divisas restantes, tanto para la importación de bienes de consumo como para atender al equipamiento de las empresas.

En 1935 se creó el Banco Central, cuya función principal era regular las fluctuaciones cíclicas de la masa monetaria, evitando tanto una exclusiva holgura como la escasez, así como para controlar la actividad de los bancos privados, sobre todo el manejo de sus créditos. Para atenuar los efectos de las crisis cíclicas y defender a los productores locales, se comenzó a regular la comercialización de la producción agropecuaria. Utilizando los fondos provenientes del control de cambios, la Junta Nacional de Granos se aseguró el precio mínimo para los productores rurales, evitando les tenes que vender en el peor momento. La Junta Nacional de Carnes apuntó al mismo objetivo, aunque limitada al escaso sector del mercado que escapaba a los frigoríficos extranjeros. El sistema se extendió también a productos extra pampeanos, como el algodón y el vino.

El Estado fue asumiendo funciones mayores en la actividad económica. A la vez, el conjunto de la economía fue cerrándose en forma progresiva a un mundo donde también se dibujaban, áreas relativamente cerradas.

La más importante tuvo que ver con la industria, cuya producción comenzó a crecer en el marco de la crisis, y siguió haciéndolo luego de la recuperación de la segunda mitad de la década. Con la prosperidad de las décadas anteriores se había constituido en el país un mercado consumidor de importancia. El cierre creciente de la economía, los aranceles y la escasez de divisas creaban condiciones adecuadas para sustituir los bienes importados por otros producidos localmente.

Creció mucho el sector textil, pero también la mayoría de las actividades volcadas al consumo: alimentos, confecciones y productos químicos y metálicos diversos. Los grandes capitales, vinculados hasta entonces en forma predominante a las actividades agropecuarias para la exportación, acentuaron su orientación hacia la industria.

La sustitución de importaciones ofrecía el atractivo de un mercado existente y cautivo, y una ganancia rápida. Una vez satisfecho, era más conveniente pasar a otra rama, igualmente insatisfecha, antes que profundizar la inversión anterior. A esto concurrieron factores de distinto tipo. La vieja dinámica de los sectores propietarios, de diversificación en distintas actividades sin atarse definitivamente a una, encontró en la industrialización sustitutiva un

nuevo campo, que se complementó posteriormente con la inversión mobiliaria. Por otra parte, la combinación de un mercado cerrado y algunas pocas grandes empresas por cada rama o actividad tornó poco relevante la presión por la mayor eficiencia o el menor precio. Lo eran, en cambio, las reglas que ponía el Estado. Así, el crecimiento industrial abrió un nuevo campo de negociación entre los sectores propietarios y el Estado.

La ganadería siguió retrocediendo respecto de la agricultura, al igual que en la década anterior. La producción agrícola no decae, pese al derrumbe de los precios, aunque la situación de los productores se deterioró sensiblemente. Hasta entonces, las exportaciones de maíz crecieron mucho en los años centrales de la década, lo que influyó tanto en el equilibrio fiscal como en la relativa prosperidad de la economía entre 1934 y 1937, al punto de que sus efectos se manifestaron en el estímulo a la industria y la construcción. Fuera del área pampeana, crecieron algunos cultivos industriales orientados al mercado interno, y muy en especial el del algodón. En todo el nordeste se extiende la ocupación de nuevas tierras, y se constituyó un amplio sector de pequeños productores dependientes de un sector comercial e industrializador muy concentrado.

En suma, la crisis y las nuevas respuestas de índole coyuntural había creado una serie de condiciones nuevas que hacían muy difícil el retorno a la situación previa.

La cuestión de la situación con Gran Bretaña resultó más controvertida. Presionada por el avance de Estados Unidos, y en el marco de la crisis desatada en 1930, Gran Bretaña optó por concentrarse en su imperio, fortalecer sus vínculos con las colonias y dominios y acotar en ellos la presencia estadounidense. Se propuso defender sus antiguos mercados y salvar sus ingresos provenientes de préstamos o inversiones antiguas. Entre otras medidas, se decidió reducir en un tercio las compras de carne congelada argentina, que podía reemplazarse por la de Australia. Se trataba de un punto extremo sensible para la Argentina, quizá no tanto por su importancia económica intrínseca como por la magnitud de los intereses constituidos en torno de la exportación de carne: productores, frigoríficos y empresas navieras eran capaces de presionar fuertemente al gobierno. A la vez, el gobierno argentino poseía un arma decisiva: la política arancelaria y el control de cambios permiten discriminar las importaciones y regular el monto de las divisas que sería utilizado para pagar el servicio de la deuda británica, para seguir comprando productos o para remitir las utilidades de sus empresas instaladas en Argentina. En un contexto de escasez de divisas, y con fuertes demandas de los intereses comerciales estadounidenses, el punto se convierte en sumamente importante para Gran Bretaña.

El vicepresidente Roca negoció con Londres las condiciones para el mantenimiento de la cuota argentina de carne. Ello era vital para asegurar la credibilidad del gobierno entre los diversos sectores ligados a la actividad pecuaria. El tratado, firmado por Roca y el ministro británico Runciman, limitó al 15% el cupo que podría ser manejado por los frigoríficos nacionales, entre los cuales se preveía que podría existir uno de tipo cooperativo, sin fines de lucro. A cambio de eso Gran Bretaña se aseguró que la totalidad de las libras generadas por este comercio se emplearían en la propia Gran Bretaña: en el pago de la deuda, en la importación de carbón, material ferroviario o textiles, y en la remisión de utilidades de empresas británicas. A la vez, se estipulaba un tratamiento benévolo para esas empresas, que

estaban sometidas a múltiples dificultades. Los estadounidenses, retrocedieron en este mercado, aunque luego contraatacaron realizando inversiones industriales que saltaban la barrera arancelaria.

El “tratamiento benévolo” apuntaba a reflotar empresas británicas en dificultades: las ferroviarias y las de transporte urbano. Los ferrocarriles estaban atenazados por gastos fijos muy altos, una reducción general de su actividad y la creciente competencia del transporte automotor. El “tratamiento preferencial” consistió en la creación de una Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que despertó la indignación general sin lograr su objetivo: que los colectiveros se incorporarán a ella y cesarán con su competencia. En ambos casos, se trataba de empresas que habían dejado de ser rentables y que, por otra parte, no habían hecho las inversiones necesarias para conservar su peso, de modo que el “tratamiento preferencial” solo buscaba aumentar algunas ventajas monopólicas y dilatar su ineludible deterioro, para el cual los directivos empezaron a trazar una nueva estrategia: venderlas al Estado.

El 1935, Lisandro de la Torre solicitó una investigación sobre el comercio de las carnes en el país y las actividades de los frigoríficos. Los senadores oficialistas reconocieron la existencia de abusos importantes por parte de los frigoríficos, de precios excesivamente bajos pagados a los productores, prácticas monopólicas, evasión de impuestos y reluctancia ante la investigación. De la Torre denunció que los frigoríficos, protegidos por las autoridades, no pagaban impuestos, ocultaban sus ganancias y daban trato preferencial a algunos ganaderos influyentes.

El debate terminó abruptamente, sin resolución. El gobierno perdió mucho ante la opinión y, sobre todo, comprobó que la etapa más fácil de su gestión había terminado. En los años siguientes, y con vistas a las elecciones presidenciales, la oposición reconstruye sus filas.

La reivindicación de la figura de Rosas ya había empezado en la década anterior y se desarrolló intensamente en los años treinta, tanto en medios historiográficos como políticos. Servía para identificar a quienes eran movidos por el rechazo de la influencia británica y también los que veían al liberalismo como el principal enemigo. Rosas representaba no el antiimperialismo, sino la tradición hispana de una sociedad autoritaria, jerárquica y católica, que contrapone a la contemporánea, corrompida por el liberalismo, el protestantismo, el judaísmo y el marxismo.

Pese a sus éxitos en lo económico, el régimen presidido por Justo fue visto como ilegítimo: fraudulento, corrupto y ajeno a los intereses nacionales.

En octubre de 1935, los trabajadores de la construcción de Buenos Aires, conducidos por dirigentes comunistas, iniciaron una huelga que duró más de noventa días; la Confederación General de Trabajo realizó una huelga de dos días al cabo de la cual los huelguistas obtuvieron la satisfacción de una parte sustancial de sus demandas. El saldo más importante fue, quizá, la constitución de la Federación Obrera Nacional de la Construcción. Radicales, demoprogresistas, socialistas y comunistas adhirieron a los reclamos de los trabajadores, fustigaron y reclamaron por la libertad y la democracia.

El 1936, la Unión Cívica Radical, que el año anterior había levantado la abstención electoral, triunfo en las elecciones de diputados en algunos de los principales distritos y alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados.

La ley de residencia fue aplicada en 1937 contra los principales dirigentes de la construcción, comunistas de origen italiano deportados a la Italia fascista.

Las derechas habían convocado a un “frente nacional”, contra el Frente popular que se esbozaba.

En el campo de los opositores al gobierno fue muy importante el cambio de posición del Partido Comunista, que había abrazado la consigna del Frente Popular. En los años anteriores, con la consigna de “lucha de clase contra clase”, los comunistas habían combatido por igual a los nazis y fascistas y a los partidos socialdemócratas, a quienes estigmatizaban como los más peligrosos enemigos del proletariado, pero desde 1935 se lanzaron a impulsar la unidad de los “sectores democráticos” para enfrentar el nazismo, sacrificando las consignas y prácticas que pudieran irritar o atemorizar a los grupos progresistas y democráticos de la burguesía.

La Guerra Civil española, cuyo impacto en Argentina fue enorme, sirvió para definir más claramente aun los campos. En las derechas, la Guerra Civil integró a conservadores autoritarios, nacionalistas, filofascistas y católicos integristas en una común reacción contra el liberalismo democrático. En el campo contrario, terminó de soldar el bloque de solidaridades que iba desde el radicalismo hasta el comunismo, pasando por los socialistas, demoprogresistas, los estudiantes de la Federación Universitaria, los dirigentes sindicales agrupados en la CGT y un vasto sector de opinión independiente y progresista, que también incluía figuras del liberalismo conservador.

La Reforma Universitaria, con su ideología genéricamente antiimperialista, democrática y popular, empezaba a penetrar en la política.

La instalación de algunas editoriales creadas por emigrados españoles multiplicó la actividad del mundo intelectual y artístico y dio trabajo a escritores, traductores y críticos. Había en todo este movimiento una tendencia fuerte al análisis de los problemas de la sociedad, la crítica y la propuesta de soluciones alternativas para cuestiones específicas: la educación, la salud, la cuestión agraria, la condición de la mujer. Lo que predomina es el espíritu reformista y la convocatoria a todos quienes coinciden en la aspiración al progreso, la libertad, la democracia y una sociedad más justa.

Muchas de esas preocupaciones están presentes en la CGT, máxima representación de los obreros organizados.

Desde 1933, la recuperación económica y la reorientación industrial empezaron a hacerse notar. La desocupación fue en forma gradual absorbida, y empezó lentamente el movimiento de migrantes de las zonas rurales hacia los grandes centros urbanos, atraídos por el nuevo empleo industrial. En Buenos Aires, este crecimiento se radicó en los barrios periféricos de la ciudad para ir luego engrosando progresivamente el cinturón suburbano. Poco a poco fueron creciendo los grupos de trabajadores de las nuevas industrias manufactureras o de la construcción; allí los dirigentes comunistas tuvieron éxito en organizar sindicatos que

agruparan los antiguos oficios por ramas de industria: metalurgicos, textiles, madereros, alimentarios y sobre todo obreros de la construccion.

La actividad sindical resurgio hacia 1934 y crecio mucho en los años siguientes hasta 1937, acompañando el ciclo economico. Los dirigentes sindicales de entonces -comandados por los ferroviarios- mantuvieron la tendencia gestada en la decada anterior de deslindar sus reclamos gremiales de los planteos politicos mas generales. Gradualmente obtuvieron algunas mejoras, pero concedidas en forma parcial y aplicadas a regañadientes.

El presidente Roberto M. Ortiz, no solo mantuvo buenos contactos con los ferroviarios, sino que procuro formarse entre ellos una base de apoyo, interviniendo activamente en sus conflictos internos. El Departamento Nacional del Trabajo fue extendiendo de manera gradual la practica del convenio colectivo y del arbitraje estatal; sus frutos se aprecian en la cantidad de huelgas resueltas por algun tipo de transaccion.

Entenderse directamente con uno de los actores principales de la sociedad formaba parte de la estrategia general del Estado intervencionista y dirigista y, a la vez, coincidia con la tendencia de sus dirigentes a reducir el espacio de la politica partidaria y de las instituciones representativas, como el Congreso. Reconocer la importancia del Estado y hacer de el su interlocutor principal constituia tambien una tendencia muy fuerte entre los dirigentes sindicales. Esta tendencia -denominada "sindicalista"- fue criticada por quienes, desde los partidos politicos opositores, empezaron a dar prioridad a los reclamos democraticos y al enfrentamiento politico con el gobierno, y presionaron para alinear en el las organizaciones sindicales. Un conflicto interno de la Union Ferroviaria condujo a fines de 1935 a una renovacion radical de la conduccion de la CGT; a la vez, permitio el ingreso progresivo a la conduccion de los comunistas, cuya fuerza sindical era creciente.

La pieza clave del frente era la UCR. El levantamiento de la abstencion electoral en 1935, habia sido impulsado por los sectores mas conciliadores del partido. Con fuerte peso en la Camara de Diputados y en el Concejo Deliberante, el radicalismo contribuyo a mejorar la imagen de las instituciones, cuya legitimidad se hallaba fuertemente cuestionada. Pero la vuelta a la lucha politica tambien aumento las posibilidades de manifestacion de los grupos mas avanzados del radicalismo, nutridos de jovenes veteranos de la militancia universitaria y que reivindicaban una tradicion yrigoyenista. En la capital los opositores a Alvear constituyeron una tendencia fuerte, que critico el electoralismo conciliador de los dirigentes, mientras que el grupo Fuerza de Orientacion Radical de la Joven Argentina comenzo a definir una linea mas preocupada por los problemas nacionales. Alvear oscilaba entre ambas corrientes.

En esa ocasion, lo acompañó formalmente el Partido Comunista, pues el Socialista se hallaba en franca competencia con el radical.

El 1937, el presidente Justo pudo imponer a sus partidarios la candidatura presidencial de Ortiz, de origen radical antipersonalista como el, pero debio aceptar para la vicepresidencia a un representante de los grupos conservadores mas tradicionales: Ramon S. Castillo. Para enfrentar la candidatura de Alvear se recurrio sin disimulos a procedimientos fraudulentos que hacian "imposible catalogar esas elecciones entre las mejores ni entre las regulares que habia habido en el pais". A Ortiz le resulto mas dificil que a Justo mantener el quilibrio con

los grupos conservadores de su partido, y menos aun con los nacionalistas, fuerte en la calle y en el Ejercito. Lo atrajo la posibilidad de acercarse al radicalismo; con el apoyo de Alvear los radicales triunfaron en las elecciones de diputados y consolidaron su predominio en la Camara.

Pero cuando todo parecia conducir al triunfo de esta version del programa de la demogratizacion, oficialista y de derecha, aunque tambien apoyado al comienzo por el Partido Comunista, la enfermedad del presidente Ortiz lo obligo a delegar el mando en el vicepresidente Castillo. Luego de presenciar como Castillo deshacia todo lo construido en pro de la democratizacion y probablemente por presion de los militares, Castillo disolvio el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, sin despertar con esta medida mayores resistencias. Asi, el intento de democratizacion iniciado en 1936 se desmoronaba a fines de 1940.

La democracia, concedida en 1912, habia arraigado lenta y progresivamente en la sociedad. Una red de asociaciones de distinto tipo, destinadas a canalizar hacia las autoridades los reclamos de sus diferentes sectores, contribuyo a la vez a la formacion de los ciudadanos, al desarrollo de los habitos y de las practicas de participacion, al ejercicio de los derechos. Fue un proceso desigual, mucho mas visible en las grandes ciudades que en las zonas rurales, pero no por eso menos real, y capaz de afirmarse pese a las restricciones que desde el Estado se pusieron a la vida politica partidaria, y a su desnaturalizacion por las practicas fraudulentas. Desde el Estado se contribuyo en mucho a esa descalificacion de los partidos politicos y del mismo sistema representativo: mientras la politica quedaba asociada con el fraude, el Estado encarnaba la negociacion de las cuestiones de gobierno directamente con los distintos actores de la sociedad -los sindicatos, los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y hasta las asociaciones civiles- ignorando al Congreso y a los partidos politicos.

La guerra mundial que se desencadeno en 1939 cambio gradualmente el panorama politico, reacomodo a los distintos grupos internos, acerco posiciones entre los radicales y algunos sectores conservadores y planteo nuevas opciones. Pero las diferentes alternativas no se superpusieron ni recortaron en forma definida a los actores politicos, de modo que en los años iniciales de la guerra los alineamientos fueron confusos y contradictorios.

El primer impacto lo produjo sobre las relaciones comerciales y economicas con Gran Bretaña y Estados Unidos. El progresivo cierre de los mercados europeos redujo drasticamente las exportaciones agricolas, pero aumentaron mucho mas las ventas de carne a Gran Bretaña. Como a la vez disminuyeron las importaciones de origen britanico, la Argentina empezo a tener con el Reino Unido un importante saldo a su favor. Se empezaron a exportar a paises limitrofes productos industriales: las ventas de textiles, confecciones, alimentos, bebidas, calzado y productos quimicos acentuaron el crecimiento industrial iniciado con la sustitucion de importaciones y el pais empezo a tener saldos comerciales favorables, incluso con Estados Unidos.

Las exportaciones tradicionales parecian tener pocas perspectivas a largo plazo, pero en cambio las exportaciones industriales tuvieron perspectivas promisorias. En cualquier caso, esas alternativas implicaban aumentar la intervencion del Estado en la regulacion economica, y tambien un cierre mayor de la economia local.

En noviembre de 1940, Pinedo, ministro de Hacienda, propuso un Plan de Reactivación Económica como salida a las dificultades generadas por la guerra, insistiendo en la compra de las cosechas por parte del Estado, para sostener su precio, y a la vez estimular la construcción pública y privada, capaz de movilizar muchas otras actividades. Pinedo advertía que el problema de una economía excesivamente cerrada en sí misma y proponía estimular las industrias “naturales”, que elaboraran materias primas locales y pudieran exportar a los países vecinos y a Estados Unidos.

Se trata de una operación compleja, que modificaba los términos de la relación triangular, proponiendo una vinculación estrecha con Estados Unidos, e incluso apuntaba a una inserción sustancialmente distinta de la Argentina en la economía mundial. El estado debía movilizar el crédito privado, orientándolo hacia inversiones de largo plazo, entre ellas las industriales. Las exportaciones de productos manufacturados se beneficiarían con sistemas de reintegros.

Los radicales, que eran la mayoría y no tenían objeciones de fondo a la propuesta, habían decidido bloquear cualquier proyecto oficial como una forma de repudio a la nueva orientación fraudulenta del gobierno de Castillo. Pinedo intentó solucionar el problema entrevistándose con Alvear, pero no logró convencer al jefe radical, e incluso debió renunciar por ello al ministerio.

La otra dimensión del triángulo -la diplomática- marchaba por carriles diferentes. Desde 1932, Estados Unidos había modificado sustancialmente su política exterior, la clásica del “garrote” fue reemplazada por la “buena vecindad” y aspiraba a estrechar las relaciones bilaterales. Esto era particularmente difícil con Argentina: el comercio bilateral estaba obstaculizado por la oposición del “farm block”, es decir, los intereses agrarios competidores de la Argentina.

Los gobernantes de la década del treinta persistieron en ese rumbo tradicional, y en las nuevas sucesivas conferencias panamericanas hicieron todo lo posible para poner obstáculos al alineamiento.

La neutralidad en caso de guerra europea también era una tradición argentina. Por entonces, el gobierno de Ortiz procuraba acercarse a los Estados Unidos, en el contexto de su política democratizadora, y lo mismo hizo el primer canciller de Castillo, Roca, que acompañó la gestión de Pinedo. Pero progresivamente la guerra se impuso en las discusiones internas y empezó a revivir los agrupamientos de la opinión que asociaban el apoyo a los aliados con la reivindicación de la democracia y el ataque al gobierno. En junio de 1940 se constituyó Acción Argentina, dedicada a denunciar las actividades de los nazis en el país y la injerencia de la embajada alemana. En ella participaron radicales, socialistas, muchos intelectuales independientes y muchos conspicuos miembros de la oligarquía conservadora. Acción Argentina se diferenciaba del antiguo Frente Popular por la presencia de estos recientes conversos a los valores de la democracia, lo que reflejaba las perplejidades y divisiones de quienes hasta entonces habían apoyado al gobierno de la Concordancia.

El panorama cambió sustancialmente en la segunda mitad de 1941. En junio Hitler invadió la Unión Soviética y en diciembre los japoneses atacaron a los estadounidenses; Estados Unidos entró en la guerra y procuró forzar a los países americanos a acompañarlo. Nuevamente la

oposición argentina frustró los planes estadounidenses: la decisión de que todos los países del hemisferio entraran en guerra fue cambiada por una simple “recomendación” debido a la férrea oposición del canciller argentino Ruiz Guiñazú, que había reemplazado a Roca.

El frente que se agrupaba en torno de las consignas democráticas y rupturistas empezó a crecer, engrosado ahora por los comunistas y por los conspicuos conservadores, a quienes la opción entre el fascismo y la democracia los llevaba a alinearse con sus antiguos adversarios. La Comisión de Investigación de Actividades Antirgentinas, creada por la Cámara de Diputados, se dedicó a denunciar la infiltración nazi, y en una serie de actos públicos se proclamó simultáneamente la solidaridad con Estados Unidos y la oposición al fraude. El gobierno de Castillo no necesitaba simpatizar con los nazis para aferrarse a la neutralidad. Los rupturistas que asumían la bandera democrática, condenaban simultáneamente al gobierno fraudulento; quienes se mantenían fieles a él encontraban en el neutralismo una buena bandera para crear filas y enfrentar a sus enemigos. Estos eran cada vez más entre los políticos, por lo que Castillo optó por buscar apoyo entre los militares.

Castillo seguía aquí la tradición de sus antecesores. Justo cultivó a los militares, aumentó los efectivos bajo bandera, construyó notables edificios, como el Ministerio de Guerra, que eclipsaba la mística Casa Rosada, pero a la vez se propuso despolitizar la institución, acallar la discusión interna y mantener el equilibrio entre las distintas facciones. Ortiz encontró un ministro fiel en el general Marquez, quien fue derribado por un escándalo que tenía como destinatario final a su presidente. Bajo el gobierno de Castillo se crearon la Dirección General de Fabricaciones Militares y el Instituto Geográfico Militar, impulsado así el avance de las Fuerzas Armadas sobre terrenos más amplios que los específicos. Durante su gobierno, la presencia de los militares fue cada vez más visible, así como la sensibilidad del presidente a las opiniones y presiones de los jefes militares. Rápidamente, las Fuerzas Armadas se constituyeron en un actor político.

Un elemento central del nuevo perfil militar fue el desarrollo de una conciencia nacionalista. Predominaba en el ejército, tradicionalmente influido por el germanismo, un neutralismo visceral. Pero además veían que el equilibrio regional tradicional se alteraba por el apoyo de Estados Unidos a Brasil y la exclusión de la Argentina de los programas de rearme. La solución debía buscarse en el propio país, y así la guerra estimuló preocupaciones de tipo económico, pues la defensa requería el equipamiento industrial y este, de insumos básicos. A través de la Dirección de Fabricaciones Militares, se dedicó a promover industrias, como la del acero, que juzgaban tan “natural” como la alimentaria, e indispensable para garantizar la autarquía.

También era importante el papel del Estado en una sociedad que seguramente sería acosada en la posguerra por agudos conflictos: la reconstitución del Frente Popular, las banderas rojas en los mitines obreros y la presencia en las calles del Partido Comunista parecían signos ominosos de ese futuro, y para enfrentarlo se requería orden y paz social. Ese ideal de Estado legítimo y fuerte, capaz de capear las tormentas de la guerra y posguerra, poco se parecía al gobierno tambaleante y radicalmente ilegítimo del doctor Castillo.

Esa difusa pero pujante sensibilidad nacional no se limitaba al Ejército. Más que una idea definida y precisa, se trataba de un conjunto de sentimientos, actitudes e ideas esbozados,

presentes en vastos sectores de la sociedad. Si de ellos no podía deducirse una ideología en sentido estricto, revelaron una gran capacidad, atribuirle en parte al empeño de los militares de algunas de sus tendencias parciales más definidas, para disolver antiguas polarizaciones y crear otras. Así, cuando todo parecía conducir al triunfo del Frente Popular, un “frente nacional” comenzó a dibujarse como alternativa.

Las raíces de ese sentimiento nacional eran antiguas, pero en tiempos más recientes las habían abonado las corrientes europeas antiliberales. Sobre esta base había operado el nuevo nacionalismo, antibritánico. En esta nueva inflexión, los enemigos de la nacionalidad no eran ni los inmigrantes, ni la “chusma democrática”, ni los “rojos”, sino Gran Bretaña y la oligarquía “entreguista”. La consigna antiimperialista empezó a ser frecuente en los discursos de políticos radicales o socialistas, de dirigentes sindicales y de intelectuales, que empezaron a encarar desde esa perspectiva el análisis de los problemas nacionales y muy particularmente los económicos.

En este campo, el nuevo nacionalismo compartía el terreno ya trabajado por el reformismo progresista de izquierda, y ambos podían coincidir en distintos foros. Con el nacionalismo tradicional de derecha se encontraba en otro terreno: el revisionismo histórico, donde la condena a Gran Bretaña y sus agentes locales derivaba en una reivindicación de la figura de Rosas hecha en nombre de valores diversos y antitéticos, desde la emancipación nacional hasta el integrismo católico.

La preocupación por lo nacional se manifestó en intelectuales y escritores. Tres notables ensayos expresaron intuiciones profundas sobre el “ser nacional” y dieron marco a una amplia reflexión colectiva. Scalabrini Ortiz publicó *El hombre que está solo y espera*; amalgamaba las diferentes tradiciones de un país de inmigración, se definía por sus impulsos, intuiciones y sentimientos, que antecorrespondían a cualquier elaboración o cálculo racional. Para Eduardo Mallea, tal amalgama era dudosa; observaba la crisis del sentido de argentinidad, particularmente entre las élites, ganadas por la vida cómoda, el facilismo y la apariencias, y renunciantes a la espiritualidad y las preocupaciones más profundas sobre el destino de la comunidad. En *Historia de una pasión argentina*, contraponía esa “Argentina visible” con otra “invisible”. Martínez Estrada era más radicalmente pesimista, y veía a la colectividad argentina presa de un destino fatal, originado en la misma conquista. En *Radiografía de la pampa*, señaló la escisión entre unas multitudes anárquicas, que acumulaban el resentimiento originado por el mestizo, y ciertas élites europeizantes e incapaces de comprender a esta sociedad y encarnar en ella un sistema de normas y de principios sustentado en creencias colectivas. Estos esfuerzos por develar la naturaleza del “ser argentino”, eran sin duda la expresión intelectual de esta nueva inquietud común por entender, defender o construir lo “nacional”.

El grupo de los partidarios de la ruptura con el Eje iba ganando nuevos adeptos, especialmente entre los grupos conservadores. Sin embargo, en pocos meses los principales dirigentes del bloque democrático murieron: en marzo de 1942, Alvear, en los meses siguientes, el ex presidente Ortiz y el ex vicepresidente Roca, y en enero de 1943, Agustín P. Justo, quien se perfilaba como el más firme candidato a encabezar una fórmula de acuerdo con los radicales.

Las dos alianzas políticas, que se sentían débiles, empezaron a cultivar a los jefes militares, esperando que las Fuerzas Armadas ayudaran a desequilibrar la situación trabada y a fortalecer un régimen institucional cada vez más débil. Cultivando a los militares, Castillo contribuyó a debilitarlo aún más. Los radicales, por su parte, se sumaron al nuevo juego y especularon con la candidatura del nuevo ministro de Guerra, Pedro Pablo Ramírez. Por su parte, los jefes militares discutieron casi abiertamente todas las opciones, y aparecieron grupos golpistas de diversa índole y tendencias, entre los cuales se destacó una logia, el Grupo de Oficiales Unidos. Muchos apostaban a la ruptura del orden institucional. Esta finalmente se desencadenó cuando Castillo pidió la renuncia del ministro Ramírez. El 4 de junio de 1943, el Ejército depuso al presidente e interrumpió por segunda vez el orden constitucional, antes aún de haber definido el programa del golpe, y ni siquiera la figura misma que lo encabezaría.

“Golpe de Estado: Aproximaciones al concepto, definiciones y tipología”- Herramientas

Existen una serie de elementos para comprender el significado de golpe de Estado. Influído por la historia del país donde se produce y condicionado por el momento particular en que sucede.

Esto quiere decir que las distintas definiciones acerca del concepto de golpe de Estado pueden variar según el contexto histórico y las implicancias que estos hechos manifiesten sobre la vida política de un país específico. La suma de la historia y el presente inmediato cuando el golpe ocurre determinan que cada golpe tenga características específicas.

Los momentos en que se produce un golpe de Estado son en general muy problemáticos. Los vínculos entre la sociedad y el Estado son siempre difíciles de entender ya que en ellos aparecen múltiples personajes y grupos, con estrategias ambiguas y, a veces, contradictorias o cambiantes.

No debe utilizarse la ecuación “buenos contra malos”. Pensar que los actores, sus intereses y sus acciones, son homogéneas, conduce a analizar erróneamente la realidad y a obtener conclusiones parciales y a menudo incorrectas.

El golpe de Estado siempre se propone producir una ruptura del régimen político existente hasta ese momento. El golpe (la acción de derribar a un gobierno constitucional) es el instrumento que permite conducir y producir ese cambio.

Por lo general, un golpe conduce un cambio desde un régimen democrático -que es el que cae- a otro dictatorial, que se impone por la utilización ilegal de la fuerza.

Un golpe de Estado es una acción que no está prevista en la ley y que interrumpe formas democráticas de elección de autoridades políticas.

En la Argentina esto ocurrió reiteradamente a través del sistema democrático desde comienzos del siglo XX, sobre todo, con la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña del año 1912 que inauguró la etapa de la democracia en el país.

Las leyes que regulan el régimen político están generalmente en las constituciones nacionales. Reglamentan la obediencia de los cuerpos armados del Estado a las autoridades políticas legítimas. Al desobedecer todo esto sin importar la causa que lo origine o justifique, es que el golpe de Estado se define como una acción inconstitucional y por ello fuera de la ley.

Necesariamente, un golpe de Estado involucra algún tipo de violencia por parte de quienes lo ejecutan. A veces, la presencia de la fuerza es muy visible, como en el golpe de 1930 que terminó el gobierno de Yrigoyen o en el de 1955 que expulsó a Perón del poder. En ambos momentos, con diferentes grados, las fuerzas militares salieron de los cuarteles donde están destinadas normalmente y aplicaron fuerza contra el gobierno democrático.

A veces, esta violencia es más solapada, como en 1962, que obligó a renunciar a Frondizi. Seguramente, estas diferencias tienen que ver con el grado de oposición que los líderes del golpe perciben de parte de la sociedad y de la fortaleza del gobierno que se busca derrocar.

En general, estos golpes fueron liderados y planificados por los militares pero también impulsados por distintos actores civiles. En muchas ocasiones, contaron con fuerte apoyo político y social y también de parte de ámbitos religiosos, gremiales, e incluso, internacionales.

La heterogeneidad de proyectos de los golpistas fue una característica común en la historia de las interrupciones militares en Argentina. Por ello, al poco tiempo de asumir el poder, los golpistas ya que no podían consolidar un núcleo de poder que los sostuviera en el tiempo.

Una característica muy común en los golpes de Estado en Argentina es que quienes los realizaron solo tenían en común el deseo de expulsar al presidente o al partido de gobierno y no poseían más acuerdos que ese.

Poco después del éxito de la rebelión militar, los problemas sociales o económicos que habían dado sustento al golpe, recrudecían. Ante la imposibilidad de resolver los problemas que la sociedad planteaba, los golpistas debían volver a convocar a elecciones y dar paso a una transición a la democracia.

Cuando retorna la democracia, los golpistas vuelven a encontrar un factor común, y otra vez vuelven a conspirar.

Cada golpe de Estado posee objetivos y representa intereses determinados que pueden no tener nada que ver con otros golpes de Estado anteriores o posteriores. Por esto, la única manera de interpretar las circunstancias que dieron origen a un golpe es analizar cada caso en forma independiente.

Una vez que el golpe de Estado es comprendido en su especificidad puede plantearse un estudio más profundo.

Un golpe de Estado es un hecho que tiene características propias y, por lo tanto, diferentes a las de otros golpes de Estados, pero también numerosos elementos comunes.

En Argentina, hubo muchas interrupciones de gobiernos constitucionales. Los aspectos a considerar para caracterizar un golpe de Estado y que permiten distinguirlo de otros son:

1. Las causas que conducen al hecho del golpe
2. El liderazgo y los actores que lo llevan a cabo, sus intereses y discursos
3. Como se desarrolla
4. Las consecuencias y efectos sobre el sistema político y la vida social.

Por lo general, las causas que llevan a un golpe de Estado, se emparentan con la existencia de una profunda crisis política, institucional o económica de una nación. El gobierno democrático de turno pierde la legitimidad ante parte de la ciudadanía. La población,

entonces, no cree que el gobierno democratico pueda solucionar los problemas que se enfrentan.

En ese marco de crisis, el gobierno democratico tambien pierde el control de las instituciones que monopolizan la fuerza, pierden el apoyo de sectores con poder y que podrian evitar el golpe. Finalmente, los golpistas se aprovechan de ambos factores: una situacion de crisis que no puede ser solucionada y la falta de apoyo al gobierno.

Los golpes de Estado en que las Fuerzas Armadas toman el poder y son el grupo mas importante de la coalicion golpista, son denominados golpes militares. Todas las instituciones existentes quedan bajo la orbita militar. Son los jefes de dichas fuerzas quienes eligen al presidente y suprimen el parlamento; eligen a los gobernadores, intendentes y embajadores que muchas veces son hombres de armas.

La constitucion queda relegada y se prohíbe la actividad politica en cualquier ambito. Tambien, los actores civiles pueden organizar un golpe de Estado con el objetivo de cambiar el rumbo politico de un pais a traves de la violacion y de la falta de reconocimiento de la legalidad constitucional vigente. A este tipo se lo puede denominar golpe institucional.

Este tipo de golpe de Estado no ha sido caracteristico en la historia argentina, aunque un tipo de accion de este estilo ocasiono el fin del gobierno de Fernando De la Rúa. Sin embargo, aquellos sucesos no ocasionaron un cambio de regimen, ya que el sucesor de De la Rúa asumió la presidencia siguiendo lo previsto por la Constitucion Nacional.

Por otro lado, tambien puede ocurrir que un mismo gobierno -originalmente democratico-realice un golpe para quedarse en el poder. Esto puede suceder porque visualiza que lo puede perder en las elecciones o porque no se puede reelegir.

En este caso, el llamado autogolpe de Estado, significa que un presidente que ya habia sido elegido por la via democratica se convierte en un dictador. En Argentina, no se registran este tipo de golpes.

Un nuevo tipo de golpe de Estado es el llamado golpe de mercado. A partir de la decada de 1980, el descredito de los militares luego de la guerra de Malvinas impidio que se produjera otro nuevo golpe de Estado. Sin embargo, la inestabilidad de los presidentes democraticos continuo.

Durante el golpe de mercado se utilizan el mercado financiero y la economia como armas (corridas contra la moneda nacional, subidas de dolar, inflacion). Incluye los llamados saqueos y movilizaciones informales de sectores marginados bajo la batuta de grupos politicos que buscan crear una sensacion de descontrol y perdida de orden.

La combinacion de ambos (descontrol economico y desorden social) produce la perdida de legitimidad del gobierno. Los ciudadanos no confian en que el Estado resuelva la crisis economica y garantice el orden social. Tambien, suele aparecer en la poblacion un temor generalizado por la posible proliferacion de hechos de violencia social. En Argentina, este tipo de aceleracion golpista fue la que acelero el fin del gobierno de Raul Alfonsín y termino con el de Fernando De la Rúa.

Durante el siglo XX, en nuestro pais, se sucedieron seis golpes de Estado militares, en los siguientes años: 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976. Cada uno de esos golpes adopto diferentes características en relacion con los objetivos y actores que los llevaron a cabo.

Otros países atravesaron experiencias autoritarias muy breves o fueron directamente inexistentes, como Colombia, Venezuela y Costa Rica. Países como Chile y Uruguay tuvieron golpes de Estado que perduraron en el tiempo, pero en un número menor que Argentina. Brasil y Paraguay transitaron por dictaduras muy largas, o por sistemas autoritarios como México.

Los cuatro primeros golpes en Argentina se establecieron dictaduras provisionales y, luego, los gobiernos que surgieron de ellos, llamaron a elecciones. En los últimos dos golpes, las dictaduras triunfantes intentaron establecer un gobierno de largo plazo.

El primer golpe militar de la historia argentina se realizó el 6 de septiembre del año 1930 y fue liderado por el general Uriburu. Este golpe derrocó al presidente Yrigoyen de la Unión Cívica Radical que había sido elegido a través del voto popular para ejercer su segundo mandato en 1928.

No tuvo el apoyo activo de numerosos sectores de las fuerzas armadas, aunque sí de la prensa, la Iglesia y los partidos opositores. Perón fue una pieza importante de este proceso.

Posteriormente y a pesar de su origen claramente ilegal, Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la Nación por la Corte Suprema. Esto dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares.

La dictadura de Uriburu y sus continuadores utilizaron la proscripción (prohibición de presentarse a elecciones para algunos de los líderes opositores) del radicalismo y el control absoluto de los resultados electorales a través del fraude patrimonial realizado por las Fuerzas Armadas. Este hecho dio inicio a lo que se denominó la “década infame”, un gobierno falsamente democrático restringido.

El golpe de junio de 1943 fue importante en la historia del país, más allá de la brevedad e inestabilidad de los gobiernos que inauguró.

Este golpe derrocó al gobierno de facto anterior, fue el único que tuvo solo intervención militar, no tuvo causas económicas sino que surgió como respuesta a la intención del gobierno fraudulento de Castillo de romper la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial, volcándose así al bando aliado por Estados Unidos. Contrariamente, los responsables del golpe de 1943 admiraban el modelo italiano liderado por Mussolini, sobre todo, el orden social que había logrado dejando de lado el “peligro comunista”. En este golpe se volvió a participar (y esta vez con mucho más protagonismo) Juan Domingo Perón, quien llegaría hasta ser vicepresidente del gobierno militar.

El gobierno surgido de este golpe no tenía pretensiones de permanecer mucho tiempo en el poder, por lo que fue una dictadura con carácter transitorio. Sin embargo, se desencadenaron dos golpes internos. Tres dictadores se autoproclamaron presidentes sucesivamente: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell.

El siguiente golpe (1955) se caracterizó por su antiperonismo y la violencia ejercida contra los seguidores del general Perón, quien había sido electo en 1945 y reelegido en 1951. Otra particularidad que presentó este golpe se relaciona con la falta de acuerdo entre quienes formaban parte de la coalición golpista. Esto trajo conflictos internos con respecto a la gobernabilidad, por ello el presidente surgido de dicho golpe debió renunciar al poco tiempo de asumir, dejando el lugar a otro militar.

Los golpes contra los gobiernos radicales fueron también particulares. En el caso del gobierno de Arturo Frondizi, se mantuvo la fachada constitucional en forma superficial, como si el presidente hubiera renunciado voluntariamente, cuando no fue así. Fue público y notorio que Frondizi abandonó el gobierno por la constante presión y extorsión de los militares.

Las diferencias entre los militares que ocasionaron el golpe contra Frondizi se hicieron públicas al punto que se dirimieron por las armas en el recordado suceso de “azules contra colorados”.

En el caso del golpe que derrocó al presidente Arturo Illia, lo llamativo es que el país no vivía ninguna crisis económica. Por el contrario, se trató de un momento de estabilidad y crecimiento.

Vale decir que fue un golpe de Estado ocasionado por diferencias políticas y las ambiciones de distintos actores que no estaban dispuestos a esperar el final del mandato del radical. El golpe contra Illia contó con el activo apoyo del peronismo a través de la participación sindical y las ambiguas señales enviadas por el mismo Perón desde España, donde se encontraba exiliado.

El golpe de Estado liderado por el general Onganía se propuso conformar un gobierno de largo plazo y con objetivos que buscaban imponer un cambio estructural en la economía y en la sociedad argentina. No lo logró, además, debió renunciar como consecuencia de un movimiento social que encontró en el llamado “Cordobazo” su momento más simbólico.

El último golpe de Estado se caracterizó por haber sido el más sangriento de la historia argentina. Se impuso el terrorismo de Estado y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se produjeron docenas de miles de desaparecidos, muertos, secuestros y exilios.

La derrota en la Guerra de las Malvinas y la quiebra económica del país, ocasionaron un desastre de tal magnitud que arrastraron con ellos la idea de que los militares podían servir para algo más allá de gestionar la vida en los cuarteles.

Hasta el día de hoy no se ha registrado ningún otro gobierno militar.

Por lo expuesto, el golpe de Estado ha sido un protagonista ineludible en la historia argentina. Sin embargo, como método habitual de influencia política no es el culpable ni el responsable de los desencuentros ni de la decadencia de la sociedad argentina.

La interrupción del régimen democrático por la fuerza es el síntoma y la muestra de profundos desacuerdos y de la imposibilidad de una sociedad (con sus grupos antagonistas) de llegar a consensos y a una estabilidad del régimen, aun con sus diferencias.

“Dictadura: un concepto complejo” - Herramientas

Existen muchas definiciones del concepto dictadura. En terminos generales, ellas coinciden en que una dictadura es aquel gobierno por el cual una o varias personas asumen sin limite alguno el control del Estado en un pais. Es la forma que adopta el gobierno de un regimen no democratico.

Estos gobiernos dictatoriales incluyen cualquier posibilidad de division de los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), propios de una republica. Nadie puede ponerles limites a la persona o grupo que ejerce el poder. En este tipo de gobierno, el Estado esta directamente personificado en la figura del dictador.

Bajo una dictadura, los parlamentos (poder Legislativo) son anulados, ya que no hay elecciones. Ademas, aunque las hubiera, estas serian fraudulentas o con procripciones.

Ni siquiera los jueces pueden actuar independientemente, ya que son designados arbitrariamente segun la voluntad del dictador y de su grupo. Los integrantes de una dictadura buscan garantizar la impunidad de sus actos. Por el contrario, en un regimen democratico los jueces son designados por el Senado.

Por otro lado, los derechos y garantias constitucionales de los que todo ciudadano debe poder gozar quedan suspendidas o bien, anuladas. Ello implica que el poder que pueden ejercer los gobernantes sobre los gobernados no conoce ninguna restriccion. Tampoco hay restricciones en cuanto a la duracion del regimen, es decir, no tiene plazo de finalizacion previsto.

Una dictadura implica la restriccion o supresion de las libertades de expresion, reunion y asociacion como se ha dado varias veces en nuestro pais. En la ultima dictadura argentina iniciada en 1976, tambien se aplico la persecucion de opositores, la prohibicion de actividad politica y sindical, la desaparicion forzada de personas y la censura en radio, television, periodicos y libros.

La coaccion pura puede servir inicialmente para mantener el dominio sobre una sociedad, pero al transcurrir el tiempo, se hace necesario algun grado de consenso. Todo gobierno necesita de una legitimidad que complementa el uso de la fuerza a la hora de convencer sobre la necesidad de su dominio sobre una sociedad.

La dictadura tratara de mantenerse en el poder, en tanto dure la causa que supuestamente le dio origen. De modo que el problema de la duracion de una dictadura esta unido en forma inseparable al de la legitimidad.

Para lograr legitimidad, las dictaduras generalmente se consolidan en el poder apelando a un supuesto interés público. A veces con promesas de recuperar un orden perdido, o de luchar contra alguna amenaza. En otras ocasiones, para garantizar un bienestar económico o enfrentar una crisis. Pero solo buscan atender los intereses de una persona o de un grupo y, para cumplir con sus objetivos, dejan de lado cualquier otra consideración o demanda social. Este tipo de gobiernos se instaura rompiendo con el orden político anterior. A veces, no solo ignoran o violan la constitución, sino que también la reemplazan.

En ocasiones, una dictadura también puede surgir de un gobierno democrático. Este caso ocurre cuando un gobernante electo democráticamente decide hacer un autogolpe de Estado y disolver a los restantes poderes o eliminar las garantías institucionales. Por ejemplo, ante la posibilidad de perder el poder por la vía electoral.

La dictadura, se origina en la República Romana como una institución constitucional para ser ejercida solamente en momentos excepcionales. En aquella época, la dictadura adoptaba la forma de una magistratura, o sea, un cargo o función dentro del Estado.

Esta magistratura solo se podía aplicar en forma extraordinaria en casos de peligro o de amenaza exterior, o cuando por algún conflicto interno, la situación social se volviera incontrolable. Si alguno de esos sucesos ocurría, el Senado podía autorizar a los consules a designar a un funcionario que se llamaba dictador.

Una vez elegida la persona que ocuparía esta función se le otorgaba un poder absoluto y las decisiones que tomaba eran inapelables. No obstante, también quedaban algunos controles en pie. Solo podía mantenerse en su cargo en un lapso temporal muy definido y breve. Ejercía una función prevista, designada y legitimada por el régimen político romano. Si bien todos los restantes cargos ejecutivos quedaban suspendidos, los consules mantenían sus potestades.

La dictadura se daba pues en conformidad con la constitución del Estado. No la violaba, sino que estaba establecida para salvar frente a una amenaza muy puntual.

Las dictaduras que se han llevado a cabo en los últimos años (a partir de XX) difieren de lo que fue en sus orígenes. En su versión contemporánea, la dictadura no posee ningún tipo de control ni está prevista en la legislación y mucho menos tiene un plazo determinado para su duración.

También, hay otros usos del término “dictadura”. En la teoría marxista-leninista se utiliza la expresión “dictadura del proletariado” para hacer referencia al gobierno de los trabajadores o proletarios en el marco del triunfo del sistema socialista.

Los trabajadores no tienen los medios de producción de la riqueza, sino que apenas su fuerza de trabajo por la que obtienen un magro salario. Por ello, una vez que derrotaran al sistema capitalista conformarían esta dictadura para consolidar y desarrollar el proceso revolucionario socialista.

En América Latina, en algunos casos, no es fácil acordar sobre el carácter dictatorial de un régimen. Los regímenes dictatoriales tienen características, que permiten definirlos o encasillarlos sin mayor dificultad (por ejemplo, el periodo de Hitler o Videla). Sin embargo, en otras ocasiones, hay casos dudosos o que dificultan ser caracterizados de una manera directa. Por eso, se requieren profundos análisis.

Para los ciudadanos de una sociedad determinada, tampoco resulta siempre evidente que una dictadura sea mas ilegítima que el poder “normal” o constitucional al que sustituye. Las dictaduras también pueden poseer algún tipo de consenso civil.

Una dictadura puede ser de diferentes tipos, abarcando desde un autoritarismo superficial al totalitarismo más inhumano. En esta última opción, el gobernante tratará de utilizar todo su poder para imponer una ideología determinada o para convertirse el mismo en un Dios sobre la tierra, con poder de vida y muerte sobre la población. Este fue el ejemplo del fascismo o el nazismo.

También, pueden encontrarse dictaduras que buscan imponer en una religión determinada o para mantener el poder, o solo para enriquecerse sin darles mayor importancia a las ideas. Incluso pueden encontrarse dictaduras basadas en la existencia de personalidades lindantes con la locura.

Las dictaduras que imperaron en América Latina durante el siglo XX fueron ejercidas generalmente por gobiernos militares que utilizaron el pretexto de encauzar Estados debilitados por gobiernos democráticos ineficientes. Esta ineficiencia se observaba tanto en la imposibilidad de resolver crisis económicas como para luchar contra la subversión. Con este concepto, quienes integraban una dictadura se referían a grupos armados, generalmente de izquierda, que planteaban un cambio radical del régimen político.

Para “salvar” a la nación de estos grupos izquierdistas armados, los militares realizaron golpes de Estado. Al no tener controles de ningún tipo, cometieron toda suerte de atrocidades, justificando su accionar en la lucha antiguerrillera o anticomunista. En la práctica, aplicaron un terrorismo de Estado indiscriminado, a la vez que trataban de ocultar tales hechos ante la opinión pública nacional e internacional.

En la dictadura, la parcialidad y la arbitrariedad se rigen como normas permanentes, formales o informales, sin ninguna intervención organizada de los ciudadanos ni de otras instituciones representativas como elementos que controlen o balanceen al poder estatal. La dictadura es la forma de gobierno de un régimen político no democrático.

“El gobierno de Peron, 1943-1955”- Breve historia contemporánea de la Argentina

El gobierno militar que asumió el 4 de junio de 1943 fue encabezado sucesivamente por los generales Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell. Juan Domingo Peron, uno de los miembros más destacados, logró concitar un vasto movimiento político en torno de su persona, que le permitió ganar las elecciones en febrero de 1946, poco después de que su apoyo popular se manifestara en una jornada por demás significativa, el 17 de octubre de 1945, para ser derrocado por un golpe militar en septiembre de 1955. En estos 12 años en que fue la figura central de la política, al punto de dar su nombre al movimiento que lo apoyaba, Peron y el peronismo imprimieron a la vida del país un giro sustancial y perdurable.

La revolución del 4 de junio fue inicialmente encabezada por el general Rawson, quien renunció antes de prestar juramento, y fue reemplazado por el general Ramírez. Existía una indefinición acerca del rumbo a seguir, más allá de coincidir en la convicción de que el orden constitucional estaba agotado y que la proclamada candidatura de Patron Costas no llenaría el vacío de poder existente. Se constituyó casi exclusivamente con militares, y el centro de las discusiones y de las decisiones estuvo en el Ministerio de Guerra, controlado por un grupo

de oficiales organizado en una logia, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), en torno del ministro de guerra Farrell.

Los militares en el gobierno coincidían en la necesidad de acallar la agitación política y la protesta social: proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron la Confederación General del Trabajo, disolvieron Acción Argentina y más tarde hicieron lo mismo con los partidos políticos, intervinieron las universidades dejando cesante a un vasto grupo de profesores de militancia opositora y finalmente establecieron la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El tono de este régimen militar fue autoritario, antiliberal, mesianico, obsesionado por la fundación de un orden social nuevo y por evitar el caos del comunismo que sería la secuela inevitable de la posguerra.

Sin embargo, en el gobierno había otros proaliados y muchos partidarios de mantener la neutralidad que había practicado el gobierno de Castillo. Por otra parte, en 1943 la guerra estaba evolucionando de un modo tal que un alineamiento con el Eje era impensable. El Departamento de Estado emprendió una cruzada contra los militares, desinteresándose de las repercusiones internas de su acción e ignorando los gestos de acercamiento del gobierno argentino. Esto permitió a los más acérrimos partidarios de la neutralidad ganar posiciones, de modo que el conflicto se desarrolló en una escalada creciente: para Estados Unidos era una cuestión de prestigio y un imperativo moral acabar con los militares, y para estos, una cuestión de principio no aceptar el diktat del Departamento de Estado. Luego de que Ramírez decidiera romper relaciones con el Eje, fue desplazado por los oficiales más decididamente antiestadounidenses. Aislado en lo interno y también en lo externo, el gobierno se encontró metido en un callejón sin salida. Esta fue finalmente proporcionada por uno de los oficiales que por entonces había ascendido en forma notable dentro del gobierno: el coronel Juan Domingo Perón, uno de los miembros más influyentes de la GOU, secretario del ministro Farrell y luego ministro cuando este reemplazó a Ramírez en la presidencia en febrero de 1944. Luego de desplazar a varios posibles competidores, Perón llegó a ser vicepresidente y el alma verdadera del gobierno.

Perón sobresalía entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miras políticas. La clarividencia y la preocupación lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero. Se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales y se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas: además de dirimir conflictos específicos, por la vía de contratos colectivos, que supervisaba la Secretaría, se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y, en general, se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de las plantas. La sanción del Estatuto del Peón innovó en lo sustancial, pues extendió estos criterios al mundo rural, introduciendo un elemento público en las relaciones manejadas hasta entonces en forma paternal y privada.

Desde la Secretaría del Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro, esbozados durante el gobierno de Yrigoyen y apenas utilizados durante la década del treinta. La reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. Más recientemente, y antes gobiernos muy poco interesados en desempeñar ese papel mediador,

habian hecho un acuerdo con los partidos politicos opositores, en el que los reclamos sindicales se fundian con la demanda democratica. La tendencia original sindicalista, sin embargo, no habia desaparecido: en 1942, la CGT se dividio entre un sector mas afin a los partidos opositores, encabezado por los comunistas y muchos de los dirigentes socialistas, y otro mas identificado con la vieja linea sindicalista, donde se alineaban los gremios ferroviarios. El Frente Popular perdia atractivo, pero a la vez la polarizacion de la guerra lo revitalizaba; las mejoras ofrecidas eran demasiado importantes como para rechazarlas o enfrentar al gobierno. Los sindicalistas adoptaron lo que Torre llamo una estrategia oportunista: aceptaron el envite del gobierno sin cerrar las puertas a la "oposicion democratica".

Peron, estaba dispuesto a hablar con todos los sectores de la sociedad y la politica y capaz de sintonizar con cada uno el discurso adecuado, aunque dentro de una constante apelacion a "todos los argentinos". A sus colegas militares les señalaba los peligros que entrañaba la posguerra, la amenaza de desordenes sociales y la necesidad de un Estado fuerte que interviniera en la sociedad y en la economia, y que a la vez asegurara la autarquia economica. Insistio en la importancia de profundizar las politicas de seguridad social, asi como de asegurar la plena ocupacion y la proteccion del trabajo, ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas en la guerra. A los empresarios les señalo la amenaza que entrañaban las masas obreras desorganizadas y el peligro del comunismo. Pero los empresarios fueron desconfiando cada vez mas del "bombero piromaniaco" que agregaba combustible a la caldera, hasta el limite de su estallido, y al mismo tiempo controlaba la valvula de escape. Progresivamente, las agrupaciones patronales fueron tomando distancia de Peron y de la politica de la secretaria, mientras este en paralelo acentuaba su identificacion con los obreros, subrayaba su perdida anticapitalista y desarrollaba ampliamente en su discurso los motivos de la justicia social. A la vez, se fueron reduciendo las reticencias de los dirigentes sindicales, quienes encontraban en los partidos democraticos un eco y un interes mucho menor que el demostrado por el coronel Peron.

La oposicion democratica, que para definir su propia identidad habia encontrado en el gobierno militar un enemigo mucho mas adecuado que el viejo regimen oligarquico, empezo a reconstituirse a medida que el avizorado fin de la guerra hacia mas facil la intransigencia del gobierno. La liberacion de Paris dio pie a una notable manifestacion claramente antigubernamental, y desde entonces un vigoroso movimiento social gano la calle y revitalizo los partidos politicos. El gobierno mismo estaba en retirada y ante la inminencia del fin del conflicto, acepto el reclamo de Estados Unidos y declaro la guerra al Eje, condicion para ser emitidos en las Naciones Unidas, que empezaban a constituirse. Al mismo tiempo, y por iguales razones, liberalizo su politica interna. Los partidos politicos opositores reclamaron la retirada lisa y llana de los gobernantes y la entrega del poder a la Corte Suprema, ultimo vestigio de la legalidad republicana, y sellaron su acuerdo para las elecciones que veian proximas: la Union Democratica expresaria el repudio de la civilidad a los militares y la total adhesion a los principios de los vencedores de la guerra. El frente politico, que incluia comunistas, socialistas y demoprogresistas, y contaba con el apoyo implicito de los grupos concervadores, estaba animado por los radicales.

En septiembre de 1945, una multitudinaria Marcha de la Constitución y de la Libertad terminó de sellar la alianza política, pero también social, que excluía a la mayoría de los sectores obreros, otrora animadores del Frente Popular.

El ejército, presionado por la opinión pública y ganado por la desconfianza al coronel sindicalista, forzó su renuncia el 8 de octubre. Una multitud se concentró el 17 de octubre en la Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón y su restitución a los cargos que tenía. Los partidarios de Perón en el ejército volvieron a imponerse, el coronel habló a la multitud en la plaza y volvió al centro del poder, ahora como candidato oficial a la presidencia.

Lo decisivo de la jornada de octubre no residió tanto en el número de congregados cuanto por su composición, definitivamente obrera. Su emergencia coronaba un proceso hasta entonces callado de crecimiento, organización y politización de la clase obrera. La ocupación industrial había crecido y que la masa de trabajadores industriales había empezado a engrosar con migrantes rurales, expulsados por la crisis agrícola. En el marco de sus organizaciones, y encabezados por sus dirigentes, quienes todavía no habían despejado todas sus dudas respecto del coronel, marcharon el 17 a la plaza de Mayo, el centro simbólico de poder, materializando un reclamo que en primer lugar era político, pero que tenía profundas consecuencias sociales. Decidieron la crisis en favor de Perón, inauguraron una nueva forma de participación, a través de la movilización, definieron una identidad y ganaron su ciudadanía política, sellando al mismo tiempo con Perón un acuerdo que no se rompería.

Con las elecciones a la vista, Perón y quienes lo apoyaban se dedicaron a organizar su fuerza electoral. Los dirigentes sindicales, fortalecidos por la movilización de octubre, decidieron crear el partido político propio, el Laborista. Su organización aseguraba el predominio de los dirigentes sindicales, y su programa recogía diversos motivos, desde los más estrictamente socialistas hasta los vinculados con el dirigismo económico y el Estado de bienestar. En el nuevo partido, Perón era, nada más o nada menos, el primer afiliado y el candidato presidencial, una posición todavía más distante de la jefatura plena que asumiría luego. Perón promovió una escisión en el radicalismo, la Unión Cívica Radical - Junta Renovadora, a la que se integraron unos pocos dirigentes de prestigio. Las relaciones entre laboristas y radicales renovadores fueron malas: aquellos pretendían que el coronel Mercante, que había secundado a Perón en la Secretaría de Trabajo, lo acompañara en la fórmula, pero debieron conformarse con colocarlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Apoyaron también a Perón muchos dirigentes conservadores de segunda línea, y sobre todo lo respaldaron el ejército y la iglesia, que en una pastoral recomendó, con pocos eufemismos, votar por el candidato del gobierno que había perseguido al comunismo y establecido la enseñanza religiosa.

La Unión Democrática incluyó a los partidos de izquierda, pero excluyó a los conservadores, que debieron resignarse a apoyarla desde fuera o pasarse calladamente al bando de Perón, movidos por la vieja rivalidad con el sindicalismo. Su programa era socialmente progresista, pero su impacto quedó diluido por el entusiasta apoyo recibido de las organizaciones patronales. Sin embargo, para sus dirigentes y para la masa que esa coalición movilizaba, lo esencial pasaba por la defensa de la democracia y la derrota del totalitarismo, que había sucedido y en cierto modo prolongado al gobierno fraudulento.

Peron asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la reforma justa y posible, a la que solo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. Estas actitudes sociales, se venían elaborando en los diez o veinte años anteriores, lo que explica el eco suscitado por las palabras de Peron, que contrapuso la democracia formal de sus adversarios a la democracia real de la justicia social, y dividió la sociedad entre “el pueblo” y “la oligarquía”. Un segundo componente de estos cambios, las actitudes nacionalistas, emergió en forma brusca como respuesta a la intempestiva intervención en la elección del embajador estadounidense Braden, quien, reanudando el virulento ataque del departamento de Estado contra Peron, acusado de ser un agente del nazismo, respaldó públicamente a la Unión Democrática. La respuesta fue contundente: “Braden o Peron” agregó una segunda y decisiva antinomia y terminó de configurar el bloque del nacionalismo popular.

El 24 de febrero triunfó Peron por alrededor de 300 mil votos de ventaja, equivalentes a menos del 10% del electorado. En las grandes ciudades, fue evidente el enfrentamiento entre los grandes agrupamientos de trabajadores y los de clases medias y altas. Peron había ganado las elecciones, pero el peronismo estaba todavía por construirse.

El nuevo gobierno mantuvo la política antiestadounidense, que elaboró luego en la doctrina de la “tercera posición”, distanciada tanto del comunismo como del capitalismo, pero estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, e hizo lo posible para mejorar sus relaciones con Washington. El congreso aprobó en 1946 las Actas de Chapultepec, que permitían el reingreso a la comunidad internacional, y al año siguiente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmada en Río. Pero la hostilidad estadounidense, alimentada por viejas razones económicas y motivos políticos más recientes, no disminuyó, y Estados Unidos siguió dispuesto a hacer pagar a la Argentina por su independencia durante la guerra. El boicót fue sistemático. El bloqueo a armamentos e insumos vitales no pudo mantenerse en la posguerra, salvo en algunos casos, pero el comercio exterior era vulnerable. Las exportaciones industriales a los países limítrofes, que habían crecido mucho durante la guerra, empezaron a retroceder ante la competencia estadounidense. Las exportaciones agrícolas a Europa fueron obstaculizadas por Estados Unidos, restringiendo los transportes o vendiendo a precios subsidiados.

En 1948, se lanzó el Plan Marshall, pero Estados Unidos prohibió que los dólares aportados a Europa se usaran para importaciones de la Argentina. Ya desde 1949, las economías europeas se recuperaron, Estados Unidos inundó el mercado con cereales subsidiados y la participación argentina disminuyó drásticamente.

Gran Bretaña no aceptó las presiones estadounidenses para restringir sus compras en Argentina. Además de la carne, estaban en juego las libras argentinas bloqueadas en Londres durante la guerra y las inversiones británicas radicadas en el país. La magnitud de las deudas británicas hacía impensable el pago de las libras. La pésima situación de las empresas ferroviarias, la descapitalización y la obsolescencia y la pérdida general de rentabilidad hacían conveniente para los británicos desprenderse de ellas. Luego de una larga y compleja negociación, se arregló la compra de los ferrocarriles por un valor similar a las libras bloqueadas y un acuerdo sobre la venta de carne, que sería en lo sucesivo pagada en libras

convertibles. Se trataba sin duda de un éxito británico, frente a un país que no tenía mejor opción.

Vender cereales fue cada vez más difícil y vender carne, cada vez menos interesante. La consecuencia fue una reducción de la producción agropecuaria, que se acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno.

La Segunda Guerra Mundial, la crisis de los mercados y el aislamiento acentuado por el boicó estadounidense, habían contribuido a profundizar el proceso de sustitución de importaciones iniciado en la década anterior, que, extendiéndose más allá de los límites considerados “naturales”, avanzó en el sector metalúrgico y otros. Siam Di Tella, creció notablemente con las heladeras, a las que después sumó ventiladores, planchas y lavarropas. En algunos casos se exportó a países vecinos, que también padecían falta de los suministros habituales. Creció así, junto con las empresas industriales tradicionales, una amplia capa de establecimientos medianos y pequeños, y aumentó en forma notable la mano de obra industrial, que se nutría de la corriente de migrantes internos, cada vez más intensa.

El fin de la guerra y la conclusión de esa suerte de “vacío de poder” en el mundo, que había permitido el crecimiento de sectores industriales marginales como el argentino, planteaban distintas opciones. Abandonada definitivamente la idea de una vuelta a la “normalidad” previa a 1930 o a 1914, quienes estaban vinculados con los grupos empresarios más tradicionales adoptaban las ideas planteadas por Pinedo en 1940: estimular las industrias “naturales”, capaces de producir eficientemente y de competir en los mercados externos, asociarse con Estados Unidos para sustentar el crecimiento, y a la vez mantener un equilibrio entre el sector industrial y el agropecuario, del cual debían seguir saliendo las divisas necesarias para la industria. La opción era difícil, no solo por la necesidad de recomponer la relación con Estados Unidos que estaba muy deteriorada, así como de procurar firmemente recuperar los mercados de los productos agropecuarios, sino porque suponía una fuerte depuración del sector industrial, eliminar el segmento menos eficiente crecido durante la guerra al amparo de la protección natural que esta generaba y afrontar a la vez los costos de una difícil absorción de la mano de obra que quedaría desocupada. Una segunda alternativa había sido planteada por grupos militares durante la guerra, y recogía tanto motivos estratégicos de las Fuerzas Armadas como ideas que arraigaban en el nacionalismo: profundizar la sustitución, extenderla a la producción de insumos básicos, como el acero o el petróleo, mediante una decidida intervención del Estado, y asegurar así la autarquía. La imagen de la Unión Soviética estaba presente en esta propuesta, y en la subsecuente retórica de los planes quinquenales.

La solución fue ecléctica y también novedosa, y tuvo en cuenta principalmente los intereses inmediatos de los trabajadores, que constituían su apoyo más sólido. La inspiración autárquica de los militares se dibuja en el primer Plan Quinquenal, que debía servir para planificar la economía, pero se limitó a una serie de vagos enunciados, y también en la construcción de la empresa siderúrgica estatal Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), que sin embargo todavía seguiría casi en proyecto diez años después. Miranda, nombrado presidente del Banco Central, del poderoso Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y del Consejo Económico Social, fue durante tres años el conductor de la

economía. La política del Estado apuntó a la defensa del sector industrial instalado y a su expansión dentro de las pautas vigentes de protección y facilidad. Este recibió amplios créditos del Banco Industrial, protección aduanera para eliminar competidores externos y dividas adquiridas a tipos preferenciales para equiparse. Además, las políticas de redistribución de ingresos hacia los sectores trabajadores contribuían a la expansión sostenida del consumo. En ese singular período, la alta ocupación y los salarios en alza trajeron aparejada una expansión de la demanda y una inflación cuyos niveles empezaron a elevarse, pero a la vez ganancias importantes para los empresarios.

Perón había optado por el mercado interno y por la defensa del pleno empleo. Desafiando las leyes de la contabilidad, y con la esperanza puesta en una nueva guerra mundial, en esos años se gastó en el exterior mucho más de lo que entraba. El IAPI monopolizó el comercio exterior y transfirió al sector industrial y urbano ingresos provenientes del campo, mediante la diferencia entre los precios pagados a los productores y los obtenidos por la venta de las cosechas al exterior. Los productores rurales padecían también por la falta de insumos y maquinarias, el congelamiento de los arrendamientos, que afectó el ciclo natural de recuperación de la fertilidad de la tierra, y el costo más alto de la mano de obra, debido a la vigencia del Estatuto del Peón. Todas estas razones agudizaron la caída de la superficie cultivada, al tiempo que el aumento del consumo interno reducía aún más las disponibilidades para la exportación.

La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía; desarrollo tendencias iniciadas en la década anterior, bajo las administraciones conservadoras, pero las extendió y profundizó, según la corriente de inspiración keynesiana difundida en muchas partes durante la posguerra. A la vez, hubo una generalizada nacionalización de las inversiones extranjeras, particularmente de empresas controladas por capital británico, que se hallaba en pleno proceso de repatriación. A los ferrocarriles se le sumaron los teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de electricidad del interior, sin afectar sin embargo a la legendaria Compañía Argentina de Electricidad (CADE) que servía a la capital. Se dio fuerte impulso a Gas del Estado, construyendo el gasoducto desde Comodoro Rivadavia, a la Flota Mercante y a la incipiente Aerolíneas Argentinas. Pero la reforma más importante fue la nacionalización del Banco Central. Desde él se manejaba la política monetaria y la crediticia, y también el comercio exterior, pues los depósitos de todos los bancos fueron nacionalizados, y al Banco Central se le asignó el control del IAPI.

Así, la nacionalización de la economía y su control por el Estado fueron una de las claves de la nueva política económica. La otra tuvo que ver con los trabajadores, con el mantenimiento del empleo y con la elevación de su nivel de vida. El temor de las posibles consecuencias sociales del desempleo, el recuerdo de la crisis de la primera posguerra, así como la misma experiencia europea de entreguerras, y también de posguerra, deben haber influido no solo en el diseño político más general, sino en el privilegio, en materia de política económica, de la salvaguardia del empleo industrial primero y de la redistribución de los ingresos después. Pero a la vez, la justicia social sirvió para el sostenimiento del mercado interno. Por la vía de las negociaciones colectivas, garantizadas por la ley, los salarios empezaron a subir

notablemente. A ello se le agregaron vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o los sistemas sociales de medicina y de turismo, actividades en las que los sindicatos tuvieron un importante papel. Por otros caminos, el Estado benefactor contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida: congelamiento de los alquileres, establecimiento de salarios mínimos y de precios máximos, mejora de salud pública, planes de vivienda, construcción de escuelas, colegios, organización del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social.

Compleja relación establecida entre los trabajadores y el Estado. Los términos en que esta se había desarrollado hasta las elecciones en seguida se modificaron radicalmente después del triunfo. Justificándose en la innumerable cantidad de conflictos entre laboristas y radicales renovadores, Perón ordenó la disolución de los distintos nucleamientos que lo habían apoyado, y entre ellos el Partido Laborista, a través del cual los viejos sindicalistas aspiraban a conducir una acción política autónoma, solidaria con Perón pero independiente. La decisión -que culminaría en la creación del Partido Peronista- fue al principio resistida. Poco después, en enero de 1947, Perón eliminó de la dirección de la CGT a Luis Garay, veterano gremialista e inspirador del Partido Laborista, y uno de los propulsores del proyecto autónomo, y lo reemplazó por un dirigente de menor cuantía, indicando así la voluntad de subordinar al Estado la cúpula del movimiento obrero. Una vez más, no hubo resistencias: probablemente para el grueso de los trabajadores, la solidaridad con quien había hecho realidad tantos beneficios importaba más que una autonomía política cuyos propósitos, en ese contexto, no resultaban claros.

Pero a la vez, la organización obrera se consolidó firmemente. La ley de asociaciones profesionales aseguraba la existencia de grandes y poderosas organizaciones con fuerza para negociar de igual a igual con los representantes patronales, pero a la vez dependientes de la "personería gremial", otorgada por el Estado. Las orientaciones y demandas circulaban preferentemente desde arriba hacia abajo, y la CGT, conducida por personajes mediocres, fue la responsable de transmitir las directivas del Estado a los sindicatos y controlar a los discolos. Similar fue la función de los sindicatos respecto a las organizaciones de base: controlar, achicar el espacio de acción autónoma, intervenir las secciones demasiado inquietas; a la vez, se hicieron cargo de funciones cada vez más complejas, tanto en la negociación de los convenios como en las actividades sociales, debieron desarrollar una administración especializada, de modo que la fisonomía de los dirigentes sindicales, convertidos en una burocracia estable, se diferenció notablemente de la de los viejos luchadores. La acción sindical conservó una gran vitalidad, por obra de las comisiones internas de fábrica, se ocuparon de infinidad de problemas inmediatos referidos a las condiciones de trabajo, negociaron directamente con patrones y gerentes, y establecieron en la fábrica un principio bastante real de igualdad. En los primeros años, hasta 1949, las huelgas fueron numerosas, y se generaron al impulso de las reformas lanzadas desde el gobierno, para hacerlas cumplir o extenderlas, con la convicción por parte de los trabajadores de que se ajustaban a la voluntad profunda de Perón.

Este sin embargo, se preocupaba por esa agitación sin fin y procuraba profundizar el control de movimiento sindical. Los gremialistas que lo acompañaron al inicio fueron alejándose,

reemplazados por otros elegidos por el gobierno y mas proclives a acatar sus indicaciones. Se procuro solucionar los conflictos mediante los mecanismos del arbitraje, y en su defecto se opto por reprimirlos, ya sea por mano del propio sindicato o de la fuerza publica. Desde 1947, Eva Peron, esposa del presidente, se dedico desde la Secretaria del Trabajo a cumplir las funciones de mediacion entre los dirigentes sindicales y el gobierno, facilitando la negociacion de los conflictos con un estilo muy personal que combinaba la persuasion y la imposicion.

La relacion entre Peron y el sindicalismo fue sin duda compleja, negociada y dificilmente reducible a una formula simple. Pese a la fuerte presion del gobierno sobre los sindicatos a la decision de controlar su accion, estos nunca dejaron de ser la expresion social y la politica de los trabajadores. El Estado peronista, a su vez, tenia en los trabajadores su gran fuerza legitimadora, y los reconocia como tal; y no de un modo retorico o abstracto, sino referido a sus organizaciones y a sus dirigentes, a quienes concedio un lugar destacado.

Pero a la vez, procuro extender sus apoyos a la amplia franja de sectores populares no sindicalizados, con quienes establecio una comunicacion profunda a traves de Eva Peron y de la fundacion que llevo su nombre. La Fundacion realizo una obra de notable magnitud: creo escuelas, hogares para ancianos o huérfanos y policlinicos; repartio alimentos y regalos navideños; estimulo el turismo y los deportes, a traves de campeonatos infantiles o juveniles de dimension nacional, bautizados con los nombres de la pareja gobernante. Las unidades basicas detectaban los casos particulares de desproteccion y transmitian los pedidos a la Fundacion donde, por otra parte, la propia Eva Peron recibia cotidianamente y sin fatiga una permanente caravana de solicitantes que obtenian una maquina de coser, una cama en el hospital, una bicicleta, un empleo o una pension quizas, un consuelo siempre. Eva Peron resultaba asi la encarnacion del Estado benefactor y providente, que a traves de la “dama de la esperanza” adquiria una dimension personal y sensible. La experiencia de la accion social directa, sumada al reiterado discurso del Estado, terminaron constituyendo una nueva identidad social, los “humildes”, que completo el arco popular de apoyo al gobierno.

Con mayor o menor fortuna, el Estado aspiro a organizar a los empresarios, reuniendo en la Confederacion General Economica (CGE) a todas las representaciones sectoriales, asi como los estudiantes universitarios o a los profesionales. Con la iglesia existio un acuerdo basico, que se tradujo en el poco velado apoyo electoral de 1946. El gobierno peronista mantuvo la ensenanza religiosa en las escuelas, y concedio la conduccion de las universidades a personajes vinculados con el clericalismo hispanofilo. Fue sin embargo una relacion algo distante: un grupo importante de eclesiasticos, preocupados por el autoritarismo creciente, se alineo firmemente en el lado de los opositores; otros lamentaron la renuncia de Peron a las consignas nacionalistas, y muchos otros miraron con reservas algunos de los aspectos de la politica democratizadora de las relaciones sociales, como por ejemplo la igualacion de derechos entre hijos “naturales” y “legitimos”.

Con respecto a las Fuerzas Armadas, aunque Peron recurrio de manera habitual a oficiales para desempeñar funciones de importancia, se ciudo inicialmente tanto de inmiscuirse en su vida interna como de darles cabida institucional en el gobierno. Procuro conservar la

identificación establecida en 1943 entre las Fuerzas Armadas y un gobierno del que se quería continuador.

Según la concepción de Perón, el Estado además de dirigir la economía y velar por la seguridad del pueblo, debía ser el ámbito donde los distintos intereses sociales, previamente organizados, negociaran y dirimieran sus conflictos. Esta línea se inspiraba en modelos muy definidos por entonces, que pudieran filiarse tanto en Mussolini como en el mexicano Cárdenas, y rompía con la concepción liberal del Estado.

En 1947 reemplazó la Corte Suprema mediante un juicio político escasamente conveniente. Utilizó con amplitud el recurso de intervenir las provincias; en muchos casos, y en la mejor tradición argentina, lo hizo para resolver cuestiones entre sectores de su heterogénea cohorte de apoyos. Una ley acabó en 1947 con la autonomía universitaria, estableciendo que toda designación docente requería de un decreto del Ejecutivo. El Poder Legislativo fue formalmente respetado, pero se lo vació de todo contenido real: los proyectos se preparaban en oficinas de la presidencia, y se aprobaban sin modificaciones; los opositores fueron acusados de desacato, incluidos de la Cámara o desaforados. En 1951, una modificación del sistema de circunscripciones electorales redujo al mínimo la representación opositora en la Cámara de Diputados. El avance del Ejecutivo llegó también al “cuarto poder”: con recursos diversos, el gobierno formó una importante cadena de diarios y otra de radios, que condujo desde la Secretaría de Prensa y Difusión. Los diarios independientes fueron presionados de mil maneras: cuotas de papel, restricciones de circulación, clausuras temporarias, atentados, y en dos casos extremos la expropiación. La reforma de la Constitución, realizada en 1949, acabó con la última y gran salvaguardia institucional al autoritarismo y estableció la posibilidad de la reelección presidencial. Dos años después, en noviembre de 1951, Perón y Juan H. Quijano fueron reelectos, obteniendo en la ocasión alrededor de las dos terceras partes de los sufragios.

Para Perón, tan importante como afirmar la preeminencia del Ejecutivo sobre el resto de las instituciones republicanas fue dar forma al heterogéneo conjunto de fuerzas que lo apoyaba, provenientes de diferentes sectores. A todo ello había que darle un disciplinamiento y una organización acordes con los principios políticos más generales del peronismo. Para ello recurrió al uso de la autoridad de Estado para disciplinar las fuerzas propias, y uno novedoso, la utilización de su liderazgo personal e intransferible -compartido con su esposa-, que se constituyó de manera natural, pero que luego fue cuidadosamente alimentado por la maquinaria propagandística. En el Congreso, Perón exigió de cada senador o diputado una renuncia en blanco, como garantía de su disciplina. El Partido Peronista, adoptó una organización totalmente vertical, donde cada escalón se subordinaba a la decisión del nivel superior, hasta culminar en el líder, presidente del país y del partido, con derecho a modificar cualquier decisión partidaria.

Además de terminología militar, la organización incluía un elemento revelador: en cada nivel se integraba la autoridad pública ejecutiva respectiva -intendente, gobernador o presidente-, con lo cual quedaba claro, y puesto por escrito, que movimiento y nación eran considerados una misma cosa. Lo que inicialmente fue la doctrina peronista se convirtió en la Doctrina Nacional. Estado y movimiento, movimiento y comunidad confluían en el líder, quien

formulaba la doctrina y la ejecutaba, de manera elástica y pragmática, con su arte de conductor que, aunque personal e intransferible, podía ser enseñado a quienes asumieran los comandos subordinados. Se combinaban aquí las tradiciones del Ejército, donde la conducción es un capítulo fundamental del mando, y la de los modernos totalitarismos, que, en su versión fascista, sin duda impresionaron a Perón.

Esta retórica era indudablemente ajena a la tradición política principal del país, liberal y democrática. Por otra parte, si el peronismo sego sistemáticamente los ámbitos de participación autónoma, ya fueran estos partidarios, sindicales o civiles, y tuvo una tendencia a penetrar y “peronizar” cualquier espacio de la sociedad civil, no es menos cierto que encarnó y concretó un vigorosísimo movimiento democratizador, que aseguró derechos políticos y sociales de vastos sectores hasta entonces al margen, y culminó con el establecimiento del voto femenino y la instrumentación de medidas concretas para asegurar a la mujer un lugar en las instituciones.

Esta singular forma de democracia se constituía desde el Estado. Los diversos actores que conformaban su base de sustentación eran considerados como “masas”, es decir, un todo indiferenciado, cuya expresión autónoma o específica no era valiosa, y que debía ser moldeado, inculcándole la “doctrina”. A ello se dirigía la propaganda masiva, que saturaba los medios de comunicación y también la escuela. El régimen tuvo una tendencia definida a “peronizar” todas las instituciones y a convertirlas en instrumentos de adoctrinamiento. Sería difícil dudar de la eficacia de estos mecanismos, que se traducían en un sufragio masivo en favor de Perón o de los candidatos por él indicados.

Pero la forma más característica y singular de la política de masas eran las movilizaciones y las concentraciones. Realizadas en días fijos y en ocasiones especiales, conservaban mucho del pathos desafiante, espontáneo y contestatario de la movilización fundadora del peronismo, pero ritualizado y atemperado, más en memoria y potencia que en acto. Ya no eran espontáneas sino convocadas, con suministro de medios de transporte, ordenadas y encuadradas, y hasta incluyeron controles de asistencia. Sobre todo, eran jornadas festivas, despojadas de elementos de enfrentamiento real, salvo con la metafórica “oligarquía” o “antipatria”, que expresaban antes la unidad de la nación que de sus conflictos.

Al renovar el pacto fundador entre el líder y el pueblo, las grandes concentraciones cumplían un papel fundamental en la legitimación plebiscitaria del régimen, que era considerada mucho más importante que la electoral. Todo preparaba el momento privilegiado de la recepción del discurso del líder, quien, al apelar desde el “balcón” a los “compañeros”, incluía tanto una definición de su lugar, más allá de las pasiones y de los conflictos, como de quienes lo apoyaban y aceptaban su dirección, y de los enemigos, calificados como la antipatria y, como tales, excluidos del sistema de convivencia pues “a los enemigos, ni justicia”.

La oposición terminó ocupando el lugar asignado en el sistema. La derrota de 1946 desarticuló totalmente el proyecto de la Unión Democrática y confrontó a los partidos opositores con una cuestión difícil: desde dónde enfrentar a Perón. Los socialistas apartados de toda representación política, mantuvieron su caracterización del “nazifascismo”, denunciaron los avances hacia el autoritarismo y consideraron que la prioridad era acabar con el régimen; los grupos de socialistas que intentaban una postura más comprensiva hacia los trabajadores que

habia adherido al peronismo no lograron quebrar la solida y ya anquilosada estructura partidaria. Algo similar ocurrio en el Partido Comunista: hubo un periodo de acercamiento y simpatica compresion, por la via de las organizaciones de los trabajadores, que culmino con la expulsion de los dirigentes que la propiciaron. Los conservadores sufrieron el cimbronazo de una cantidad de dirigentes que se “pasaron”, pero finalmente el atiguo frente se reconstruyo en una linea de oposicion frontal, fundada en la defensa de la legalidad republicana.

En el radicalismo, el proceso fue mas amplio. La derrota de 1946 abrio el camino a la renovacion partidaria y una coalicion de intransigentes renovadores y sabattinistas, criticos de la estrategia de la Union Democratica, desplazo a los “unionistas” que venian del tronco alvearista. El Movimiento de Intransigencia y Renovacion, sin renunciar a la defensa de la Constitucion y de la republica, combatio al peronismo desde una posicion que se presentaba como mas progresista, tanto en lo social como en lo nacional, y lo hizo con mas soltura a media que el regimen, por las exigencias del gobierno, fue abandonando sus posiciones iniciales mas avanzadas. Mientras el grupo unionista optaba por el desafio frontal y especulaba con un golpe militar, los intransigentes discutieron en el Congreso cada uno de los proyectos gubernamentales, coincidieron a veces y señalaron objeciones fundadas y atendibles en muchos casos.

La virulencia del discurso politico y, sobre todo, los encendidos ataques a la “oligarquia” no se correspondian con una actividad social real ni mucho menos con una gran guerra social, como parecia desprenderse de aquellos. El regimen peronista no ataco ningun interes fundamental de las clases altas tradicionales, aunque algunos segmentos de ellas pudieron verse afectados por la politica agropecuaria. Hubo, si, incorporaciones de empresarios exitosos, y sobre todo de quienes supieron aprovechar vinculaciones y prebendas para hacer jugosos negocios. En el imaginario social ocupó un lugar importante el “nuevo rico”, que se mezcló con los nuevos integrantes de una elite dirigentes que, ciertamente, era mucho mas variada que la anterior a 1945: los sindicalistas ocuparon puestos visibles, junto con una camada de politicos, deportistas y artistas. Las clases medias tradicionales tuvieron quizas mas motivos de queja, en especial quienes gozaban de rentas fijas, reducidas por la inflacion, o quienes perdieron sus empleos estatales. Pero en cambio se nutrieron de nuevos y vigorosos contingentes llegados por las vias mas tradicionales de la sociedad argentina: la modesta prosperidad economica de los trabajadores y de la educacion de sus hijos, pues una de las características salientes de estos años fue la formidable expansion de la matricula en la enseñanza media y la no menos notable expansion de la universitaria.

Las migraciones internas habian venido modificando en profundidad la fisonomia de los sectores populares. En ellas, la crisis de la agricultura pampeana operó de manera tan fuerte como la oferta de trabajo industrial, y estabilizada esta, fue la mera atraccion de la vida en las ciudades, que reflejaba los procesos de modernizacion y aparicion de expectativas y aspiraciones nuevas, generalizadas por la radio y el cine. Durante los años finales de la decada del treinta y el periodo de la guerra, predominaron los migrantes de las zonas pampeanas mas cercanas y luego se incorporaron los provenientes del interior tradicional, con quienes se contruyo la imagen social de “cabecita negra”. Con ellos se expandieron los cinturones de las ciudades donde se repitió una historia social ya conocida: el lote modesto, la

casita precaria, construida por partes -con la novedad de los planes sociales de vivienda- y en esfuerzo societario para urbanizar el lugar.

Estimulados y protegidos por el Estado peronista, y aprovechando una holgura economica novedosa, los sectores populares se incorporaron al consumo, a la ciudad, a la politica. Compraron ropas y calzados, y tambien radios o heladeras, y algunos las “motonetas” que el lider se encargaba de promocionar. Viajaron por el pais, gracias a los planes de turismo social, y accedieron a los lugares de esparcimiento y diversion, aprovechando la generalizacion del sabado ingles y aun el asueto sabatino total para algunos de ellos. Se llenaron las canchas de futbol, las plazas y los parques, el Parque Retiro y los lugares de baile donde la musica folclorica recordaba la vieja identidad y facilitaba la asuncion de la nueva. Invadieron la ciudad, incluso el centro, y lo usaron todo. Ejercieron plenamente una ciudadania social, que nacio intimamente fusionada con la politica.

El reconocimiento de la existencia del pueblo trabajador y el ejercicio de nuevos derechos estuvieron asociados con la accion del Estado, y la justicia social fue una idea clave y constitutiva tanto del discurso del Estado -que derivó de ella la doctrina llamada “justicialista”- como de la nueva identidad social que se constituía. Todo ello habia decantado en una percepcion, racional y emotiva a la vez, de las injusticias de la sociedad, unida a una accion racional para solucionar sus aspectos mas visibles, para alcanzar mejoras, quizá modestas pero posibles e inmediatas, en las que el Estado benefactor tenia la responsabilidad principal y la propia organizacion de los interesados era la relegada a una situacion anciliar. Lo singular fue la combinacion de esta nueva concepcion con aquella otra mas espontanea y verdaderamente constitutiva de la sociedad argentina moderna: la ideologia de la movilidad social. La accion del Estado no sustituia la clasica aventura individual del ascenso, sino que aportaba el empujon inicial, la eliminacion de los obstaculos mas gruesos, para que los mecanismos tradicionales pudieran empezar a funcionar. Los trabajadores se integraron a la nacion de la mano del Estado y a la vez se incorporaron a la sociedad establecida, de cuyos bienes acumulados aspiraban a disfrutar, con practicas tipicas ya desarrolladas por quienes, en epocas anteriores, habian seguido el mismo proceso de integracion.

El Estado facilitó el acceso a dichos bienes. Al fuerte estimulo de la educacion se agregó la proteccion y promocion de las diversas actividades culturales. El Estado distribuía y el publico recibia, junto con los bienes, una dosis masiva de propaganda. La mayoría de los diarios y todas las radios fueron manejadas, directa o indirectamente, desde la Secretaria de Prensa y Difusion. Se instaló en las escuelas, *La razon de mi vida*, el libro de Eva Peron, y fue establecido como texto obligatorio.

Distribuía tambien una cierta vision de la tradicion nacional, manifiesta en la preocupacion por develar el mitico ser nacional que debia unificar a la comunidad. Curiosamente, para este movimiento alguna vez sugerido del nacionalismo, esa tradicion se encarnaba en primer lugar en Jose de San Martin, El Libertador, que prefiguraba al segundo libertador, y luego en la mas clasica tradicion liberal, la de Justo Jose de Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca, con cuyos nombres fueron bautizadas las lineas de los ferrocarriles nacionalizados. Un pasado negro y un presente rosa, un antes y un ahora, eran los elementos centrales que organizaban los textos y los discursos peronistas.

Esa construcción discursiva, y la forma elegida de difundirla, no necesitaron tanto de verdaderos intelectuales como de mediadores un poco militantes y otro poco obsecuentes. Ciertamente, pese al apoyo disponible, la creación intelectual y artística fue escasa en el medio oficial, donde pueden recordarse pocas figuras notables. Los mejores intelectuales y creadores críticos e innovadores convivieron, junto con los de la antigua cultura establecida y un poco caduca, en instituciones surgidas al margen del Estado, y animadas por un cierto fuego sagrado. Quizá lo más novedoso de estos años en materia de creación cultural haya sido el auge del teatro “independiente”, cultivado por artistas no profesionales, donde encuentro terreno adecuado una renovada producción nacional que contrasta con la chatura repetitiva de los grandes teatros comerciales o estatales.

El peronismo había surgido, en los años de la guerra y la inmediata posguerra, en el marco de un fuerte conflicto social, alimentado desde el mismo Estado. Con el correr del tiempo, derivó, por una parte, en un fuerte enfrentamiento político, que separaba al oficialismo de la oposición, y, por otra, en un conflicto que, más que social, era cultural. El Estado había trabajado mucho para encuadrar los conflictos sociales en una concepción más general de la armonía de clases, la comunidad de intereses y la negociación, que el arbitraba, y a la vez había desplazado el conflicto al campo del imaginario de la sociedad.

Fue un conflicto cultural, infinitamente más violento que el existente entre los intereses sociales básicos, el que opuso lo “oligarquico” con lo “popular”. Lo popular combinaba dimensiones trabajadora e integrativa, y carecía de aquellos componentes clasistas que, en otras sociedades, se manifiestan en una cultura más cerrada en sí misma. No se apoyó en un modelo cultural diferente del establecido, sino en una manera diferente y más amplia de apropiarse de él, de participar de algo juzgado valioso y ajeno. En esa perspectiva, la oligarquía era la que pretendía restringir el acceso a esos bienes y excluir al pueblo. Se trataba de una definición precisa en cierto modo, sobre todo ético, pero socialmente era muy difusa, y permitía combinar un violento ataque discursivo -en particular, en la voz de la plebeya de Eva Perón- con escasas acciones concretas en contra de los supuestos destinatarios, la “oligarquía encerrada en sus madrigueras”. Inversamente, desde la oposición, la resistencia de las prácticas políticas del peronismo se combinaba con la irritación ante la forma peronista del proceso de democratización social: hubo en ellos mucho de reacción horrorizada frente a la pérdida de la deferencia y el respeto, que juzgaban producto de las medidas de ridiculización, tanto del nuevo rico como del humilde habitante urbano, incapaz de manejar con destreza los instrumentos de la nueva cultura o comprender sus claves, y a menudo encandilado con sus manifestaciones más superficiales.

Fueron dos configuraciones culturales antagónicas y excluyentes, que se negaron mutuamente pero que compitieron por la significación de un campo común. En torno de Eva Perón se libró un combate de este tipo. Confrontaron dos versiones antagónicas e igualmente estilizadas, frente a las cuales el verdadero personaje se fue esfumando: a la Dama de la Esperanza se le contrapuso la Mujer del Latigo, dos versiones de la misma imagen de la mujer y sus funciones, elaborada por las clases medias, de la cual unos y otros pretendían apropiarse. Más visible aun fue la disputa en torno a la imagen de los “descamisados”, que en la práctica aludía al acto ritual de los dirigentes a sacarse el saco en las ceremonias oficiales,

quizá para lucir sus camisas de seda. En lugar de una imagen diferente que cambiara los términos del conflicto asumiendo la propia identidad obrera, hubo una asunción positiva del descamisado, una apropiación y resignificación de la imagen del otro, como si el conflicto cultural se librara en el campo ya organizado por los sectores tradicionales.

La coyuntura externa favorable en la que surgió el Estado peronista comenzó a invertirse hacia 1949: los precios de los cereales y las carnes volvieron a su normalidad y los mercados se contrajeron, mientras que las reservas acumuladas, consumidas con poca previsión, se agotaron. La situación era grave, pues el desarrollo de la industria, quizá paradójicamente, había al país más independiente de sus importaciones: combustibles, bienes intermedios como acero o papel, repuestos y maquinarias, cuya falta dificultaba el desenvolvimiento de la industria y provocaba, finalmente, inflación, paro y desocupación. Los primeros signos de la crisis llevaron en 1949 a la caída de Miranda, reemplazado por un equipo de economistas profesionales. Las medidas no evitaron que, tres años después, la crisis del sector externo se repitiera, agravada por dos sequías sucesivas. En ese duro invierno de 1952, la gente debió consumir pan negro, elaborado con mijo, faltó la carne y los cortes de luz fueron frecuentes. También en ese invierno murió Eva Perón, uno de los símbolos de la prosperidad perdida.

Precisamente en 1952 el gobierno adoptó con firmeza un nuevo rumbo económico, ratificado luego en el Segundo Plan Quinquenal, mucho más específico que el anterior. Para reducir la inflación, se restringió el consumo interno: fueron eliminados subsidios a distintos bienes de uso popular, se estableció una veda parcial al consumo de carne y se levantó el congelamiento de los alquileres; además, Perón hizo una apelación a la reducción voluntaria y consiente del consumo, de sorprendente efecto. Se proclamó la “vuelta al campo”: IAPI apuntaba a aumentar la disponibilidad de divisas para seguir impulsando el desarrollo del sector industrial, clave para todo el andamiaje del peronismo.

El estancamiento industrial era evidente. En los años anteriores, y al amparo de una amplia política proteccionista, había proliferado un extenso sector de medianos y pequeños establecimientos, en general muy poco eficientes, que subsistía de alguna manera al amparo de las grandes fábricas y de sus elevados precios. Las ramas de los alimentos y de textiles, que encabezaron el crecimiento, habían llegado al límite de sus posibilidades en el mercado interno, pero el principal problema del sector industrial era su reducida eficiencia, oculta por la protección y los subsidios que por distintas vías recibía el Estado. A la maquinaria obsoleta se le sumaba el deterioro de los servicios, particularmente la escasa electricidad y los deficientes transportes, sobre todo ferroviarios, cuya renovación el Estado había abandonado. Por último, la industria empleaba una alta proporción de mano de obra, y el peso de los salarios resultaba particularmente alto y difícil de reducir debido a la alta ocupación y a la fuerte capacidad sindical de negociación. La expansión de la demanda, que al principio compensaba los costos salariales altos, había perdido su efecto dinamizador, de modo que el problema comenzó a ser gravoso para los empresarios.

La nueva política económica apuntó a esos problemas. Se restringió el crédito industrial y el uso de divisas, y se dio una nueva prioridad a las empresas grandes y sobre todo a las industrias de bienes de capital: el proyecto siderúrgico de SOMISA fue reactivado y se

procuró iniciar la fabricación de tractores y automóviles. Los contratos colectivos de trabajo fueron congelados por dos años. A principios de 1955, se convocó a empresarios y sindicalistas para discutir las cuestiones de la productividad y afloraron los temas que preocupaban a aquellos: la ineficiencia de la mano de obra, el poder excesivo de los legados de la fábrica, el ausentismo los lunes.

El gobierno puso sus mayores esperanzas en algo que desde entonces sería el tema central de las políticas económicas: la concurrencia de capitales extranjeros, que empezaron a ser imaginados por unos como la piedra filosofal y por otros como el caballo de Troya de la economía. En 1953, el gobierno sancionó una ley de radicación de capitales. Suponía una modificación fundamental respecto de los postulados de la independencia económica y la tercera posición. Esto ocurrió en el marco de una visible reconciliación con Estados Unidos. En el marco de esta política comenzaron a concretarse algunos proyectos, que madurarían luego de 1955: la FIAT italiana se interesó en tractores, autos y motores; la Mercedes Benz se radicó para fabricar camiones y la Kaiser instaló en Córdoba una planta de automóviles, ya obsoleta en Estados Unidos. Lo más importante fue el proyecto petrolero: en 1954, el gobierno firmó con una filial de la Standard Oil de California un contrato de explotación de 40 mil hectáreas en la provincia de Santa Cruz, con amplios derechos. Se trataba de una medida que desafiaba convicciones hondamente arraigadas y que suscitó un amplio debate público, por lo que Perón prefirió enviarlo al Congreso para su ratificación. Allí fue discutido tanto por la oposición como por sectores del propio peronismo, cuya voz más visible fue el joven diputado Cooke, y no llegó a ser ratificado.

Los logros de la nueva política económica fueron modestos: se redujo la inflación y se reequilibró la balanza de pagos, pero no se apreciaron cambios más sustanciales en el agro y en la industria. Ni se recurrió a la devaluación -el gran instrumento con el que posteriormente se operaron rápidas y sustanciales transferencias de ingresos entre sectores- ni se redujo el gasto público, que en buena medida subsidiaba a los sectores asalariados. En ese sentido, esta nueva política económica se mantenía dentro de la tradición peronista.

Los comienzos de la crisis económica fueron acompañados de importantes manifestaciones de disconformidad entre dos de los principales apoyos del régimen, los sindicatos y el ejército, cuya solución implicó un avance en el camino del autoritarismo. En 1949, en dos ocasiones las huelgas, fueron de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar, que nucleaba a los trabajadores azucareros de Tucumán; finalmente fue declarada ilegal y se intervino el sindicato. Luego fueron los bancarios, los gráficos y los ferroviarios. Estas últimas constituyeron un fuerte desafío al régimen, por su visibilidad imposible de ignorar y porque ocurrieron al margen de la complaciente e ineficaz dirección del sindicato; los trabajadores, golpeados por la política de hacer muy costosos los ferrocarriles, siguieron a antiguos gremialistas opositores, y su voluntad ni siquiera pudo ser torcida por Eva Perón, que jugó su prestigio recorriendo patéticamente los talleres ferroviarios y reclamando a “sus” trabajadores solidaridad con Perón. Este finalmente optó por aplicar una dura represión: prisión a los dirigentes rebeldes y movilización militar a los obreros.

Los problemas con los militares siguieron a un avance inicial del régimen sobre la institución. Frankling Lucero, nuevo ministro de ejército, se preocupó de ganar apoyos entre los oficiales

y suboficiales, beneficiados con el derecho al voto, el uso de uniforme similar a los oficiales y un sistema de becas para educar a sus hijos, a lo que se agregó la posibilidad de “abrir los cuadros” y permitir su ascenso al cuerpo de oficiales. Todos estos beneficios, que suponían también el incremento de las rivalidades y suspicacias internas, apuntaban a lograr un compromiso más pleno por parte de quienes debían ser un componente central de la comunidad organizada.

El compromiso solicitado puso en evidencia todas las reticencias y dudas que el régimen suscitaba entre los militares. Se preguntaban acerca de la solidez de un orden proclamado, pero basado en la agitación popular permanente; se indignaban ante avances flagrantes del autoritarismo, como la expropiación del diario La Prensa y se irritaban sobre todo con Eva Perón. La proclamación de su candidatura a la presidencia, a la que ella renunció días después, fue sin duda difícil de tolerar. Estos y quizás otros motivos dieron el espacio mínimo para la acción de grupos de oficiales decididos a derribar a Perón, vinculados con aquellos políticos opositores embarcados ya en la misma ruta. En septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez encabezó un intento cínicamente sofocado. Perón aprovechó la intentona para establecer el estado de guerra interno y mantenerlo hasta 1955. Con ese instrumento se dedicó a depurar a los mandos militares de adversarios, sospechosos, tibios o vacilantes. A la vez, en plena campaña electoral, restringió aún más la acción de los políticos opositores y tuvo un aplastante triunfo en noviembre de ese año.

Perón inició un segundo período visiblemente consolidado por el nuevo plan económico, que parecía tener éxito, la victoria sobre rebeldes militares y sindicalistas y el espectacular triunfo electoral. Incluso la muerte de Evita fue la ocasión para unos funerales convertidos en singular manifestación plebiscitaria. El fin de la etapa revolucionaria podía hacer presuponer una marcha hacia la pacificación política y una relación más normal con los que disientían, en el marco de un cierto pluralismo. Pero había otras fuerzas que empujaban al mantenimiento y acentuación del rumbo autoritario.

En los tres años finales de su gobierno, Perón tuvo una conducta errática. Fue evidente la dificultad para llenar el vacío dejado por la muerte de Eva Perón: tanto en la Fundación como en el nuevo Partido Peronista Femenino en la misma CGT. Perón mismo pareció perderla, manifestó cierto cansancio y menor concentración en el trabajo y en la conducción política; pasó mucho más tiempo en la residencia de Olivos y se dedicó a exhibirse rodeado por adolescentes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), instaladas en la misma residencia, o a encabezar desfiles juveniles en motoneta -la última novedad en sustitución de importaciones-.

La UES era precisamente una de las nuevas manifestaciones de esa vía autoritaria, que procuraba encuadrar todos los sectores de la sociedad en organizaciones controladas y “peronizadas”. La máquina plebiscitaria, perfectamente organizada, producía regulares y previsibles convocatorias a la plaza. Se avanzó en la “peronización” de la administración pública y la educación, con la exigencia de la afiliación al partido, la exhibición del “escudito” o el luto por la muerte de Eva Perón, la donación de sueldos para la fundación y todo tipo de manifestaciones celebratorias del líder y su esposa, cuyos nombres fueron impuestos a estaciones ferroviarias, hospitales, calles, plazas, ciudades y provincias. La

“peronización” llegó a las Fuerzas Armadas: hubo cursos de adoctrinamiento justicialista, y las promociones y selección de jefes obedecieron desembozadamente a razones políticas. Los espacios de la oposición fueron reducidos al mínimo, en la prensa y en el Parlamento, donde el doctor Campora, presidente de la Cámara de Diputados, proclamó la superioridad de la obsecuencia sobre la consecuencia.

Mientras por esa vía el régimen marchaba hacia el totalitarismo, procuraba simultáneamente reconstruir un espacio de convivencia con los opositores, empezando por un objetivo mínimo: el reconocimiento recíproco. Algunos de sus dirigentes se animaron a acercarse al gobierno y dialogar: en 1951 el conservador Pastor tuvo una entrevista secreta, luego un ofrecimiento público de un grupo de dirigentes del Partido Comunista, encabezado por Juan José Real, que propuso integrarse a un Frente Popular Unido, pero chocó con el sólido anticomunismo peronista. A fines de 1952, fue el veterano dirigente socialista Dickman, quien negoció con Perón la liberación de presos políticos socialistas y la reapertura del periódico La Vanguardia, para ser inmediatamente expulsado del partido. Con apoyo oficial, Dickman fundó el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que recolectó disidentes varios de la izquierda, con el que Perón proyectó influidosamente dividir el socialismo.

Este tenue comienzo de una apertura terminó básicamente en abril de 1953: durante una concentración, y mientras hablaba Perón, estallaron en la Plaza de Mayo bombas colocadas por grupos opositores lanzados al terrorismo y murieron varias personas. La respuesta fue la misma en la clave violenta: grupos peronistas incendiaron la Casa Radical, la Casa del Pueblo socialista y el Jockey Club, centro emblemático de la ambigua y ubicua “oligarquía”; la Policía, llamativamente pasiva, se volvió activa para impedir el incendio del diario La Nación. Pero en la segunda mitad del año, el régimen se ablandó y aceptó liberar a los presos siempre que los partidos lo pidieran y dieran así prueba de reconocimiento al régimen, conducta que, discretamente, siguieron los partidos menores.

Por entonces el radicalismo había definido su perfil, encontrando un ángulo de oposición posible a un régimen que giraba simultáneamente al conservadurismo y al autoritarismo. Los unionistas, herederos del alvearismo y la Unión Democrática, estaban totalmente jugados a la abstención, la ruptura total y el golpe militar, y los sabattinistas de Córdoba se habían plegado a esa línea. El grupo de Intransigencia y Renovación, en cambio, insistió desde el comienzo en la lucha institucional e ideológica, y siguió haciéndolo pese a la reducción casi total de los espacios. En 1954, ganó definitivamente el control del partido, cuando Arturo Frondizi alcanzó la presidencia del Comité Nacional. Acusado de “rojo” por sus amigos internos, Frondizi había definido una imagen original de político intelectual. Lanzó la propuesta de combatir al peronismo desde lo que este tenía más progresista, y sin renunciar a la crítica institucional, reivindicar la reforma agraria y el antiimperialismo, tema que los contratos petroleros habían tornado urticante.

La Fundación del Partido Demócrata Cristiano parecía indicar que la iglesia se sumaba a esta visión en cierto modo postuma del régimen envejecido, y marcó el comienzo del conflicto entre Perón y la iglesia, que rápidamente lo llevó a su caída.

La Comunidad Organizada -o la peronización de las instituciones de la sociedad- era un proyecto con una dinámica propia, ejecutado por un conjunto de funcionarios, que ya

marchaba de manera independiente de la voluntad o del arte para conducir al líder. El ejército, al principio resguardo en su independencia y profesionalidad, había sucumbido en su camino, y las voces disconformes eran cada vez más fuertes. Pero la iglesia, con la que al principio había establecido un acuerdo mutuamente conveniente, era irreductible a él, y era eso potencialmente enemiga. El Estado peronista y la iglesia empezaron a chocar en una serie de campos específicos. La iglesia era sensible a los avances de aquel en un terreno de la beneficencia, a través de la Fundación, y en el de la educación; aquí, el desagrado por el creciente culto laico del presidente de la Nación y su esposa, se agregaba la preocupación por los avances del Estado en la organización de los estudiantes secundarios, en un contexto de sombrías sospechas de corrupción. Al gobierno lo turbaba la conspicua intromisión de la iglesia en la política, con la Democracia Cristiana.

El conflicto estalló en septiembre de 1954, cuando en Córdoba compitieron dos manifestaciones celebratorias del Día del Estudiante, una organizada por los católicos y otra por la UES. En noviembre Perón lanzó su ataque contra la iglesia; el enfrentamiento pareció enfriarse enseguida, pero se agudizó en diciembre, luego de la multitudinaria procesión en Buenos Aires en el día de la Inmaculada Concepción. Se prohibieron las procesiones, se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas, se introdujo una sorpresiva cláusula que permitía el divorcio vincular, se autorizó la reapertura de los prostibulos y se envió un proyecto de reforma constitucional para separar la iglesia del Estado. Muchos sacerdotes fueron detenidos, y los periódicos se llenaron de denuncias públicas y comentarios groseros sobre la conducta y la moralidad de prelados y sacerdotes.

La iglesia, atacada por los medios de comunicación monopolizados por el gobierno, inundó la ciudad con todo tipo de panfletos, mientras sus asociaciones laicas, y en particular la Acción Católica, movilizaban sus cuadros, engrosados por los opositores, que encontraron finalmente la brecha en el régimen y no se sintieron inhibidos por la tonalidad clerical, nacionalista e integrista que predominaba en la acción eclesial. El 16 de junio, se produjo un levantamiento de la Marina contra Perón.

Difícilmente la génesis del levantamiento se contraponía con este conflicto, pues la Marina era la más laica y liberal de las tres fuerzas, pero los golpistas encontraron aquí su ocasión. El proyecto de los marinos consistía en bombardear la Casa de Gobierno para asesinar a Perón; su ejecución, totalmente defectuosa, culminó en el bombardeo y ametrallamiento de una concentración de civiles reunida en Plaza de Mayo para apoyar a Perón.

También, esta explosión de furia fue seguida de una actitud conciliadora de Perón que, aunque triunfador, había perdido mucho de su libertad de maniobra. De modo súbito, concluyeron los ataques a la iglesia, que molestaban profundamente a la mayoría de los jefes militares. Perón declaró solemnemente que dejaba de ser el jefe de una revolución y pasaba a convertirse en el presidente de todos los argentinos. Los dirigentes opositores fueron invitados a abrir un debate público, utilizando los medios de prensa del Estado, incluyendo la cadena nacional de radiodifusión, a través de la cual pudo oírse a Arturo Frondizi invitar al gobierno a volver a la senda republicana y formular, con sobriedad, con verdadero programa de gobierno alternativo. Otros dirigentes pudieron hablar, pero al socialista Alfredo Palacios -que reclamó la renuncia del presidente- no se lo autorizó. Por entonces, Perón había

concluido que la posibilidad de abrir un espacio para la discusion democratica que lo incluyera era minima. El 31 de agosto, luego de presentar retoricamente su renuncia, convoco -por ultima vez- a los peronistas en la Plaza de Mayo, denunció el fracaso de la conciliacion y lazo el mas duro de sus ataques contra la oposicion: por cada uno de los nuestros, afirmo, caeran 5 de ellos.

El 16 de septiembre, estallo en Cordoba una sublevacion militar que encabezó el general Eduardo Lonardi. Las unidades del ejercito que se plegaron fueron escasas. Pero entre las fuerzas "leales" habia poca voluntad de combatir a los sublevados. A ellos se sumó la Marina en pleno, cuya flota amenazo con bombardear las ciudades costeras. Peron habia perdido por completo la iniciativa y tampoco manifesto la voluntad de defenderse moviendo todos los recursos de que disponia. El 20 de septiembre de 1955, Peron se refugio en la embajada de Paraguay y el 23 de septiembre el general Lonardi se presento en Buenos Aires como presidente provisional de la Nacion, ante una multitud tan numerosa como las reunidas por el regimen, pero sin duda distinta es su composicion.

"Definiendo al populismo"- Herramientas

La identificacion "lider populista", fue utilizada tanto de manera negativa como positiva, por opositores, medios de comunicacion, especialistas e investigadores academicos. Un analisis comparativo y detallado sobre las politicas que estos lideres impulsaron, el tipo de alianzas estrategicas que llevaron a cabo, el nivel de enfasis de sus discursos o el publico al que se dirigieron, arroja resultados visiblemente diferentes.

Entonces, a la pregunta sobre que se entiende por populismo pueden seguirle multiples y variadas respuestas. En contextos politicos, suele tener una connotacion negativa. Sin embargo, en la mayoria de las interpretaciones, el termino se asocia a un rasgo popular o proveniente del pueblo.

Diversos enfoques relacionan la aparicion de los populismos con diferentes causas. Una primera explicacion responde a cuestiones estructurales, como la modernizacion o industrializacion de las sociedades, asi como a las politicas sociales y economicas implementadas. En este punto, el populismo es la expresion de una sociedad que se moderniza, generando nuevos conflictos sociales frente a los cuales el lider populista actua como regulador de demandas.

Una segunda explicacion define al populismo como resultado de la crisis de representacion de los partidos politicos tradicionales. En este caso, los lideres populistas aparecen como la opcion personalista de la representacion colectiva, que permite superar la crisis e iniciar un nuevo proceso de confianza entre la sociedad y sus representantes.

Una tercera explicacion refiere a que el surgimiento de los liderazgos populistas se relaciona con el contexto socioeconomico de pobreza y marginalidad social que experimentan los paises latinoamericanos, en los cuales los populistas aparecen como lideres delegativos que devuelven las esperanzas sobre el rol del Estado, en busca de revertir la constante de retrocesos economicos y sociales.

A lo largo de la historia, una gran variedad de lideres y movimientos sociales y politicos fueron denominados populistas, sin explicar que cuestiones justificaban dicha denominacion y dificultando su conceptualizacion. Ademas, esta ultima se dificulta en la extensa capacidad

de adjetivación que presenta el concepto, la cual torna difusos los límites de su definición y complejiza su estudio.

Se pueden identificar distintos enfoques teóricos que definen al populismo como un término exclusivamente político. Touraine y Vilas definieron al populismo como un tipo de política que muestra el modo en que el Estado interviene en términos sociales. Se apela al pueblo y a la centralidad del Estado como agente de transformación.

Dornbusch y Edwards entienden al populismo como un tipo de política económica que se concentra en métodos redistributivos y de crecimiento, quitando importancia a los problemas de inflación y de aumento del déficit. Los autores advierten que las políticas populistas fracasan en última instancia y afectan a los grupos que buscaban favorecer.

Freidenberg señala que populismo es un concepto relacionado con un determinado estilo de liderazgo. Dicho liderazgo se caracteriza por la relación directa entre el líder y los seguidores. Estos líderes son carismáticos, personalistas y paternalistas y no reconocen mediaciones institucionales. En los liderazgos populistas los seguidores están convencidos de las cualidades extraordinarias del líder, confían en sus métodos redistributivos y en su relación clientelar por medio de la cual, estiman, obtendrán mejoras. Weyland define al populismo como una estrategia política llevada a cabo por un líder personalista para ejercer el poder sin control institucional, pero a través del apoyo directo y desorganizado de un gran número de seguidores.

Canovan señala que los populismos pueden entenderse como democracias inclusivas propuestas por líderes populistas, basadas en un lenguaje socialmente compartido y con altos niveles de glorificación. Los populismos latinoamericanos presentan vínculos estrechos con la democracia delegativa presentada por O'Donnell, en donde los ciudadanos encomiendan, entregan, confían el poder al ganador de la elección.

En tanto forma de hacer política, el populismo exhibe interpretaciones opuestas. Aboy Carlés señala que, debido a que busca ampliar los niveles de representación y profundizar la equidad social, el populismo se plantea como profundización de la democracia. Para Panizza es un “modo de identificación política que se encuentra disponible para cualquier actor político que opera en un campo discursivo en el que la noción de soberanía popular y su inevitable corolario, el conflicto entre dominados y dominantes, son parte central del imaginario político”.

Laclau y De Ipola definieron al populismo como un tipo de discurso político. Este discurso se caracteriza por la descalificación constante de “los otros” y por la interpelación a los individuos como miembros de un colectivo, que son víctimas directas de los intereses de esos “otros”. Lo que convierte a un discurso ideológico en populista, es su apelación al pueblo como referente básico.

Para Aboy Carlés, es tanto un “discurso de ruptura del orden político como un discurso de instauración del orden mediante la constitución de un nuevo orden político”.

Por último, Drake señala que el populismo se basa en la coalición heterogénea donde predomina la clase trabajadora a algunos sectores importantes de los estratos medios y altos que la dirigen.

Las posturas negativas respecto del populismo enfatizaban los peligros que encierra para la democracia representativa en el contexto de desencanto de los ciudadanos con la política; mientras que las visiones positivas destacan a los procesos populistas como formas de “resistencia” a la intrusión de agencias estatales y capitalistas.

De esta manera, el populismo se vincula al régimen político y a la calidad de la democracia, aunque los autores planteen interpretaciones diferentes respecto de su éxito o fracaso para lograrlo.

Al tomar como punto de referencia la conceptualización elaborada por Flavia Freidenberg “... el populismo afecta la institucionalidad y la convivencia democrática, subordinando las instituciones a las decisiones de un líder y enfrentando a los órganos del Estado entre sí; polarizando el discurso contra los que opinan diferente o critican al proyecto, y generando inclusión a través de prácticas de subordinación más que de empoderamiento de ciudadanos. Estos liderazgos plantean vínculos de suma cero: se está totalmente a favor o totalmente en contra. Junto al líder populista, hay ciudadanos populistas. Los votantes eligen tener un vínculo directo y emocional con el líder, al mismo tiempo que desconfían de los partidos tradicionales y de las instituciones para resolver sus problemas cotidianos. Por tanto, la manera en que se ejerce ese liderazgo y las razones que llevan a los ciudadanos a legitimar este modo de inclusión subordinada a la voluntad del líder, que dificulta la convivencia y la autonomía de las instituciones democráticas, son claves para comprender la dinámica política actual en Venezuela, Bolivia o Ecuador”.

Freidenberg señala que el populismo es un concepto relacionado con un determinado estilo de liderazgo. El liderazgo populista no se reduce al contexto social en el que se desarrolla, ni al tipo de políticas que impulsa ni al modelo económico que promueve, sino al tipo de relación que se instaura entre el líder y sus seguidores. Se vincula con el accionar de sus líderes, y con las diferencias que plantean con otros tipos de liderazgos.

5 elementos para la definición del populismo:

1. *El populismo y la democracia: la excusa de la herencia recibida.* Los líderes populistas se constituyen como una alternativa concreta que busca cambiar el sistema político, frente a otros actores tradicionales a los que acusa por el estancamiento que sufre el país. La “herencia recibida” se transforma en la excusa para el desarrollo de planes de gobierno sin mecanismos de control. En las democracias populistas se agota la capacidad de control de unas instituciones sobre otras, y se tensiona el Estado de Derecho. El populismo afecta la calidad y la institucionalidad de la democracia.
2. *Una relación directa con los seguidores.* El liderazgo es el resultado de la relación directa entre el líder y los seguidores, en la cual no existen intermediarios. Se caracterizan por una escasa intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, excepto en lo discursivo, en donde los ciudadanos esperan que el líder extraordinario “los salve”. En los liderazgos populistas los seguidores están convencidos, confían en sus promesas redistributivas y en la relación clientelar que entablan con el líder, por medio de la cual, estiman, obtendrán mejoras económicas y sociales.
3. *La polarización de la sociedad.* Los populistas polarizan la sociedad a partir de la exclusión discursiva de quienes no opinan como ellos. Dividen la sociedad en torno a

distintas políticas intermediadas por la cuestión “a favor” o “en contra” del líder. Se ofrecen “vínculos de suma cero”, es decir, se está totalmente a favor o totalmente en contra de los líderes. Dado que la política supone una unión en clave identitaria entre el líder y sus seguidores, los líderes populistas tienen dificultades para integrar a quienes no están de acuerdo con su proyecto.

4. *El sosten de las coaliciones.* El éxito electoral y político de estos líderes se sostiene mediante una coalición plural de sectores sociales que encuentran en el Estado un lugar donde representar sus intereses. Por tal motivo, el discurso populista se basa en la legitimidad mayoritaria, la cual sustenta el desarrollo de sus proyectos de cambio y justifica sus acciones. Las decisiones de gobierno no aceptan críticas ni reparos, ya que -supuestamente- atienden a la voluntad e intereses de la mayoría.
5. *Las cualidades extraordinarias.* Las supuestas cualidades extraordinarias de estos líderes populistas, así como su forma carismática, personalista y paternalista de ejercer el poder, facilitan un escenario con seguidores convencidos de sus características únicas y confiados en que su capacidad sostendrá sus métodos redistributivos. Dichos métodos se encuentran mediados por una relación clientelar, por medio de la cual, sus seguidores no solo tienen coincidencias con sus discursos y políticas, sino además, estiman, obtendrán mejores oportunidades mientras el líder está en el poder. En este punto aparece el problema de la continuidad de los gobiernos populistas, ya que resulta difícil encontrar a alguien que reemplace al líder y mantenga sus características personales y capacidades. Por esta razón, los líderes populistas tienden a perpetuarse en el poder, o a mantenerlo a través de personas de su estricta confianza.

En los países latinoamericanos en los que se identificaron los líderes populistas, estos realizan un fuerte cuestionamiento del orden institucional establecido, siempre bajo la dialéctica amigo/enemigo y el rechazo a los límites de su poder.

La historia argentina ofrece variados ejemplos de liderazgos populistas, siendo Juan Domingo Perón su principal representante; mientras que algunos autores encuentran en Hipólito Yrigoyen a un populista temprano, o ven en Carlos Menem un neopopulista.

Los gobiernos posneoliberales representaron la llegada al poder de los gobernantes Rafael Ángel Ángel Corre, Evo Morales, Hugo Chávez, José Mujica, Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, y con ello una nueva consideración sobre el liderazgo populista.